**Dictámenes y Acuerdos correspondientes a la Cuarta Sesión del Segundo Período Ordinario de Sesiones, del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.**

**23 de septiembre del año 2020.**

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de Dictámenes en cartera:

**A.-** Dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a dos iniciativas la primera de ellas: la iniciativa con proyecto de Decreto por la que se adiciona un tercer párrafo y se recorre el que ocupa esa posición a la siguiente, del artículo 7 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por la Diputada Gabriela Zapopan Garza Galván, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y la segunda: Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se adiciona al actual Título Primero denominado “Del Estado y sus Habitantes” un Capítulo Quinto denominado “Personas, comunidades y pueblos indígenas y tribales”, que contiene los artículos 25 Bis, 25 Ter, 25 Quater y 25 Quinquies, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares**,** conjuntamente con el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor,del Grupo Parlamentario “Brigido Ramiro Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila.

**B.-** Dictamende la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona un párrafo quinto al artículo 8º y se recorren los subsiguientes de la Constitución Política del Estado de Coahuila de, planteada por la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática.

**C.-** Dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la propuesta de iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforma el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática.

**D.-** Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y la Especial para la Garantía de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa de Decreto que crea la Ley de Adopciones y Acogimiento Familiar para el Estado de Coahuila de Zaragoza y reforma diversas disposiciones de la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís.

**E.-** Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y de Transparencia y Acceso a la Información de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la fracción V del artículo 18 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila, suscrita por el Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben.

**F.-** Dictamen de lasComisiones Unidas de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad y de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la Iniciativa con proyecto de decreto, que presenta el diputado Jaime Bueno Zertuche del grupo parlamentario “Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional por la que se reforma la fracción XVI del artículo 5 y la fracción IV del artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Coahuila de Zaragoza y el primer párrafo de artículos 211 y se adiciona un párrafo al final, asimismo se reforma el primer párrafo del artículo 212 y el artículo 254 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza.

**G.-** Dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto, por la que se agrega una porción normativa al artículo 375 y se modifica la fracción III del artículo 376, de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Diputado Fernando Izaguirre Valdés, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben.

**H.-** Dictamen de la Comisión de Finanzas, con relación a la Iniciativa de Decreto planteada por el Ejecutivo del Estado para que se autorice al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, para desincorporar y enajenar a título gratuito, un lote de terreno con una superficie de 165-36-48.66 hectáreas, ubicado en el municipio de Múzquiz, Coahuila de Zaragoza, a favor del Gobierno Federal, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, con objeto de llevar a cabo la construcción de las instalaciones del Destacamento Militar en la Región Carbonífera del Estado.

**I.-** Dictamen de la Comisión de Finanzas, con relación a la Iniciativa de Decreto enviada por el Presidente Municipal de Torreón, Coahuila de Zaragoza, para que se autorice a desincorporar del dominio público municipal, una fracción del lote 1 de la manzana 1 del Fraccionamiento “Sol de Oriente II segunda etapa” de esa ciudad, una superficie de 29.17 m2., con el fin de enajenarlo a título oneroso a favor del C. J. Reyes Alvarado Quiñones, con objeto de llevar a cabo la ampliación de su vivienda.

**J.-** Dictamen de la Comisión de Finanzas, con relación a la Iniciativa de Decreto enviada por el Presidente Municipal de Torreón, Coahuila de Zaragoza, para que se autorice a desincorporar del dominio público municipal, una fracción del lote 1 de la manzana 1 del Fraccionamiento “Sol de Oriente II segunda etapa” de esa ciudad, una superficie de 3,391.66 m2., con el fin de enajenarlo a título gratuito a favor de la Asociación Civil “Casa Hogar Abrázame” A.C., con objeto de llevar a cabo la construcción y funcionamiento de una Casa Hogar.

**K.-** Dictamen de la Comisión de Finanzas, con relación a una Iniciativa de Decreto enviada por el Presidente Municipal de Torreón, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual solicita la validación de un acuerdo aprobado por el Ayuntamiento, para enajenar a título oneroso, un inmueble con una superficie de 200.00 M2., ubicado en la colonia “José de las Fuentes Rodríguez” de esa ciudad, a favor de la C. Juana Irene de la Rosa García, con objeto de llevar a cabo la ampliación de su casa habitación y regularizar la tenencia de la tierra, el cual se desincorporo con Decreto número 613 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 26 de junio de 2020.

**L.-** Dictamen de la Comisión de Finanzas, con relación a una Iniciativa de Decreto enviada por el Presidente Municipal de Torreón, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual solicita la validación de un acuerdo aprobado por el Ayuntamiento, para enajenar a título oneroso, un inmueble con una superficie de 72.74 M2., ubicado en la colonia “Carolinas” de esa ciudad, a favor del C. Héctor Herrera Montelongo, con objeto de llevar a cabo la regularización de la tenencia de la tierra, el cual se desincorporo con Decreto número 539 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 25 de febrero de 2020.

**M.-** Dictamen de la Comisión de Finanzas, con relación a una Iniciativa de Decreto enviada por el Presidente Municipal de Castaños, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual solicita la validación de un acuerdo aprobado por el Ayuntamiento, para enajenar a título gratuito, dos fracciones de área vial; la primera con una superficie de 288.00 m2, ubicado en la calle Francisco I. Madero y la segunda una fracción de la calle Guillermo Prieto con superficie de 400.00 m2, ubicado en la colonia “Libertad” de esa ciudad, a favor del Gobierno del Estado de Coahuila, para ser destinado a la Secretaria de Educación con objeto de llevar a cabo la construcción de un plantel educativo, el cual se desincorporo con Decreto número 612 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 26 de junio de 2020.

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a dos iniciativas la primera de ellas: la iniciativa con proyecto de Decreto por la que se adiciona un tercer párrafo y se recorre el que ocupa esa posición a la siguiente, del artículo 7 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por la Diputada Gabriela Zapopan Garza Galván, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y la segunda: Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se adiciona al actual Título Primero denominado “Del Estado y sus Habitantes” un Capítulo Quinto denominado “Personas, comunidades y pueblos indígenas y tribales”, que contiene los artículos 25 Bis, 25 Ter, 25 Quater y 25 Quinquies, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares**,** conjuntamente con el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor,del Grupo Parlamentario “Brigido Ramiro Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 08 del mes de noviembre del año 2018, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa con proyecto de Decreto por la que se adiciona un tercer párrafo y se recorre el que ocupa esa posición a la siguiente, del artículo 7 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por la Diputada Gabriela Zapopan Garza Galván, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben y en fecha 23 de Abril de 2020 la iniciativa con Proyecto de decreto por el que se adiciona al actual Título Primero denominado “Del Estado y sus Habitantes” un Capítulo Quinto denominado “Personas, comunidades y pueblos indígenas y tribales”, que contiene los artículos 25 Bis, 25 Ter, 25 Quater y 25 Quinquies, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares**,** conjuntamente con el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor,del Grupo Parlamentario “Brigido Ramiro Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila,.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de los referidos acuerdos, se turnaron a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, las iniciativas a que se ha hecho referencia, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa con proyecto de Decreto por la que se adiciona un tercer párrafo y se recorre el que ocupa esa posición a la siguiente, del artículo 7 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por la Diputada Gabriela Zapopan Garza Galván, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

**E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S**

*“La Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece derechos fundamentales para las comunidades indígenas de todas las naciones; reitera en su texto la importancia de que los estados que han acogido este documento, deben hacer esfuerzos para reconocer, proteger y alentar el desarrollo de los pueblos indígenas, proporcionarles los recursos necesarios para la preservación de sus costumbres, de sus lenguas o dialectos, así como para facilitarles la permanencia en sus territorios y la subsistencia económica.*

*No menos importante es el derecho de estos pueblos a conservar su autonomía en cuanto a sus usos y costumbres en la elección de sus autoridades internas, así como en lo relativo a la toma de decisiones de asuntos exclusivos de la vida interna de cada uno.*

*De la Declaración en cita, sobresalen por su importancia, las siguientes disposiciones:*

*Artículo 3*

*Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.*

*Artículo 4*

*Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de los medios para financiar sus funciones autónomas.*

*Artículo 5*

*Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado....*

*Artículo 11*

*1. Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares arqueológicos e históricos, utensilios, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales e interpretativas y literaturas.*

*2. Los Estados proporcionarán reparación por medio de mecanismos eficaces, que podrán incluir la restitución, establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas, respecto de los bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales de que hayan sido privados sin su consentimiento libre, previo e informado o en violación de sus leyes, tradiciones y costumbres....*

*Artículo 13*

*1. Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas y mantenerlos.*

*2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar la protección de ese derecho y también para asegurar que los pueblos indígenas puedan entender y hacerse entender en las actuaciones políticas, jurídicas y administrativas, proporcionando para ello, cuando sea necesario, servicios de interpretación u otros medios adecuados...*

*El Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (169), establece lo siguiente:*

*Artículo 1*

*1. El presente Convenio se aplica:*

*a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial;*

*b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.*

*2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio.*

*3. La utilización del término pueblos en este Convenio no deberá interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional.*

*Artículo 4*

*1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados.*

*2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos interesados……*

*En México, la Constitución General de la República dispone en su artículo 2º las características que un pueblo indígena debe reunir para que sea considerado como tal, a efecto de que se les reconozcan los derechos consagrados más adelante en la misma Constitución. Esto conforme a la siguiente redacción:*

*….La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.*

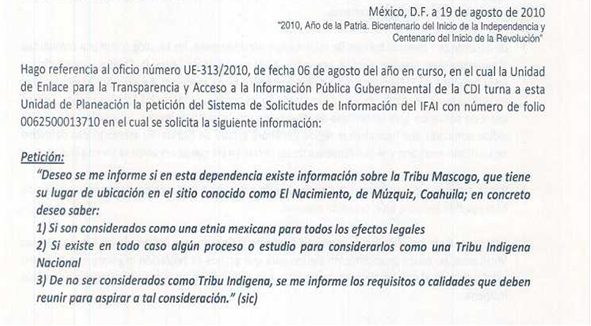
*La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.*

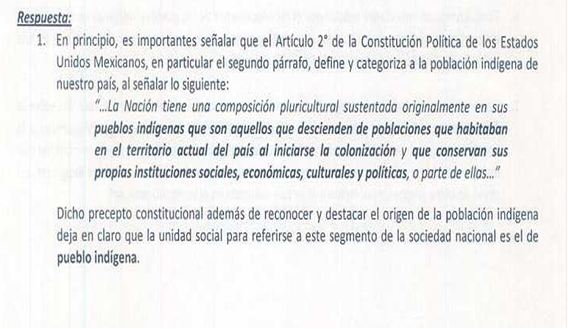
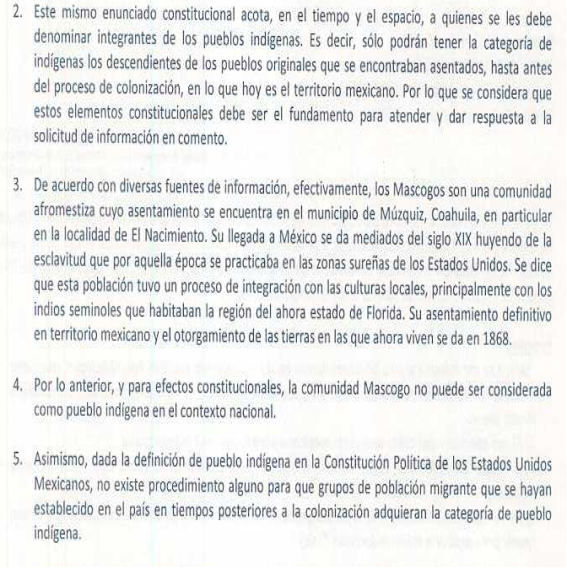
*Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.*

*El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico…*

*Esta disposición plantea un conflicto de aplicación y/o de interpretación, ya que en su primer párrafo, se entiende que solo los pueblos indígenas que ya existían antes del proceso de colonización pueden gozar del derecho a que se les considere como tales, y no así los que se asentaron después de este periodo de la historia de México. De ser esta la interpretación correcta de la norma constitucional que se lee, estaríamos ante un problema muy serio, pues se priva o privaría de derechos propios de las comunidades indígenas a tribus de varios estados del país.*

*Un ciudadano solicitó información a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el año 2010, y también al Instituto Nacional de Lenguas de los Pueblos Indígenas, sobre la comunidad conocida como “Mascogo”, nativa de Múzquiz, Coahuila; la respuesta de estas instituciones parece “confirmar” el criterio ya señalado en materia de quiénes deben ser considerados indígenas; aquí reproducimos parte de las respuestas; toda vez que de acuerdo a la ley, las respuestas a solicitudes de información constituyen información que puede ser difundida o compartida:*

**

**

*Por su parte, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas informó lo siguiente:*

*DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE*

*COORDINACIÓN Y ENLACE*

*México, D. F. 02 setiembre de 2010.*

*Folio 1131100004210*

*Solicitud de Información:*

*“Deseo se me informe si en esta dependencia existe información sobre la Tribu Mascogo, que tiene su lugar de ubicación en el sitio conocido como El Nacimiento, de Múzquiz, Coahuila; en concreto deseo saber:*

*1) Si son consideraros como una etnia mexicana para todos los efectos legales.*

*2) Si existe en todo caso algún proceso o estudio para considerarlos como una Tribua Indígena Nacional; si existe algún proyecto para rescatar la lengua de los mascogos.*

*3) De no ser considerados como Tribu Indígena, se me informen los requisitos o calidades que deben reunir para aspirar a tal consideración; o bien para que su lengua sea rescatada.”*

*Repuesta:*

*“ Al respecto le informo:*

*La Ley General de Derechos Lingüísticos, en su artículo 2, define a las lenguas indígenas, que deben considerarse como nacionales, de la manera siguiente:*

*Las lenguas indígenas son aquellas que proceden de los pueblos existentes en el territorio nacional antes del establecimiento del Estado Mexicano, además de aquellas provenientes de otros pueblos indoamericanos, igualmente preexistentes que se han arraigado en el territorio nacional.*

*Dado el origen histórico de los denominados como mascogo, no cumplen con el requisito que enuncia dicho artículo, por lo tanto, no están considerados como parte de las lenguas indígenas nacionales en nuestro Catálogo de las lenguas indígenas nacionales: Variantes lingüísticas de México con sus autodenominaciones y referencias geoestadísticas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 14 de enero de 2008....”* ***Fin de la cita textual.***

*Los mascogos existen, el propio Instituto Nacional de Lenguas Indígenas reconoce su existencia y su asentamiento humano, aunque no considera que deban ser considerados como tribu indígena.*

*Si bien las constituciones de los estados no pueden establecer disposiciones que contravengan a la Constitución General de la República, sí pueden ampliar los derechos y garantías que estas otorgan a los ciudadanos.*

*Oaxaca, por ejemplo, decidió reconocer en su Constitución local a las comunidades indígenas que no están expresamente reconocidas por el Artículo 2º de la Constitución Federal; esto lo podemos verificar en el siguiente dispositivo:*

*Artículo 16.- El Estado de Oaxaca tiene una composición multiétnica, multilingüe y pluricultural, sustentada en la presencia y diversidad de los pueblos y comunidades que lo integran. El derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, así como del Pueblo y comunidades afromexicanas se expresa como autonomía, en tanto partes integrantes del Estado de Oaxaca, en el marco del orden jurídico vigente; por tanto dichos pueblos y comunidades tienen personalidad jurídica de derecho público y gozan de derechos sociales. La ley reglamentaria establecerá las medidas y procedimientos que permitan hacer valer y respetar los derechos sociales de los pueblos y comunidades indígenas y del Pueblo y comunidades afromexicanas. Los pueblos indígenas del Estado de Oaxaca son: Amuzgos, Cuicatecos, Chatinos, Chinantecos, Chocholtecos, Chontales, Huaves, Ixcatecos, Mazatecos, Mixes, Mixtecos, Nahuas, Triquis, Zapotecos y Zoques. El Estado reconoce a las comunidades indígenas y afromexicanas que los conforman, a sus reagrupamientos étnicos, lingüísticos o culturales.*

*La ley reglamentaria protegerá al Pueblo y las comunidades afromexicanas, así como a los indígenas pertenecientes a cualquier otro pueblo procedente de otros Estados de la República y que por cualquier circunstancia, residan dentro del territorio del Estado de Oaxaca. Asimismo, el Estado reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas sus formas de organización social, política y de gobierno, sus sistemas normativos internos, la jurisdicción que tendrán en sus territorios, el acceso a los recursos naturales de sus tierras y territorios, su participación en el quehacer educativo y en los planes y programas de desarrollo, sus formas de expresión religiosa y artística, la protección de las mismas y de su acervo cultural y, en general, para todos los elementos que configuran su identidad. Por tanto, la ley reglamentaria establecerá las normas, medidas y procedimientos que aseguren la protección y respeto de dichos derechos sociales, los cuales serán ejercidos directamente por las autoridades de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas o por quienes legalmente los representen.*

*Esto es, en Oaxaca se reconoce también a las comunidades afromexicanas, aunque estas no cumplan con el requisito constitucional de haber estado aquí desde antes de la Colonia. Lo cual, es más justo y acertado de acuerdo al derecho internacional.*

*La ONU reconoce que ha sido casi imposible establecer una correcta definición de aceptación internacional de lo que es un pueblo indígena; ya que los múltiples intentos han derivado en injusticias de concepto y de alcances; mientras que en otros casos, resultan en limitantes arbitrarias para ciertas etnias y grupos que se consideran animismos indígenas.*

*Si bien la idea de que se considera como tales a quienes reúnen la característica de estar en sus territorios de modo previo a las invasiones y las pre colonias en todos los continentes, tal y como lo señala el 2º constitucional es frecuente en los textos constitucionales nacionales, lo cierto es que por otra parte, gran cantidad de etnias se conformaron en tiempos posteriores, y mantienen todos los demás elementos que mandata la ley para ser considerados como pueblos indígenas, estos son: identidad de grupo, cultura propia, creencias religiosas, tradiciones, usos y costumbres, identidad geográfica, idioma propio y permanencia histórica. Y, no pueden ser privados de su derecho a ser considerados pueblos indígenas por el solo hecho de no haberse asentado en su territorio antes de la época colonial correspondiente.*

*Cabe mencionar, que el día 14 de marzo de 2017, el Diario de los Debates del Congreso del Estado da cuenta de una iniciativa de decreto del entonces gobernador del estado, Rubén Moreira, para declarar al pueblo Mascogo como grupo étnico del estado de Coahuila. Sin embargo, se trata de una iniciativa de decreto ejecutivo, no de una ley, ni de una reforma constitucional, que, como en el estado de Oaxaca, les confiera plena certeza de derechos a las comunidades indígenas locales, sin importar su fecha de conformación. Y, que además, supere la limitante del artículo 2º constitucional.*

*Además, el referido decreto,* ***hace una interpretación del artículo 2º constitucional, en la creencia de que en dicha disposición se pueden separar los elementos establecidos para determinar quiénes son pueblo indígena y quiénes no. Y como consta en las respuestas de acceso a la información que ya hemos expuesto, esto no es posible****, el requisito de haber estado aquí previo a la colonia es inseparable de los otros, por eso, es más atinado y efectivo elevar a rango constitucional local el reconocimiento como pueblo indígena a los Mascogos, y no dejarlo en un simple decreto.*

*Nuestra argumentación se fortalece aún más, al atender lo que dispone el párrafo quinto del artículo 2º constitucional: “…El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas* ***se hará en las constituciones y leyes de las entidades******federativas****, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.”*

*La disposición es clara: el reconocimiento se hará en las constituciones y en las leyes locales….*

*En estricto derecho de libre configuración constitucional local, es decir, apelando al derecho que tenemos de establecer disposiciones en nuestra constitución que no contravengan a la Constitución Federal ni a los Tratados Internacionales, y que, por el contrario, amplíen los derechos que estos instrumentos confieren a los individuos, consideramos oportuna esta propuesta de reforma constitucional.”*

**TERCERO.-** Que la iniciativa con Proyecto de Decreto que presenta la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares conjuntamente el diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, del Grupo Parlamentario “Brigido Ramiro Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila que modifica y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza con relación al reconocimiento de las personas, comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos de Coahuila, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

*En Coahuila de Zaragoza, según la Coordinación General de Planeación y Evaluación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se estima que en 2015 habitaban 13,349 personas indígenas,[[1]](#footnote-1) así como 253 personas afromexicanas pertenecientes al pueblo mascogo en el año 2013, según el Gobierno del Estado.[[2]](#footnote-2) A nivel nacional, para 2015 en Coahuila habitaban el 0.5% de la población indígena de México. Las leyes de Coahuila, sin embargo, apenas han reconocido su existencia.*

*Aunque si bien, por un lado, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha reconocido con los derechos de la población indígena desde el año 2001, fue apenas, por otro lado, que en 2019 que se reivindicó a la población afromexicana en dicho texto constitucional, asimilando sus derechos con los de la población indígena. Esto es muestra del poco avance Constitucional y legal que posee nuestro país sobre derechos de las personas, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. En Coahuila, las omisiones normativas son más evidentes.*

*De esta forma, en el Estado, desde el punto de vista Constitucional y legislativo, apenas se han visibilizado a los pueblos indígenas y tribales del Estado. Así, la Constitución local apenas prevé a la población indígena, mientras que omite totalmente a la población afromexicana de Coahuila. Por su parte, las leyes locales, en las pocas referencias legislativas que prevén a este sector de la población, lo hace insuficientemente y con confusiones conceptuales elementales.*

*Estas circunstancias no tienen justificación desde el punto de vista de las referencias normativas. Estas son abundantes y de ninguna forma justifican las omisiones regulatorias en el Estado. Así, en primer lugar, destaca el “Convenio (No. 169) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”, en vigor en México desde el 5 de septiembre de 1991, que realiza distintas distinciones útiles para la legislación nacional de México.*

*Por un lado, este instrumento internacional distingue entre “los pueblos tribales en países independientes” y “los pueblos en países independientes, considerados indígenas”. Conceptualiza a los primeros como aquellos “cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial”. Mientras tanto, los segundos son calificados “por el hecho de descender de poblaciones que habitaban (...) en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.” En una legislación que ignora esta distinción, como lo es la coahuilense, esta es valiosa para precisamente conceptualizar las mismas.*

*En segundo lugar, más recientemente, la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada por México, alienta a los Estados “a que respeten y cumplan eficazmente todas sus obligaciones para con los pueblos indígenas dimanantes de los instrumentos internacionales, en particular las relativas a los derechos humanos, en consulta y cooperación con los pueblos interesados”. Esta circunstancia, podemos ver, aún no se logra en nuestro país ni siquiera desde el punto de vista legislativo.*

*Así, por ejemplo, el “Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas sobre su visita a México”, en relación con el marco jurídico, político e institucional del país, concluyó que:*

*“96. Se debe reabrir el debate constitucional sobre derechos fundamentales, como el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público. Ello conlleva la modificación o reforma de legislaciones federales y estatales en materia indígena. Un primer paso para resolver los problemas mencionados en este informe es reconocer la deuda histórica del país en esta materia y adecuar la legislación y las políticas relacionadas con temas agrarios, territoriales, de desarrollo energético, minería, agua, producción y seguridad alimentaria, gobernanza y administración de justicia, entre otros, con las obligaciones internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas. La modificación o reforma de dichas normas debe realizarse en consulta y con la participación de los pueblos indígenas conforme a los estándares internacionales.”[[3]](#footnote-3)*

*Las anteriores circunstancias, por tanto, orillan a adoptar medidas tanto Constitucionales y legislativas como administrativas para garantizar los derechos señalados y, además, crear una normatividad que tenga en cuenta las distinciones conceptuales referidas. Como se ha mencionado, sin embargo, las referencias normativas nacionales y locales han sido más bien escasas.*

*Así, por ejemplo, las referencias provenientes desde la administración pública local también han sido escasas y, en su caso, confusas. En los últimos años destaca el Decreto 803 del martes 16 de mayo de 2017 mediante el que “Se autoriza que se declare como grupo étnico del Estado de Coahuila de Zaragoza a la Tribu de Negros Mascogos”. Dicho decreto, sin embargo, equivocadamente considera a la mencionada tribu como “pueblo indígena”. Es decir, contrario a las distinciones conceptuales ya mencionadas anteriormente.*

*La reforma que hoy se presenta, por tanto, pretende comenzar a reparar esas graves omisiones a través de dos objetivos iniciales: marcar una pauta para la adecuación de la legislación local a los más altos estándares internacionales e interamericanos a través de una reforma a la constitución local, y reconocer expresamente la existencia de los pueblos indígenas y afromexicanos que habitan en el Estado, corrigiendo las distinciones que se han ignorado entre estos pueblos en la legislación nacional y las medidas administrativas locales.*

*Así, por lo anterior, se propone el reconocimiento de las personas, comunidades y pueblos indígenas y tribales de Coahuila desde la Constitución, garantizando a través de esta sus derechos a la libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social dentro del marco internacional, Constitucional federal y local, y acorde a las leyes del Estado. Además, dispone la sola conciencia de la identidad o pertenencia de las personas indígenas y afromexicanas a estos pueblos y comunidades como criterio fundamental para que se les apliquen dichas disposiciones. Finalmente, dispone desde el texto constitucional local la protección, promoción y garantía del desarrollo de la cultura, lenguas, usos, costumbres, tradiciones, sistemas normativos y formas de organización social, política y económica de las comunidades indígenas y tribales asentadas en el Estado, garantiza a sus integrantes el acceso pleno a los derechos señalados en el marco normativo aplicable, y dispone que la legislación reglamentaria que se emita garantizará a los pueblos indígenas y tribales su condición de sujetos de derecho público con personalidad jurídica colectiva.*

*Como señalan los indicadores más recientes:*

*“La situación de la población indígena históricamente ha estado marcada por altos niveles de carencias sociales y económicas que denotan condiciones de mayor pobreza y vulnerabilidad en relación con la población nacional. El 55.5% de la población indígena habita municipios de alta y muy alta marginalidad, asimismo el 87.5% de los municipios indígenas se encuentran en condiciones de alto grado y muy alto grado de marginalidad”.[[4]](#footnote-4)*

*Las adecuaciones Constitucionales aquí expuestas tienen por objetivo, en términos generales, ayudar a la garantía de los derechos de las personas indígenas y afromexicanas con la finalidad de revertir esas circunstancias. De esta forma, es mediante la formulación de instrumentos legales y constitucionales de avanzada que, a través de disposiciones acordes a los más altos estándares internacionales, se busca lograr la igualdad sustancial de los grupos socialmente desfavorecidos, en plena observancia a la justicia social.*

**CUARTO.-** Quienes integramos la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, nos abocamos al estudio de las iniciativas objeto del presente dictamen.

En este orden de ideas, con respecto al contenido de la iniciativa de la Diputada Gabriela Zapopan Garza Galván, observamos lo siguiente:

|  |  |
| --- | --- |
| **DICE…** | **DEBE DE DECIR…** |
| **Artículo 7º.** Dentro del territorio del Estado, toda persona gozará de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. El ejercicio de estos derechos no podrá restringirse ni suspenderse, salvo los casos y bajo las condiciones que establece la Constitución Federal.  Los derechos humanos son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, irrevocables y exigibles. En la aplicación e interpretación de las normas de derechos humanos prevalecerá el principio por persona.  Las normas relativas a los derechos humanos y a las libertades reconocidas por la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución, se interpretaran de conformidad con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.  Ninguna disposición legal puede ser interpretada en el sentido de:    **a)** Permitir a la autoridad suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y los Tratados internacionales suscritos por México.  **b)** Limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que puedan estar reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y los Tratados internacionales suscritos por México.  **c)** Excluir otros derechos y garantías que sean inherentes al ser humano o que se deriven de la forma democrática y representativa de gobierno.  Todas las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de su competencia, tendrán la obligación de promover, respetar, proteger y establecer los mecanismos que garanticen los derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y no regresividad. El Estado deberá de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que determine la ley.  Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos humanos y libertades de las personas. La ley establecerá mecanismos a favor de las personas, para que el goce de sus derechos de libertad, igualdad, seguridad jurídica y justicia social, sean reales, efectivos y equitativos dentro del estado humanista, social y democrático de derecho que salvaguarda esta Constitución.  Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrada de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.  Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.  Toda persona tiene derecho a la información pública. La garantía de acceso a la información pública, es un derecho fundamental que comprende difundir, investigar y recabar información pública, y se definirá a partir de los principios siguientes:  **I.** Su fundamento reside en el estado humanista, social y democrático de derecho que establece esta Constitución.  **II.** El acceso libre, gratuito, sencillo, antiformal, eficaz, pronto y expedito a la información.  **III.** La interpretación constitucional más favorable del principio de publicidad, salvo las excepciones que por razones de interés público establezca la ley en sentido estricto.  **IV.** La protección de los datos personales.  **V.** La obligación de transparencia del Poder Público o cualquier otra entidad que utilice, reciba o disponga de recursos públicos, en los términos de la ley.  **VI.** La administración, conservación y preservación de la documentación pública a través de mecanismos confiables, eficientes y eficaces.  **VII.** La constitución de un organismo público autónomo conforme a las bases previstas en esta Constitución y las siguientes:  **1.** Será autoridad constitucional en la materia, independiente en sus funciones y decisiones, y profesional en su desempeño.  **2.** Contará con autonomía política, jurídica, administrativa, presupuestal, patrimonial y financiera, en los términos que establezca la ley.  **3.** Tendrá a su cargo la rectoría de las siguientes materias:  **a)** El acceso a la información pública.  **b)** La cultura de transparencia informativa.  **c)** Los datos personales.  **d)** *(DEROGADO, P.O. 27 DE MARZO DE 2007)*  **e)** La realización de estadísticas, sondeos, encuestas o cualquier instrumento de opinión pública.  **f)** Las demás atribuciones que establezca la ley.  **4.** Su actuación se regirá por los principios de constitucionalidad, legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad.  **5.** Sus integrantes serán designados por el voto de cuando menos las dos terceras partes del Congreso del Estado, en los términos y conforme al procedimiento que disponga la ley.  Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.  Las Cartas de los Derechos Fundamentales y esta Constitución, determinan los principios mínimos en los que se sustenta el ejercicio de los Derechos Humanos. Serán ley suprema en el régimen interior del Estado.  Ninguna persona será sometida a desaparición, sea ésta cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen sin la autorización, el apoyo o el consentimiento del Estado.  El Estado tiene la obligación de adoptar todas las medidas apropiadas para proteger a las personas contra las desapariciones.  Las personas desaparecidas y quienes hayan sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición, tienen derecho a una búsqueda inmediata y efectiva, a la localización de la persona desaparecida, a conocer la verdad, a la justicia, a la protección judicial efectiva y a la reparación integral del daño y a las garantías de no repetición. El Estado garantizará estos derechos.  Las personas desaparecidas tienen derecho a continuar con su personalidad jurídica con el fin de garantizar el ejercicio de todos sus derechos. El Estado adoptará las medidas apropiadas en relación con la situación legal de las personas desaparecidas cuyo paradero no haya sido esclarecido. La ley establecerá el procedimiento para la declaración de ausencia por desaparición de personas.  Ninguna persona será sometida a cualquier forma de esclavitud, servidumbre, o a ejecutar un trabajo forzoso.  Las personas migrantes o desplazadas que ingresen, transiten o residan temporalmente en el territorio del Estado, así como sus familiares, con independencia de su situación jurídica, tendrán la protección de la ley y no serán criminalizados por su condición de migrantes o desplazados. Tratándose de menores de edad se privilegiará el interés superior de la niñez. Las autoridades de todos los niveles, en la esfera de su competencia, adoptarán las medidas necesarias para la protección efectiva de sus derechos, de conformidad a lo dispuesto en el segundo párrafo del presente artículo. | **Artículo 7º....Párrafos primero y segundo.**  **El Estado reconoce a todos los pueblos indígenas que se han asentado en nuestro territorio, sin importar su origen o la época en que iniciaron su residencia, a estas comunidades se les brindarán todos los apoyos necesarios para la conservación de su cultura, lengua, costumbres y formas de subsistencia, además de garantizarles todos los derechos que los tratados internacionales y las leyes nacionales confieren a las etnias mexicanas. Los pueblos Mascogo y Kikapú gozan del reconocimiento como comunidades indígenas del estado de Coahuila de Zaragoza para todos los efectos legales correspondientes.**  **…** |

En cuanto al contenido de la iniciativa de la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázarez, se verifica lo siguiente:

|  |  |
| --- | --- |
| **DICE…** | **DEBE DE DECIR…** |
| **NO TIENE CORRELATIVO** | **CAPÍTULO QUINTO**  **Personas, comunidades y pueblos indígenas y tribales**  **Artículo 25 Bis. Esta Constitución reconoce y protege los derechos a la libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social de las personas, comunidades y pueblos indígenas y tribales que habiten en el Estado de Coahuila, los cuales se ejercerán dentro del marco internacional, Constitucional federal y local, y acorde a las leyes del Estado.** |
| **NO TIENE CORRELATIVO** | **Artículo 25 Ter. Esta Constitución reconoce tanto a los pueblos indígenas que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del País al iniciarse la colonización o que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio al momento del establecimiento de las actuales fronteras, y a los tribales que descienden de poblaciones afromexicanas, así como los de aquellos que pertenezcan a otros pueblos indígenas y tribales y que por cualquier circunstancia se encuentren asentados dentro del Estado, y que en todo caso conservan condiciones e instituciones sociales, culturales y económicas o partes de ellas que les distinguen de otros sectores de la colectividad del País.** |
| **NO TIENE CORRELATIVO** | **Artículo Quater. Para la determinación de la aplicación de las disposiciones sobre personas, comunidades y pueblos indígenas y tribales, la conciencia de la identidad o pertenencia de las personas de forma individual o colectiva a estos será el criterio fundamental.** |
| **NO TIENE CORRELATIVO** | **Artículo Quinquies. La legislación que reglamente los derechos de las personas, comunidades y pueblos indígenas y tribales que habiten en el Estado deberá respetar, proteger, promover y garantizar el desarrollo de la cultura, lenguas, usos, costumbres, tradiciones, sistemas normativos y formas de organización social, política y económica de las comunidades indígenas y tribales asentadas en Coahuila, y el acceso pleno a los derechos señalados en el marco normativo aplicable en el Estado, además de garantizar a los pueblos indígenas y tribales su condición de sujetos de derecho público con personalidad jurídica colectiva.** |

Como se observa, ambas iniciativas buscan reconocer los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución Local y la última de ellas hace ya referencia expresa a las comunidades afromexicanas.

Es imprescindible en este contexto manifestar que quienes dictaminamos coincidimos en la importancia de reconocer y garantizar los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, y buscar fortalecerlas y preservarlas, defendiendo sus tradiciones y sus tierras.

Como adecuadamente se alude en la exposición de motivos de la primera de las iniciativas objeto de este dictamen, durante algún tiempo estuvo presente el debate sobre si las comunidades Kickapoo y de Negros Mascogos reunían los requisitos previstos en la Constitución General y en las leyes respectivas para poder ser considerados pueblos indígenas, sobre todo por lo que hacía al requisito de que se encontraran asentados en el territorio nacional.

No obstante lo anterior, es importante destacar que con la entrada en vigor de la reforma Constitucional en materia de derechos humanos la interpretación que debe darse al artículo 2 Constitucional debe hacerse considerando el principio pro persona, extendiendo su protección en este caso a los pueblos Kickapoo y de Negros Mascogos.

Lo anterior quedó más claramente de manifiesto con la más reciente reforma a este mismo artículo 2, en el cual se reconocieron los derechos de las comunidades afromexicanas, aunado a que su llegada a nuestro país fuese posterior a la Colonia.

En este contexto, es importante referir que en sesión celebrada por este H. Congreso en fecha 18 de julio del año 2019, se aprobó la Minuta con Proyecto de Decreto, enviada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por el que se adiciona un apartado C, al artículo 2o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconociéndose en nuestra Carta Magna los derechos de las comunidades afromexicanas, con el objeto de fortalecer efectivamente los marcos y medidas legales, políticas e instituciones existentes, a fin de lograr un país más igualitario, con un Estado que respete, promueva y garantice el goce y ejercicio de los derechos humanos de la población mexicana, sin ningún tipo de discriminación, impulsando su reconocimiento como parte de la composición pluricultural de la Nación, y a fin de dar cumplimiento con los compromisos internacionales contraídos en el Estado Mexicano, en materia de Derechos Humanos, como es el caso de la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, misma que establece derechos fundamentales para las comunidades indígenas de todas las naciones.

Ahora bien, en este orden de ideas estimamos oportuno hacer un breve recuento de los antecedentes que existen en nuestra entidad federativa sobre el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.

Así, encontramos que el 14 de marzo de 2017, se aprobó una iniciativa de Decreto promovida por el entonces Ejecutivo Estatal, para declarar al pueblo Mascogo como grupo étnico del estado de Coahuila.

Dicho Decreto además fijaba la prohibición a todas las formas de discriminación *en contra de los integrantes de la Tribu de Negros Mascogos motivada por su origen étnico o racial; reconocía a la Tribu de Negros Mascogos su unidad, idioma y derechos históricos; así como sus derechos a autodeterminarse, a la*  *libertad de decidir sus formas de convivencia y organización social, económica, política y cultural; de* *aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose en todo tiempo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, ya las leyes que deriven de éstas; la libertad de elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno; la libertad de preservar y enriquecer su idioma, conocimientos y todos los elementos que constituyan su identidad cultural;**la libertad de conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras, conforme al orden jurídico vigente; la libertad de elegir representantes ante los ayuntamientos en los municipios en que radiquen; el derecho a acceder, con respeto a las formas y modalidades de la propiedad y la tenencia de la tierra establecida por las leyes en la materia, entre otros.*

Más tarde, se presentó la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo Siete de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, con relación a los derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Diputado Antonio Nerio Maltos,del Grupo Parlamentario “Gral. Eulalio Gutiérrez Ortiz”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben.

Dicha iniciativa tenía por objeto hacer un reconocimiento extensivo de los derechos de los pueblos indígenas, mediante una reforma constitucional local enfocada a la preservación y protección de los pueblos, etnias y comunidades consideradas como indígenas en el Estado, especialmente a los Mascogos, Kickapoos y mazahuas.

En este orden de ideas como ya se ha venido refiriendo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 2 brinda su reconocimiento a las diversas etnias, Pueblos Indígenas y comunidades afromexicanas, en el sentido literal siguiente:

***Artículo 2o.*** *La Nación Mexicana es única e indivisible.*

*La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.*

*La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.*

*Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.*

*El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.*

***A.*** *Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:*

***I.*** *Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.*

***II.*** *Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes.*

***III.*** *Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal, la soberanía de los Estados y la autonomía de la Ciudad de México. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales.*

***IV.*** *Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.*

***V.*** *Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en esta Constitución.*

***VI.*** *Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley.*

***VII.*** *Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos, observando el principio de paridad de género conforme a las normas aplicables.*

*Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas.*

***VIII.*** *Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.*

*Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público.*

***B.*** *La Federación, las entidades federativas y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.*

*Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:*

***I.*** *Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos.*

***II.*** *Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación.*

***III.*** *Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil.*

***IV.*** *Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos.*

***V.*** *Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.*

***VI.*** *Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen.*

***VII.*** *Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.*

***VIII.*** *Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas.*

***IX.*** *Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes de las entidades federativas, de los Municipios y, cuando proceda, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.*

*Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas.*

*Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley.*

***C.*** *Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la Nación. Tendrán en lo conducente los derechos señalados en los apartados anteriores del presente artículo en los términos que establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social.*

De lo anterior podemos concluir que resulta de suma importancia adecuar nuestra legislación a la Carta Magna, atendiendo así mismo la Recomendación hecha por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y los tratados internacionales en la materia, en búsqueda de respetar los derechos que atañen a los Pueblos Indígenas y Comunidades Afromexicanas que habitan en nuestro Estado, favoreciéndolos y permitiéndoles mantener formas de gobierno en base a sus usos y costumbres, así como su religión y su concepción de la organización social.

Con la firme intención de forjar un Estado incluyente resulta de vital importancia garantizar el ejercicio efectivo de los derechos para las poblaciones indígenas coahuilenses, respetando siempre su desarrollo social y económico, así como las manifestaciones de cultura y el ejercicio de los derechos, previendo la protección de su patrimonio y riqueza cultural.

Esta dictaminadora no puede obviar que, en fecha 18 de julio de 2019 la Comunidad Kickapoo promovió demanda de Juicio Ciudadano ante el Tribunal Electoral, por omisiones legislativas tanto en la Constitución Local como en leyes secundarias.

En base a ello, de la Sentencia Interlocutoria derivada del expediente 41/2019, se desprende que:

*El dieciocho de julio, Javier Garza Anico, Zulema Garza Salazar, Ernesto Hernández Salazar y Lorena Sukue Elizondo, quienes manifestaron pertenecer a la tribu Kickapoo, presentaron demanda de Juicio Ciudadano en contra del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, por presuntas omisiones legislativas consistentes en la falta de adecuación en la Constitución Estatal y leyes secundarias conforme con lo establecido por el artículo 2º, apartado A, fracción VII de la Constitución Federal.*

*El cuatro de septiembre, el Pleno acordó reencauzar la demanda de Juicio Ciudadano presentada por los actores, como recurso de queja en materia electoral y de participación ciudadana, por constituir la materia de la litis una omisión legislativa en materia electoral atribuida al Congreso del Estado, en los términos de lo dispuesto por los artículos 102 y 103 de la Ley de Medios de Impugnación.*

*Al haber quedado acreditada la omisión legislativa en materia electoral denunciada, ante la ausencia de normativa que reconozca y reglamente los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas en la Constitución Estatal y leyes secundarias, consistentes en el reconocimiento de la representación indígena en el ayuntamiento, podemos concluir que estamos ante la presencia de una omisión legislativa en materia electoral de carácter absoluta por parte del Congreso del Estado, ante la inobservancia de lo ordenado en los artículos transitorios que así lo establecen.*

*Una vez acreditada la existencia de la omisión legislativa absoluta en materia electoral, resulta necesario destacar la importancia del reconocimiento de los derechos políticoelectorales de los pueblos y comunidades indígenas en la Constitución Estatal y leyes locales, la cual se hace palpable a partir de la necesidad de hacer efectiva la representación de la comunidad a la que pertenecen los promoventes en el ayuntamiento de Múzquiz, Coahuila.*

*Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, apartado B, fracción IX, de la Constitución Federal y los artículos 5°, 18, 19, 30 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, que consagran el derecho a la consulta a los pueblos y comunidades indígenas en todos los temas que les afecten, el Congreso del Estado de Coahuila deberá realizar un ejercicio de esta naturaleza con las comunidades y pueblos indígenas existentes en nuestro estado, con el objeto de que expongan sus puntos de vista sobre cómo debe regularse el procedimiento para la elección de su representación ante el ayuntamiento en donde resida oficialmente la comunidad o pueblo indígena de nuestro estado; la participación que los mismos han de tener una vez electos y determinar los recursos económicos y materiales mínimos necesarios para el ejercicio digno de dicha representación.*

*Lo anterior se estima necesario, en razón a que la consulta directa constituye una garantía y medio de protección del derecho a la libre determinación y participación de los pueblos y comunidades indígenas en asuntos públicos, como ha quedado evidenciado en los apartados precedentes de esta sentencia.*

***RESOLUTIVOS***

*PRIMERO. Es procedente el recurso de queja en materia electoral y de participación ciudadana promovido por los quejosos y, en consecuencia, se acredita la existencia de la omisión legislativa en materia electoral por parte del Congreso del Estado de Coahuila, al no haber incorporado a la Constitución Local y demás ordenamientos, el derecho a la representación política de los pueblos y comunidades indígenas, consagrado en el artículo 2º, apartado A fracción, VII de la Constitución Federal.*

*SEGUNDO. Se ordena requerir al Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, para que de acuerdo con su agenda legislativa, a la brevedad posible y antes de que culmine el periodo constitucional de labores de la actual legislatura local, cumpla con el mandato constitucional previsto en el artículo 2º, apartado A, fracción VII de la Constitución Federal, para lo cual deberá adecuar el marco normativo Constitucional y Legal de la entidad, en los términos de lo precisado en el apartado de efectos de la presente sentencia.*

*TERCERO. Se ordena la publicación por una sola ocasión, de la síntesis oficial de esta sentencia en uno de los periódicos de mayor circulación en el municipio de Múzquiz, Coahuila, para lo cual se deberá instruir a la titular de la Secretaría de Acuerdo y Trámite de este órgano jurisdiccional para su debido cumplimiento.*

En virtud de lo expresado, esta comisión inició con los trabajos legislativos correspondientes para dar comienzo con la armonización constitucional y legal respectiva.

En dicho sentido, en fecha 08 de julio del presente año, se aprobó un acuerdo relativo a la notificación de la sentencia pronunciada por el Tribunal Electoral del Estado, en el cual se determinó emitir un oficio dirigido a la comunidad Kickapoo en el que se hizo de su conocimiento que esta comisión estaba en la mejor disposición de establecer un diálogo con ellos y escuchar su opinión con respecto a las modificaciones constitucionales y legales necesarias para armonizar nuestro marco normativo al contenido del artículo 2, apartado A fracción VII de la Constitución Federal.

A través de la mencionada comunicación, también se les solicitó que informaran sobre la posibilidad de celebrar dicha audiencia de manera virtual o presencial para estar en condiciones de fijar la hora y fecha respectiva.

Al respecto, al no recibir respuesta para acordar la hora y fecha y debido a la premura e importancia del tema, en reunión de fecha 13 de agosto del presente año, se propuso girar a las autoridades de dicha comunidad, invitación a una reunión virtual con los diputados integrantes de esta comisión.

Asimismo, dada la materia de la reforma, igualmente se planteó abrir la invitación a la comunidad de Negros Mascogos.

En base a lo precedente, se acordó que dicha reunión tuviera verificativo el día 20 de agosto a las 11:50 horas, lo que derivó de diversos trabajos legislativos, celebrando distintos ejercicios de parlamento abierto en los que se tuvo audiencia con las comunidades Kickapoo y Negros Mascogos, en la que se intercambiaron opiniones sobre las modificaciones al marco Constitucional y legal del Estado, para adecuarlo al contenido del Artículo 2, apartado A fracción VII de la Constitución General, disposición que señala entre los derechos de las comunidades indígenas el de: *“elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos, observando el principio de paridad de género conforme a las normas aplicables”.*

Durante esta reunión, participo el C. Juan Garza, Presidente del Concilio Tradicional de la Tribu Kickapoo, el Lic. Julio Jiménez, y el Lic. Jesús Múzquiz, representantes de la comunidad Kickapoo y Dulce Herrera, representante de la comunidad de Negros Mascogos.

De tal modo, llevaron a cabo su intervención los representantes de la comunidad Kickapoo, así como la representante de la comunidad Negros Mascogos, quienes manifestaron sus propuestas e inquietudes sobre las bases mínimas que consideran que debe contener la legislación local a efecto de que se garanticen los derechos humanos de las comunidades indígenas y afromexicanas.

Por su parte, los integrantes de la comisión, les plantearon diversos cuestionamientos, entre los que se destacaron los siguientes:

¿Qué otros derechos humanos, además del derecho a la representación política deben estar expresamente reconocidos en nuestra Constitución? ¿Bajo qué mecanismo plantean garantizar la representación política en los Ayuntamientos? y si ¿Hay alguna legislación local que ellos consideran pudiera tomarse como referencia?

Preguntas que fueron respondidas en lo sucesivo por los representantes de las comunidades, todo ello con el objeto de llevar a cabo las reformas necesarias, garantizando el máximo respeto a sus derechos humanos.

En tenor de lo anteriormente expuesto, el presente proyecto toma en consideración las iniciativas que con relación al tema se han planteado en la presente legislatura, lo plasmado en la Constitución General, como referencia lo establecido en las Constituciones de Sonora, Durango y Estado de México, y por supuesto los comentarios y opiniones de las comunidades Kickapoo y de Negros Mascogos para reconocer en la forma más amplia sus derechos.

En ese orden de ideas, y al estar conscientes de que las sociedades progresan y se transforman conllevando esto a la creación de instrumentos normativos que resulten aplicables a la realidad que se vive y con el objeto de que se atiendan cada una de las situaciones presentes de conformidad con las demandas sociales, es que consideramos que esta reforma servirá como una herramienta necesaria y viable, mediante la cual se busca regular los derechos de los pueblos y comunidades indígenas con una visión más vinculadora, y así de esta manera estar en el camino de erradicar la discriminación.

En atención a lo precedente, quienes integramos esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, coincidimos en la importancia de adecuar nuestra Constitución Local, con el objeto no solo de otorgarles a las comunidades Kickapoo y Negros Mascogos una representación dentro del Ayuntamiento, sino también salvaguardar y proteger sus derechos de manera expresa.

Por las consideraciones antes expuestas, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO.**

**ARTÍCULO ÚNICO.-** Se adicionan un tercer, cuarto, quinto y sexto párrafos, recorriendo los ulteriores, del Artículo 7º de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 7º. …**

**…**

El Estado reconoce a todos los pueblos indígenas que se han asentado en nuestro territorio, sin importar su origen o la época en que iniciaron su residencia,y a los tribales que descienden de poblaciones afromexicanas,a estas comunidades se les brindarán todos los apoyos necesarios para la conservación de su cultura, lengua, costumbres y formas de subsistencia, además de garantizarles todos los derechos que los tratados internacionales y las leyes nacionales confieren a las etnias mexicanas. Los pueblos Mascogo y Kickapoo gozan del reconocimiento como comunidades indígenas y afromexicanas del Estado de Coahuila de Zaragoza para todos los efectos legales correspondientes.

Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos, las comunidades indígenas y afromexicanas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía, asegurando la unidad estatal, para:

1. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.
2. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales que se establecen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes.
3. Elegir de acuerdo con sus normas, usos y costumbres, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía del Estado.
4. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.
5. Conservar y mejorar el hábitat y sus recursos naturales y preservar la integridad de sus tierras, en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes respectivas.
6. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para estos efectos, las comunidades podrán asociarse en términos de ley.
7. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos, observando el principio de paridad de género, en los términos dispuestos en la Ley, a estos representantes se les denominará Regidor o Regidora Étnico o Afromexicano.
8. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, respetando los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes respectivas. Los indígenas tienen, en todo tiempo, el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.

El Estado y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:

1. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los diferentes órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales determinarán, equitativamente, las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos.
2. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior; establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles; definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas, e impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en el Estado.
3. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil.
4. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos.
5. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a las actividades productivas, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.
6. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación.
7. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.
8. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio estatal como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas.
9. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración de los planes estatal y municipales de desarrollo y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el párrafo que antecede, el Estado y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas.

**…**

**…**

**…**

**…**

**…**

**…**

**…**

**…**

**…**

**…**

**…**

**…**

**…**

**…**

**…**

**T R A N S I T O R I O**

**ÚNICO.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga Ramos, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 22 de septiembre de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona un párrafo quinto al artículo 8º y se recorren los subsiguientes de la Constitución Política del Estado de Coahuila de, planteada por la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 06 del mes de mayo de 2020, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona un párrafo quinto al artículo 8º y se recorren los subsiguientes de la Constitución Política del Estado de Coahuila de, planteada por la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que estas Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona un párrafo quinto al artículo 8º y se recorren los subsiguientes de la Constitución Política del Estado de Coahuila de, planteada por la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

***E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S***

*“La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza desde el año 2011, el principio de no discriminación, como una norma de aplicación general y prevalente en el ordenamiento jurídico mexicano. De acuerdo con la académica Diana Lara Espinoza “la no discriminación es una verdadera garantía individual, consistente en el derecho subjetivo público de ser tratado en la misma forma que las demás personas, y el correlativo deber jurídico de la autoridad de garantizar un trato idéntico a quienes se encuentran en igualdad de condiciones”.*

*De ahí que, del derecho a no ser discriminado también se desprendan otros derechos como las acciones afirmativas, que buscan equilibrar las condiciones de igualdad de los grupos que social y tradicionalmente se han considerado como en situación de vulnerabilidad.*

*En términos generales, la vulnerabilidad es un estado de riesgo al que se encuentran sujetas algunas personas en determinado momento, en razón de algunas de sus características sociales, físicas, psicológicas, emocionales o de cualquier otra índole. La vulnerabilidad representa un estado de debilidad provocado por la ruptura del equilibrio, que lleva a la persona o al grupo de personas a una espiral de efectos negativos que perjudican, menoscaban o limitan de alguna forma el ejercicio pleno de sus derechos humanos.*

*De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos existe una amplia gama de grupos en situación de vulnerabilidad (…).*

*La protección de las personas en situación de vulnerabilidad constituye no sólo un derecho sino también una obligación a cargo de los Estados como parte de las obligaciones contraídas en el derecho internacional. En esa tesitura, el artículo 3º de la Convención sobre los Derechos de Personas con discapacidad, establece los principios sobre los cuales los estados deben legislar e implementar sus políticas públicas. La norma citada sostiene:*

*“Los principios de la presente Convención serán:*

*a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas;*

*b) La no discriminación;*

*c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;*

*d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas;*

*e) La igualdad de oportunidades;*

*f) La accesibilidad;*

*g) La igualdad entre el hombre y la mujer;”*

*Como se puede observar, todos estos principios, están encaminados a una efectiva protección de las personas en situación de vulnerabilidad y constituyen la base para la creación de normas y la aplicación prioritaria de políticas públicas y programas sociales.*

*En el mismo sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en tesis jurisprudencial que la protección de los grupos en situación de vulnerabilidad, tiene “un carácter sustantivo o de hecho, el cual tiene como objetivo remover y/o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que impiden a ciertas personas o grupos sociales gozar o ejercer de manera real y efectiva sus derechos humanos en condiciones de paridad con otro conjunto de personas o grupo social”.*

*De ahí que, derivado de esta protección especial que los grupos en situación de vulnerabilidad tienen en la constitución federal, en los tratados internacionales y en la jurisprudencia del máximo tribunal del país, es que consideramos que tal protección debe incluirse en la Constitución Política del Estado de Coahuila, a fin de dar una garantía reforzada y procurar que en las políticas públicas y programas sociales se establezcan como prioritarios tales grupos. Pues como hemos podido observar en tiempos de crisis como el que actualmente vivimos, son los grupos vulnerables a los que más se les complica el ejercicio de sus derechos.”*

**TERCERO.-** Los integrantes de esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, nos abocamos al estudio de la iniciativa por la que se reforma el artículo 8 de la Constitución Política del Estado de Coahuila, en materia de políticas públicas para grupos en situación de vulnerabilidad.

Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los grupos en situación de vulnerabilidad “*son aquellos que debido al menosprecio generalizado de alguna condición específica que comparten, a un prejuicio social erigido en torno a ellos o por una situación histórica de opresión o injusticia, se ven afectados sistemáticamente en el disfrute y ejercicio de sus derechos fundamentales. El concepto de vulnerabilidad se aplica a aquellos sectores o grupos de la población que por su condición de edad, sexo, estado civil, origen étnico o cualquier otro se encuentran en condición de riesgo, impidiendo su incorporación a la vida productiva, el desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar”*.

El artículo 1º. De la Constitución General se establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la misma y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá ser restringido ni suspendido, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece, asimismo establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia ***favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia***, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, **tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad**. Mencionando además que el Estado deberá **prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos**, en los términos que establezca la ley.

Es así, que los Derechos Humanos nacen de la dignidad intrínseca del ser humano, por lo cual deben ser disfrutados por todos, sin ningún tipo de distinción de raza, sexo, idioma, origen social, religión, nacionalidad, capacidades, ocupación, edad, etc. y se encuentran contemplados en la ley y garantizados a través de los tratados internacionales.

Para los integrantes de esta dictaminadora, resulta esencial que en nuestro Estado se asuman las obligaciones y los deberes de respetar, proteger y promover los derechos humanos sin ningún tipo de discriminación. Es por ello, que consideramos que la obligación de respetarlos significa que en el estado debemos trabajar para que se evite interferir en el disfrute de los derechos humanos, o que estos se vean limitados. La obligación que como legisladores tenemos de protegerlos, nos exige que frenemos los abusos de los derechos humanos en contra individuos y grupos, por lo cual consideramos que debemos de adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos tanto en el plano individual, pero sobre todo en los grupos que se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad.

Es por ello, que coincidimos respecto a que debemos adoptar una protección especial a los derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad, tal y como se encuentran salvaguardados en nuestra Constitución Federal, así como en los diversos tratados internacionales, asimismo, teniendo como referencia lo que sostuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial 1a./J.25/2017 sobre la protección que tienen los grupos en situación de vulnerabilidad: *“La igualdad jurídica en nuestro ordenamiento constitucional protege tanto a personas como grupos. De ahí que se considere que el derecho humano a la igualdad jurídica no solo tiene una faceta o dimensión formal o de derecho sino también una de carácter sustantivo o de hecho, el cual tiene como objetivo remover y/o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que impiden a ciertas personas o grupos sociales gozar o ejercer de manera real y efectiva sus derechos humanos en condiciones de paridad con otro conjunto de personas o grupo social*”.

Es así, que al reconocer la existencia de grupos con particularidades que los hacen vulnerables, nos hace afrontar la necesidad apremiante de adoptar acciones a fin de eliminar la discriminación de la cual puedan ser objeto, ya que los grupos en situación de vulnerabilidad a lo largo de su vida se enfrentan a dificultades que los privan del pleno goce de sus derechos fundamentales. Es por ello debemos secundar las reformas que sean necesarias, así como detectar vacíos legales que priven de la debida protección de tales derechos. Sabemos que en nuestro estado, se ha llevado un proceso de reformas normativas importantes en materia de protección de derechos, pero consideramos que todavía no es una tarea terminada, ya que no basta con el reconocimiento de derechos, sino que debemos realizar acciones positivas y concretas para lograr el efectivo goce y cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas.

En virtud de lo antes expuesto, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ÚNICO.-** Se adiciona un párrafo quinto al artículo 8º y se recorren los subsiguientes de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 8º.** …

…

…

…

El Estado de Coahuila, promoverá y garantizará el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas en situación de vulnerabilidad, las cuales serán consideradas como prioritarias en las políticas públicas, legislativas y en los programas sociales que a cargo del Estado y los municipios, los cuales además, promoverán las acciones afirmativas necesarias para el correcto desarrollo de sus derechos, en los términos de las leyes respectivas.

…

…

…

…

…

**ARTÍCULOS TRANSITORIOS.**

**PRIMERO.-** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO.-**Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Así lo acuerdan las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez (Secretario), Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda, Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza. En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 22 de septiembre de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**DICTAMEN** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la propuesta de iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforma el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática; y,

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 27 del mes de mayo del presente año, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la propuesta de iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la propuesta de iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforma el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática; y,

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la propuesta de la propuesta de iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforma el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática, se basa en las consideraciones siguientes:

**EXPOSICION DE MOTIVOS.**

*“De acuerdo con el Jurista Carlos Requena, uno de los principales problemas a los que se enfrentan los ciudadanos en los tribunales, es justamente la falta de claridad y un lenguaje fácil y entendible en las resoluciones y sentencias. Este problema se origina especialmente en el hecho de que algunas élites de las ciencias, finanzas, impuestos, medicina o jurisprudencia tienen la errónea creencia de que, a mayor complejidad del lenguaje, más elevado o profundo es su mensaje.[[5]](#footnote-5)*

*Palabras como moratoria, ab initio, litis expensas, usucapión, premoriencia, sobreseimiento, litispendencia, subrogación, non bis in ídem y concusión, son apenas algunos términos con los que las personas comunes suelen toparse cuando hablan con un abogado, un juez o se enfrentan a un procedimiento legal, lo cual complica su efectivo acceso a la justicia al no comprender el lenguaje que se suele utilizar en el ámbito jurídico.*

*El ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz ha sostenido que el exceso de transcripciones, su volumen y el uso de un lenguaje oscuro y, en ocasiones, arcaico son, por desgracia, las notas características de las sentencias del poder judicial.[[6]](#footnote-6) Lo cual constituye un problema para los justiciables, al no poder entender ni interpretar las resoluciones judiciales que afectan su esfera de derechos.*

*Por otro lado, el tema de la claridad en la redacción de las sentencias ha sido motivo de análisis en ponencias internacionales, de hecho, durante XVIII Cumbre Judicial Iberoamericana expertos de varias naciones realizaron un estudio del lenguaje y la redacción de diversas sentencias emitidas en ocho países de América Latina, incluido México, encontrando que la mayoría contenía:*

* *Palabras de comprensión exclusiva para juristas,*
* *Expresiones anacrónicas,*
* *Frases muy técnicas y redundantes,*
* *Párrafos y frases oscuras y retóricas,*
* *Lenguajes Inentendibles y obsoletos,*
* *Excesivo uso de latín,*
* *Redacción barroca y,*
* *Demasiadas citas jurisprudenciales y doctrinarias enredadas.*

*En consecuencia y como sostiene Carlos Requena, esto ha propiciado que los movimientos ciudadanos a favor de la claridad en el lenguaje jurídico, han tomado gran fuerza e incluso en algunos otros países se han ido consolidando con el tiempo.[[7]](#footnote-7)*

*En el año 1995, la Comisión Europea de Derechos Humanos, lanzó una campaña titulada Fight The Fog (luchar contra la niebla) para promover el uso de un estilo jurídico más claro. En Suecia, desde 1976 se establecieron mecanismos para traducir leyes y determinaciones al lenguaje ciudadano. La tendencia se ha replicado en otras naciones como Australia, Reino Unido y España. En Estados Unidos surgió un movimiento denominado Plain English Language, (Lengua Inglesa Simple) donde abogados y autoridades tienen como finalidad aprender a transmitir las reglas jurídicas en favor de la ciudadanía, pero en términos coloquiales sin perder precisión técnica.[[8]](#footnote-8)*

*En México este movimiento también ha crecido dentro y fuera del poder judicial. Recientemente el Consejo de la Judicatura Federal, lanzó un documento de trabajo titulado: “Pautas para la elaboración de resoluciones”, en el que se establece que los juzgadores deben emplear un lenguaje útil, breve y eficiente que sea de fácil entendimiento para las partes de un juicio.[[9]](#footnote-9) Además, en el año 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió una sentencia en formato lectura fácil para una persona con síndrome de Asperger.[[10]](#footnote-10)*

*La necesidad de que las sentencias y resoluciones judiciales sean claras, accesibles, precisas y fáciles de entender, deriva justamente del derecho que toda persona tiene al acceso a la justicia, pues como sostiene el jurista argentino Guillermo González Zurro en su artículo titulado Sentencias y lenguaje claro: “el acceso a la justicia comprende el derecho a la información en lenguaje claro lo que implica expandir los límites herméticos del lenguaje judicial, cerrado a especialistas y excesivamente formal a una justicia más abierta y más accesible a los ciudadanos y a los usuarios”. [[11]](#footnote-11)*

*El autor además, sostiene que el lenguaje claro no es sinónimo de fácil, pues: “Mantiene la dificultad de los problemas propios del Derecho, no suprime ninguna información esencial, es preciso. Pero todo ese contenido se intenta comunicar de una manera más comprensible, más legible y clara”.*

*Finalmente, cabe destacar que en el caso de nuestro Estado, el artículo 154 de la Constitución Política de Coahuila ya establece desde el año 2013, que las sentencias deben ser claras, accesibles y precisas, lo cual constituye una garantía de acceso a la justicia, que consideramos debe ser llevada a la Constitución Federal a fin de que tal derecho quede consagrado en el máximo ordenamiento nacional y se convierta así en un mandato para todos los órganos de impartición de justicia del país.*

*No se trata de limitar ni mucho menos vulgarizar el lenguaje jurídico, sino establecer lineamientos y buenas prácticas judiciales que permitan a la ciudadanía acceder a las sentencias, resoluciones y otros documentos legales, de forma fácil y sencilla, maximizando de esta manera la protección de sus derechos de seguridad jurídica y con ello facilitarles el acceso a la justicia”.*

**TERCERO.-** Los integrantes de esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, realizamos el estudio y análisis del contenido y alcances de la iniciativa, la cual propone una reforma al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer en el segundo párrafo que las sentencias y resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales, deberán ser redactadas en un lenguaje claro, preciso, adecuado, accesible y de fácil interpretación para las partes.

* Primeramente, iniciaremos por mencionar que una sentencia, es una resolución de controversias que surgen entre particulares, o entre particulares y autoridades, las cuales dictan los órganos jurisdiccionales a través de la aplicación de las normas jurídicas vigentes, bajo los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos; con base en los hechos y pruebas que las partes en conflicto hayan exhibido para demostrar su dicho.

En este tenor, para los integrantes de esta dictaminadora, el acceso a la información jurisdiccional debe ir más allá del conocimiento de las resoluciones, toda vez que consideramos que el derecho al acceso a la justicia implica que la ciudadanía, es decir aquellos que no son expertos en materia jurídica, comprenda las decisiones de los tribunales, y para que esto sea posible, es necesario que los ejecutores del derecho emitan sentencias claras que permitan ser comprendidas por la ciudadanía en general, lo cual redundará en una mayor transparencia y certeza institucional que fomente la confianza de los tribunales.

Lo descrito en al párrafo anterior, coadyuvará a establecer un estado democrático de derecho, porque una comprensión plena de la esfera de derechos como de obligaciones, garantiza certeza, ya que no podemos ser omisos, que en la actualidad la función de los órganos jurisdiccionales ha estado envuelta en una crisis de credibilidad que requiere medidas efectivas de comunicación entre jueces y justiciables, siendo por ello, que se debe trabajar en la generación de resoluciones de fácil entendimiento, haciendo más transparente la labor jurisdiccional.

Como bien se señala en la exposición de motivos, la claridad en la redacción de las sentencias ha sido motivo de análisis en ponencias nacionales e internacionales, y en nuestra constitución local, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 26 de Abril de 2013, el Decreto 201, una reforma al artículo 154 en la cual se estableció que toda persona tiene derecho al acceso a la justicia de manera pública, gratuita, pronta, expedita y completa para tutelar de manera efectiva sus derechos fundamentales, estableciendo que dicha tutela se regirá, entre otros, por el principio del derecho a obtener una resolución fundada y motivada que ponga fin al proceso y que toda resolución deberá ser ***clara, precisa y accesible****.*

Es por ello, que secundamos la propuesta que se hace a través de la presente iniciativa, a fin de que tal derecho quede consagrado en la Constitución Federal, a fin de que se establezcan mejores prácticas judiciales que coadyuven a que la ciudadanía acceda *a las sentencias, resoluciones y otros documentos legales*, de forma fácil y sencilla, a fin de minimizar la complejidad intertextual.

Por las consideraciones que anteceden se estima pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**A C U E R D O**

**ÚNICO.-** Se aprueba que la LXI Legislatura del Congreso del Estado, en ejercicio de la facultad que le concede la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presente una propuesta de iniciativa con Proyecto de Decreto, por la que se reforma el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en la forma siguiente:

**ÚNICO.-** Se reforma el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

***Artículo 17****…*

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales**. Las sentencias y resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales, deberán ser redactadas en un lenguaje claro, preciso, adecuado, accesible y de fácil interpretación para las partes.”**

…

…

…

…

…

…

…

**T R A N S I T O R I O S**

**PRIMERO.-** Por lo expuesto y fundado, instrúyase a la Oficialía Mayor de este Congreso, para que la presente propuesta de iniciativa sea remitida a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para los trámites correspondientes.

**SEGUNDO.-** Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda, Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 22 de septiembre de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y Especial para la Garantía de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa de Decreto que crea la Ley de Adopciones y Acogimiento Familiar para el Estado de Coahuila de Zaragoza y reforma diversas disposiciones de la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 10 del mes de julio del presente año, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, en misma fecha se turnó a estas Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y Especial para la Garantía de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes, la iniciativa de Decreto que crea la Ley de Adopciones y Acogimiento Familiar para el Estado de Coahuila de Zaragoza y reforma diversas disposiciones de la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y Especial para la Garantía de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes, con fundamento en los artículos 84, 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa de Decreto que crea la Ley de Adopciones y Acogimiento Familiar para el Estado de Coahuila de Zaragoza y reforma diversas disposiciones de la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

***E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S***

*“El ambiente en el que niñas, niños y adolescentes crecen es un elemento determinante de su desarrollo. En sus primeros años el ser humano establece vínculos y recibe estímulos que le permiten adquirir las habilidades necesarias para relacionarse con su entorno y sientan las bases de todo su crecimiento en el futuro.*

*Por ello, vivir en familia constituye un derecho fundamental de niños, niñas y adolescentes. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos* *y la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado Mexicano hacen referencia a la importancia de la misma y al deber que tienen los Estados de adoptar medidas para su protección y restitución[[12]](#footnote-12).*

*Acorde a la visión de la doctrina de la situación irregular, durante siglos se creyó que las instituciones como asilos o internados eran la alternativa para niñas, niños y adolescentes que no encontraban cuidados adecuados en su familia de origen. Sin embargo, hoy se sabe con total evidencia que los procesos de institucionalización prolongados los dañan de forma severa, con efectos especialmente alarmantes en la primera infancia.*

*Una institucionalización prolongada tiene consecuencias perjudiciales graves sobre la salud y el desarrollo infantil. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), más de seis meses de institucionalización pueden afectar el desarrollo cognitivo, las relaciones de apego y con los pares, el desarrollo neuroendócrino y la salud mental, debido al escaso contacto físico y emocional, junto con la falta de estímulo e interacción que padecen en dichos centros[[13]](#footnote-13).*

*En definitiva, la práctica de acoger a niñas, niños y adolescentes en centros de asistencia social los deja expuestos a nuevas vulneraciones y a sufrir secuelas temporales o permanentes, al privarlos de crecer en un entorno familiar y en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, al que todos tienen derecho. Entre las variables que tienen impacto sobre el bienestar y el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes se encuentra el tiempo de la institucionalización, la posibilidad de establecer vínculos de apego seguro con los cuidadores, la proporción y la estabilidad del personal a cargo de su cuidado cotidiano, la idoneidad de las personas que cumplen esta función, entre otras.*

*Dado el consenso sobre los efectos, en su mayoría negativos, que la vida en acogimiento residencial tiene para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos hacen referencia específica a su derecho a vivir en su propia familia, a la necesidad de agotar esfuerzos para fortalecer sus capacidades de cuidado y, en caso de que esto no sea posible, a encontrar soluciones basadas en ámbitos familiares[[14]](#footnote-14).*

*La adopción y el acogimiento familiar son formas de restituirles ese derecho a vivir, crecer y desarrollarse dentro de un núcleo familiar, que garantice la protección integral de sus derechos, de ahí la importancia de establecer procedimientos expeditos, simples y orientados siempre por su interés superior.*

*Por ello, a través de la presente iniciativa se propone la creación de la* *Ley de Adopciones y Acogimiento Familiar para el Estado de Coahuila de Zaragoza, la cual promueve un ejercicio de armonización legislativa con las disposiciones federales, así como diversas acciones tendientes a reformular de manera integral, los procesos organizacionales y administrativos, para hacer de la adopción un proceso cada vez más ágil, transparente y efectivo.*

*La promulgación en el año 2014 de la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila de Zaragoza, y posteriormente de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, marcó un hito en materia de sus derechos humanos en México, una nueva forma de mirar, relacionarse e interactuar con la realidad de los niños y adolescentes como sujetos de derechos.*

*El marco jurídico de la adopción en el Estado de Coahuila de Zaragoza ha sido objeto de un constante proceso de perfeccionamiento en los últimos años, sin embargo, el vigente Reglamento del Proceso Administrativo de Adopciones del Estado de Coahuila de Zaragoza, data del día 27 de septiembre de 2013, por lo que resultaba ineludible adecuar y modernizar dicho marco jurídico a fin de garantizar los derechos a todas las niñas, niños y adolescentes sin discriminación de ningún tipo o condición.*

*Algunas de las novedades del proyecto son la disminución o supresión de requisitos y exigencias innecesarias, que no solo representaban esfuerzos y gastos para las personas solicitantes, sino que no contribuían a determinar la idoneidad para convertirse en familia adoptiva, al mismo tiempo se elimina cualquier vestigio discriminatorio por razón de sexo, preferencias o condición de salud, como la exigencia de pruebas de VIH/SIDA o certificado médico de infertilidad.*

*Se precisan plazos y términos respecto a la elaboración de los estudios a las personas solicitantes, para la expedición del certificado de idoneidad y el inicio del procedimiento judicial de adopción, así como para la revocación del consentimiento otorgado ante la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia con propósito de adopción, lo anterior a fin de brindar seguridad y certeza jurídica a las madres y padres biológicos, a los potenciales adoptantes y en particular a las niñas, niños y adolescentes susceptibles de adopción.*

*Se amplía el objeto y atribuciones del actual Consejo Técnico de Adopciones, adicionando a las vigentes de conocer de las solicitudes de adopción y emitir opinión respecto de éstas, las relativas a la certificación y capacitación de las personas solicitantes de constituirse como familia de acogida, por lo que dicha modificación conlleva en congruencia un cambio en su integración y denominación a Consejo Técnico de Evaluación.*

*La incorporación como integrantes del Consejo Técnico de Evaluación, a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, dependencia encargada de formular y conducir acciones que propicien la integridad y la transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas; a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza, organismo encargado de promover, divulgar y proteger los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio de la entidad; así como de dos personas representantes de la sociedad civil, que materializan los esfuerzos por garantizar que todas las adopciones en la entidad, sean lícitas, tengan carácter transparente y no supongan la explotación de las niñas, niños, adolescentes y las familias involucradas en las mismas, sino que les beneficien.*

*La revisión del proceso administrativo de adopción y las propuestas para su agilización y optimización no deben entenderse como la búsqueda de asignación indiscriminada e irresponsable de niñas, niños y adolescentes a cualquier núcleo familiar, sino que esta revisión se debe entender y realizar en un marco de corresponsabilidad absoluta de la sociedad y el Estado con la finalidad de proporcionar una familia a quienes carecen de ella.*

*En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño y el principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño, este proyecto ha sido elaborado con un enfoque basado en derechos humanos priorizando el principio pro-niño, es decir, con consideración prioritaria de atender al interés superior de las niñas, niños y adolescentes, así como, eliminando cualquier disposición jurídica que pudiera admitir interpretaciones discrecionales o alejadas a dicho principio rector.*

*Mediante esta propuesta se busca también regular de forma clara y precisa la figura de la Familia de Acogida, establecida en la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila de Zaragoza, con el fin de enlazar los conceptos y construir los medios necesarios para su aplicación.*

*Adicionalmente, se establece un apartado de medios de impugnación como mecanismos a disposición de los particulares que se consideren agraviados en su esfera de derechos e intereses jurídicos, que les permita inconformarse contra el acuerdo donde se describan las razones por las que la certificación o el certificado de idoneidad no fueron expedidos.*

*De esta forma, la presente iniciativa permitirá responder al compromiso gubernamental establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2017–2023, en su estrategia 2.9.3, la cual contempla el “Garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes que no están sujetos a la patria potestad a vivir en familia de manera permanente, a fin de lograr su pleno desarrollo e instalarlos en una familia idónea que satisfaga sus necesidades y garanticen sus derechos fundamentales”[[15]](#footnote-15).*

*Es importante resaltar que la presente iniciativa no generará impacto presupuestario alguno, puesto que no contempla la creación de puestos, plazas o áreas, además de que dispone que la participación en el Consejo Técnico de Evaluación será de carácter honorario.*

*Así mismo, resulta necesario adecuar también la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila de Zaragoza, con la finalidad de asegurar el cumplimento y operatividad de esta nueva normativa.*

*Expuesto lo anterior, esta nueva ley tiene como finalidad definir claramente las funciones y atribuciones de los actores involucrados en procesos de protección e inclusión de niñas, niños y adolescentes en una familia, para que, tanto servidoras y servidores públicos como la ciudadanía en general puedan tener certeza jurídica en la realización de sus atribuciones y trámites, pero, sobre todo se pretende garantizar que niñas, niños y adolescentes sean incorporados a familias que les brinden una vida sana, digna y feliz, para su desarrollo integral.”*

**TERCERO.-** Los integrantes de estas Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y la Especial para la Garantía de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes, nos abocamos al estudio de la iniciativa que crea la Ley de Adopciones y Acogimiento Familiar para el Estado de Coahuila de Zaragoza, y que además, plantea reformar diversas disposiciones de la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila de Zaragoza, y para un mejor proveer realizamos un cuadro, a fin de analizar el contenido de la nueva ley; asimismo realizamos un comparativo de lo que se pretende reformar de la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas, contrastándola con la ley vigente.

|  |  |
| --- | --- |
| ***LEY DE ADOPCIONES Y ACOGIMIENTO FAMILIAR PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA*** | |
| **TÍTULO PRIMERO**  **DISPOSICIONES PRELIMINARES** | |
| **CAPÍTULO ÚNICO**  **DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN Y OBJETO** | **Su aplicación:** corresponderá al Poder Ejecutivo, a través de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección de Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza.  **El objeto:** garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes en materia de adopción y acogimiento familiar.  De conformidad a lo establecido en:  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  La Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza.  En los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte.  En la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  La Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila de Zaragoza.  La Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza.  El Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Coahuila de Zaragoza.  Así como en los demás ordenamientos legales aplicables.  Establece que podrá ser adoptante o familia de acogida toda persona que reúna los requisitos que se establecen en Ley, cualquiera que fuese su origen étnico o nacional, discapacidad, condición social, religión, estado civil, orientación y preferencia sexual, identidad y expresión de género.  Determina la prohibición de cualquier cobro por concepto de tramitación de adopciones, acogimiento pre-adoptivo y familias de acogida en los casos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en acogimiento residencial en centros de asistencia social.  Asimismo en este capítulo se enlista elglosario que permite identificar de forma unívoca los conceptos contenidos en la ley. |
| **TÍTULO SEGUNDO**  **DE LOS PRINCIPIOS Y DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SUSCEPTIBLES DE ADOPCIÓN** | |
| **CAPÍTULO I**  **DE LOS PRINCIPIOS RECTORES** | **Establece como** principios rectores en el cumplimiento, interpretación y aplicación de esta Ley los contemplados en:  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  La Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza.  Los tratados internacionales en materia de adopción y protección a la infancia.  La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  La Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila de Zaragoza, que atiendan a la protección del interés superior de las niñas, niños y adolescentes. |
| **CAPÍTULO II**  **DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**  **SUSCEPTIBLES DE ADOPCIÓN** | Establece quelas autoridades involucradas en el proceso integral de adopción, observarán lo siguiente:   1. Garantizar la plena observancia de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, de conformidad con el principio del interés superior de la niñez; 2. Asegurar que todas las niñas, niños y adolescentes sean escuchados de acuerdo con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez; 3. Garantizar que quienes consientan la adopción, así como quienes la soliciten, reciban una asesoría integral que les permita conocer los alcances jurídicos, psicoafectivos, familiares y sociales de la misma; 4. Implementar las acciones necesarias para garantizar que la adopción no sea motivada por la obtención de beneficios económicos para quienes participen en ella; 5. Garantizar que las niñas, niños y adolescentes gocen de los derechos y garantías de seguridad jurídica y debido proceso establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones aplicables. |
| **CAPÍTULO III**  **DE LAS PROHIBICIONES EN LA ADOPCIÓN** | Establece como prohibiciones las siguientes:   1. La promesa de adopción durante el proceso de gestación; 2. Que las personas solicitantes de adopción tramiten simultáneamente dos o más procedimientos de adopción; 3. La adopción privada, en los términos establecidos por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza; 4. Que la adopción se realice para fines de venta, sustracción, retención u ocultación ilícita, tráfico, trata de personas, explotación, trabajo infantil o cualquier ilícito; 5. El contacto de la madre, padre o ambos padres, que entregaron en adopción a una niña, niño o adolescente, con las personas solicitantes de adopción, la persona que se pretende adoptar o con cualquier persona involucrada en la adopción, con excepción de los casos en que los adoptantes sean familiares biológicos, de la familia extensa o cuando la persona adoptada desee conocer sus antecedentes familiares y sea mayor de edad; 6. La obtención directa o indirecta de beneficios materiales o de cualquier índole, por la familia de origen o extensa de la persona que se pretende adoptar, o por cualquier persona, así como por funcionarios o trabajadores de instituciones públicas o privadas y autoridades involucradas en el proceso de adopción; 7. Que las personas titulares o las que presten sus servicios en los centros de asistencia social, permitan visitas o cualquier tipo de relación que pudieran generar vínculos afectivos o de apego entre las niñas, niños o adolescentes susceptibles de adopción y las personas que pretendan adoptar, sin autorización del Consejo; 8. Que la PRONNIF de inicio al procedimiento judicial, sin la previa expedición del certificado de idoneidad o la asignación del Consejo; 9. Toda adopción contraria a las disposiciones constitucionales, los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano o al interés superior de la niñez y su adecuado desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. |
| **CAPÍTULO IV**  **DEL CONSENTIMIENTO OTORGADO** **ANTE**  **LA PRONNIF CON PROPÓSITO DE ADOPCIÓN** | Establece los supuestos en que deberán concurrir una madre, padre o ambos padres de una niña, niño o adolescente, que no pudieran o no estuvieran en las condiciones necesarias para la crianza de éste, para poder hacer la entrega voluntaria del mismo a la PRONNIF con el propósito de que sea dado en adopción, siendo los siguientes:   1. Haya sido registrado y se presentare en ese acto el acta de nacimiento; 2. Se exhiba identificación oficial de quien se ostenta como madre, padre, o ambos, o por quien ejerce la tutela o patria potestad; 3. Se corrobore que han sido convenientemente asesoradas y debidamente informadas por la PRONNIF, de las consecuencias legales que la adopción implica, del consentimiento otorgado y en particular de la ruptura de los vínculos jurídicos entre la niña, niño o adolescente y su familia de origen; 4. Que el consentimiento haya sido otorgado libremente, sin que medie pago o compensación alguna; 5. Que el consentimiento de la madre, padre o ambos, sea otorgado cuando menos diez días después del parto.   Determina que las personas titulares de la Dirección de Adopciones y de las Subprocuradurías Regionales de la PRONNIF estarán investidas de fe pública con el objeto de recabar el consentimiento para la adopción, debiéndose levantar un acta circunstanciada ante la presencia de dos testigos, en la cual conste:  La entrega de la niña, niño o adolescente.  El propósito con el que se hizo la misma.  La manifestación expresa de la situación familiar y los motivos que originan tal entrega.  Anexando además al acta la documentación requerida.  Establece que no procederá la asignación de la niña, niño o adolescente a una familia adoptiva hasta transcurrido un término de treinta días naturales, contados a partir del otorgamiento del consentimiento, en el cual la madre o el padre biológico, o cualquiera de ellos en el caso de que haya sido otorgado conjuntamente, podrán solicitar la revocación del consentimiento otorgado ante la PRONNIF, la cual, en caso de ser procedente, levantará un acta circunstanciada asentando tal reintegración al núcleo de su familia de origen o extensa, siempre que ello no represente un riesgo al interés superior de la niñez.  Una vez transcurrido el término señalado, sin que se revoque el consentimiento otorgado, y previa la satisfacción de los requisitos señalados, se podrá asignar a la niña, niño o adolescente en acogimiento pre-adoptivo. |
| **TÍTULO TERCERO**  **DEL CONSEJO TÉCNICO DE EVALUACIÓN** | |
| **CAPÍTULO I**  **DISPOSICIONES GENERALES** | Habrá un Consejo como órgano colegiado interdisciplinario, técnico y de opinión, su objeto será conocer, analizar, valorar y dictaminar las solicitudes de adopción y acogimiento familiar en relación a las niñas, niños y adolescentes que se encuentren bajo acogimiento residencial en un centro de asistencia social como una medida especial de protección, así como de emitir opinión respecto de las adopciones promovidas ante el Poder Judicial del Estado de las niñas, niños y adolescentes no institucionalizados.  Estará encargado de garantizar los derechos de las niñas, niños o adolescentes susceptibles de adopción, así como de procurar su debida asignación e integración a personas solicitantes de adopción que resulten idóneas, para que les proporcionen las condiciones necesarias para brindarles una crianza positiva, un sano desarrollo y el máximo bienestar posible.  Estará integrado por:   1. Una presidencia, a cargo de la persona titular de la Dirección del Sistema DIF; 2. Una secretaría técnica, a cargo de la persona titular de la PRONNIF; 3. Una secretaría auxiliar, a cargo de la persona titular de la Dirección de Adopciones; 4. Una persona representante del Tribunal Superior de Justicia del Estado; 5. Una persona representante del Sistema DIF, que por las funciones que desarrollen, así como por sus conocimientos especializados en psicología, trabajo social, derecho, docencia o medicina, sean designados por la persona titular de la presidencia; 6. Una persona representante del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de donde sean originarios o atendidos las niñas, niños o adolescentes susceptibles de adopción; 7. La persona titular del centro de asistencia social donde se encuentren acogidas las niñas, niños o adolescentes susceptibles de adopción respecto de quien se propondrá asignación de familia; 8. Dos personas representantes de las asociaciones civiles constituidas por adoptantes o adoptados, o ambos, cuyo objeto social sea promover la institución de adopción o del acogimiento familiar, así como asesorar, orientar y brindar apoyo a sus integrantes, designados conforme a la convocatoria que el Consejo Técnico de Evaluación emita para tal efecto.   Establece que todas las personas integrantes del Consejo tendrán derecho a voz y voto, y pudiendo nombrar en sus ausencias, a sus respectivos suplentes, quienes contarán con voz y voto, y deberán ser servidores públicos del nivel jerárquico inmediato inferior al de la persona titular que suplan, cuya designación se hará a través de un escrito dirigido a la secretaría técnica.  En relación a los acuerdos y resoluciones del mismo, se tomarán por mayoría de votos de sus integrantes presentes en la sesión, en caso de empate, la presidencia tendrá voto de calidad.  Los cargos del Consejo serán honorarios, y se regirán con base a los principios de legalidad, debido proceso, honradez, confidencialidad, celeridad procesal e interés superior de la niñez.  Como invitadas permanentes a las sesiones del Consejo, con derecho a voz, pero sin voto, podrán ser la persona titular de la Presidencia Honoraria del Sistema DIF, así como una persona representante de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza y de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas.  La persona titular de la presidencia podrá convocar con voz, pero sin voto, a personas expertas en materia de adopción o acogimiento familiar, académicas o integrantes de la sociedad que se consideren necesarias, para que expresen criterios que orienten la toma de decisiones del Consejo.  Las facultades y obligaciones del Consejo serán las siguientes:   1. Fomentar la cultura de la adopción y el acogimiento familiar de las niñas, niños y adolescentes, en especial los de atención prioritaria; 2. Proponer políticas, acciones y lineamientos en materia de adopción y acogimiento familiar; 3. Realizar las sesiones necesarias para el cumplimiento de su objeto; 4. Verificar que las solicitudes de adopción y certificación estén debidamente requisitadas en los términos de las disposiciones aplicables; 5. Analizar los estudios de psicología, trabajo social y evaluación médica practicados a las personas solicitantes de adopción y de constituirse como familia de acogida; 6. Determinar, con base en las evaluaciones respectivas, las características de las personas solicitantes de adopción y de constituirse como familia de acogida; 7. Analizar los expedientes de solicitud de adopción o de certificación de familia de acogida propuestos por la secretaria técnica del Consejo, atendiendo en todo momento al interés superior de la niña, niño o adolescente; 8. Aplicar los criterios para asignación de una familia adoptiva a una niña, niño o adolescente; 9. Verificar la adaptación de la niña, niño o adolescente con la familia asignada y en su caso levantar el acta respectiva, previamente al procedimiento judicial de adopción; 10. Emitir opinión respecto de las adopciones promovidas ante el Poder Judicial del Estado de las niñas, niños y adolescentes no institucionalizados; 11. Solicitar la revaloración de las personas solicitantes de adopción y de constituirse como familia de acogida; 12. Determinar la baja de las solicitudes de adopción; 13. Conocer y analizar los resultados de las convivencias autorizadas; 14. Guardar estricta confidencialidad sobre todos los asuntos de su competencia; 15. Las demás que establezca la presente Ley y otras disposiciones aplicables. |
| **CAPÍTULO II**  **DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS** | En este capítulo se mencionan las funciones tanto de la persona titular de la presidencia, como de la secretaría técnica y de los vocales los cuales tendrán las funciones siguientes:  Asimismo, establece que el Consejo sesionará bimestralmente de manera ordinaria, y de forma extraordinaria cuando sea necesario, en atención a la importancia y urgencia de los asuntos que deban tratar, a convocatoria de la persona titular de su presidencia, o en su caso, de la secretaría técnica.  Se señalan los casos en que las personas integrantes del Consejo estarán impedidas por lo que deberán de excusarse por escrito.  Establece que la PRONNIF impartirá el curso de capacitación para madres y padres adoptivos a las personas solicitantes de adopción, informándoseles los aspectos psicosociales, administrativos y judiciales de la misma, y una vez concluido el curso, se les hará entrega de la constancia de participación a quienes hayan acreditado el mismo, momento a partir del cual las personas solicitantes de adopción contarán con sesenta días naturales para la integración del expediente administrativo de adopción. |
| **TÍTULO CUARTO**  **DEL PROCESO DE ADOPCIÓN** | |
| **CAPÍTULO I**  **DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**  **SUSCEPTIBLES DE ADOPCIÓN** | Se requiere que para que las niñas, niños o adolescentes sean susceptibles de adopción, deberá estar resuelta su situación jurídica, a través de:   1. Sentencia ejecutoriada de juicio especial de pérdida de patria potestad; 2. Consentimiento expreso otorgado por la madre, padre o ambos padres, de conformidad con la legislación aplicable; 3. Tratándose de niñas, niños y adolescentes expósitos, abandonados o en acogimiento residencial en un centro de asistencia social, y de los cuales nadie ejerza la patria potestad, cuando haya transcurrido el término establecido en el artículo 69 de la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila de Zaragoza. |
| **CAPÍTULO II**  **DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN** | En este capítulo se establecen las fases del procedimiento administrativo quelas personas que deseen adoptar, además de cumplir con los requisitos de adopción establecidos en la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza, deberán iniciar ante la PRONNIF, así como los documentos que deberán exhibir en original o copia certificada.  También se señala que en caso de que las personas solicitantes de adopción no cumplan con todos los requisitos señalados o los mismos presenten alguna deficiencia, se prevendrá a los interesados para que en un término que no exceda de treinta días hábiles tratándose de adopciones nacionales y noventa días hábiles en caso de adopciones internacionales, los subsanen, en caso contrario se desechará la solicitud y se procederá a la baja documental.  En el caso de las personas solicitantes de adopción extranjeras deberán acreditar su legal estancia en el país, así como su calidad migratoria y permiso para tramitar el procedimiento de adopción emitido por las autoridades migratorias correspondientes, debiendo cumplir además con los requisitos establecidos en el artículo 26 de la Ley en comento, debiendo presentar sus actas debidamente apostilladas o legalizadas.  Una vez presentada la solicitud, acompañada de los documentos requeridos, se programará una entrevista conjunta entre el equipo psicosocial y las personas solicitantes de adopción con la finalidad de explorar la historia familiar y en su caso de pareja, la motivación para la adopción y las expectativas ante la misma, así como el apoyo social del que disponen y los demás criterios a tomar en cuenta para su ulterior valoración.  Realizada la entrevista inicial, las personas solicitantes de adopción serán canalizadas a las áreas de trabajo social y psicología, para que se realicen los estudios correspondientes a fin de completar su expediente.  Establece que las autoridades podrán suspender el procedimiento administrativo de adopción cuando tengan razones para creer que ésta se realiza en contravención de lo establecido por la presente Ley. |
| **CAPÍTULO III**  **DEL CERTIFICADO DE IDONEIDAD** | Se señala que una vez integrado el expediente de las personas solicitantes de adopción con los requisitos establecidos y previa valoración psicológica, económica y de trabajo social necesarias para determinar su aptitud, la PRONNIF emitirá el certificado de idoneidad en un término que no excederá de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de los resultados de los estudios antes referidos, salvo que no tenga certeza respecto de la documentación que integra el expediente o que no cuente con suficientes elementos, supuestos en los que se podrá ampliar el plazo hasta por treinta días naturales.  Una vez emitido el certificado de idoneidad las personas solicitantes de adopción se integrarán en la lista de espera.  Las personas solicitantes de adopción no deberán tener contacto con las niñas, niños o adolescentes que pretendan adoptar, ni con sus padres o las personas que los tengan bajo su cuidado, hasta en tanto cuenten con un certificado de idoneidad y se autorice el inicio de convivencias, con excepción de los casos en que la adopción sea entre familiares.  Tratándose de adopciones internacionales, las personas solicitantes de adopción deberán obtener el certificado de idoneidad emitido por la autoridad central de su país de residencia.  En los casos que la PRONNIF resuelva la no emisión del certificado de idoneidad de las personas solicitantes de adopción, se podrá presentar una nueva solicitud transcurrido un año contado a partir de la notificación de dicha resolución.  El informe de adoptabilidad que emitan la PRONNIF deberá contener, por lo menos, los siguientes datos sobre la niña, niño o adolescente susceptible de adopción:   1. Nombre completo; 2. Lugar y fecha de nacimiento; 3. Edad; 4. Sexo; 5. Media filiación, así como los antecedentes familiares; 6. Situación jurídica; 7. Condición e historia médica; 8. Características psicológicas, así como necesidades afectivas y emocionales; 9. Evolución pedagógica; 10. Requerimiento de atención especial; 11. Información sobre los motivos por los cuales no se pudo encontrar a una familia nacional que pudiera adoptar a la niña, niño o adolescente, tratándose de adopciones internacionales; 12. Opinión de la niña, niño y adolescente en relación a la adopción, siempre que sea posible de acuerdo con su edad, desarrollo cognoscitivo y grado de madurez.   La PRONNIF podrá solicitar a los centros de asistencia social que tengan bajo su cuidado a la niña, niño o adolescente, cualquier información adicional a la prevista que considere necesaria para salvaguardar el interés superior de la niñez, misma que deberá incluirse en el informe de adoptabilidad. |
| **CAPÍTULO IV**  **DE LOS ESTUDIOS QUE DEBEN REALIZARSE LAS**  **PERSONAS SOLICITANTES DE ADOPCIÓN Y DE CONSTITUCIÓN**  **COMO FAMILIA DE ACOGIDA** | Establece que la PRONNIF deberá practicar estudios socioeconómicos a las personas solicitantes de adopción y de constituirse como familia de acogida, los cuales deberán contener, por lo menos, lo siguiente:   1. Datos generales; 2. Situación laboral; 3. Composición familiar; 4. Situación económica y patrimonial; 5. Características de la vivienda y el entorno; 6. Hábitos.     Las personas solicitantes de adopción y de constituirse como familia de acogida deberán realizarse, a través de instituciones públicas del sistema de salud, los siguientes estudios médicos:   1. Grupo sanguíneo y Factor Rhesus (Rh); 2. Biometría hemática; 3. Química sanguínea; 4. Examen general de orina.   El certificado médico deberá autenticar la existencia de una situación aceptable de salud física de las personas solicitantes de adopción y de constituirse como familia de acogida, que no conlleve discapacidad grave o severa, o un riesgo inminente de muerte.  En caso de requerirlo, el equipo psicosocial podrá consultar al personal médico que expidió el certificado a fin de aclarar su contenido.  Determina que la PRONNIF deberá practicar estudios psicológicos a las personas solicitantes de adopción y de constituirse como familia de acogida, los cuales deberán contener, por lo menos, las siguientes baterías de pruebas:   1. Entrevista psicológica, en el caso de que las personas solicitantes de adopción y de constituirse como familia de acogida sean cónyuges o concubinos, la entrevista deberá ser en pareja; 2. CUIDA (Cuestionario para la Evaluación de Adoptantes, Cuidadores, Tutores y Mediadores); 3. 16 PF-5 (16 Factores de Personalidad de Cattell); 4. MSI-R (Inventario de Satisfacción Marital Revisado), en el caso de que las personas solicitantes de adopción y de constituirse como familia de acogida sean cónyuges o concubinos; 5. SENA (Sistema de Evaluación de Niños y Adolescentes); 6. MSCEIT (Test de Inteligencia Emocional de Mayer-Salovey-Caruso); 7. MMPI-2 (Inventario Multifásico de la Personalidad de Minnesota); 8. Cualquier otro que se requiera para acreditar la viabilidad psicológica de las personas solicitantes de adopción y de constituirse como familia de acogida.   Todas las pruebas tendrán una vigencia de seis meses a partir de la notificación de su resultado.  Asimismo en este capítulo se consideran impedimentos de las personas solicitantes de adopción y de constituirse como familia de acogida, que pueden afectar el sano desarrollo de niñas, niños o adolescentes, los siguientes:   1. Cualquier patología o rasgos de personalidad que pongan en riesgo a las niñas, niños o adolescentes; 2. La inestabilidad emocional de las personas solicitantes de adopción o de constituirse como familia de acogida; 3. La inestabilidad o poca solidez de pareja, en el caso de que las personas solicitantes de adopción o de constituirse como familia de acogida sean cónyuges o concubinos; 4. La violencia familiar; 5. La incapacidad de atenderse a sí mismo o cuidar de otros; 6. La escasa adaptación al medio o contar con pocas redes de apoyo social o familiar; 7. La motivación o razón para adoptar no favorezca el interés superior de la niña, niño o adolescente.   En el supuesto de que las personas solicitantes de adopción y de constituirse como familia de acogida presenten uno o más impedimentos que a juicio de la PRONNIF puedan ser subsanados, la misma deberá notificar en qué consisten, así como las recomendaciones y canalizaciones que estimen pertinentes para que los pueda subsanar en el plazo que se les indique para tal efecto.  Durante el referido plazo, se tendrá por suspendido temporalmente su procedimiento y antes de su vencimiento, las personas solicitantes de adopción y de constituirse como familia de acogida, deberán de comparecer nuevamente ante la PRONNIF, para acreditar que se resolvió satisfactoriamente el impedimento, para que esto sea verificado y en su caso se reactive el mismo.  Si las personas solicitantes de adopción y de constituirse como familia de acogida no cumplen en tiempo y forma las recomendaciones, se dará de baja su solicitud por falta de interés. |
| **CAPÍTULO V**  **DE LA ASIGNACIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES** | Se establece que la PRONNIF convocará al equipo psicosocial para analizar el expediente de la niña, niño o adolescente susceptible de adopción y de quienes conforman la lista de espera de personas solicitantes de adopción, con la finalidad de seleccionar candidatos idóneos, de acuerdo a las necesidades de la niña, niño o adolescente.  El análisis se basará en el grado de compatibilidad existente entre las necesidades y características de la niña, niño o adolescente con las personas solicitantes de adopción, para el cual se considerará la edad, el sexo, la personalidad, las expectativas de desarrollo social y económico, algún tipo de discapacidad, el diagnóstico médico, así como cualquier otro factor que favorezca la compatibilidad entre las personas solicitantes de adopción y la niña, niño o adolescente.  La PRONNIF presentará ante el Consejo, las razones que justifican las propuestas de asignación de las familias para cada niña, niño o adolescente.  El Consejo elegirá, entre las propuestas que le fueron presentadas, a las familias que considere que, en base al interés superior de la niñez, son las más adecuadas para la niña, niño o adolescente, estableciendo un orden de prelación entre estas y en su caso autorizará el inicio del periodo de convivencias pre-adoptivas.  La PRONNIF informará a las personas solicitantes de adopción que les ha sido asignado una niña, niño o adolescente y los citará a una reunión con la finalidad de conocer su opinión.  En la reunión, en base al expediente de la niña, niño o adolescente, las personas solicitantes de adopción recibirán información médica y psicológica, así como del desenvolvimiento y comportamiento de la niña, niño o adolescente en el centro de asistencia social en que se encuentra.  Una vez que conozcan las circunstancias generales y que hubieren expresado sus inquietudes y dudas, las personas solicitantes de adopción podrán aceptar o declinar la asignación propuesta.  En caso de que las personas solicitantes de adopción rechacen a un niño, niña o adolescente sin justificación suficiente, una vez efectuada la asignación y hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia de adopción, la PRONNIF propondrá al Consejo su baja definitiva de la lista de espera. |
| **CAPÍTULO VI**  **DE LAS CONVIVENCIAS PRE-ADOPTIVAS** | La PRONNIF podrá aprobar convivencias internas, mismas que siempre se llevarán a cabo en las instalaciones del centro de asistencia social en el que se encuentren bajo acogimiento residencial las niñas, niños o adolescentes, las cuales deberán ser supervisadas por personal de psicología de dichas instituciones o del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de donde sean originarios o atendidos las niñas, niños o adolescentes susceptibles de adopción, quienes deberán emitir los informes correspondientes, los cuales se integrarán al expediente de las personas susceptibles de adopción.  El personal de psicología que participe en la supervisión deberá contar con autorización y registro del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.  La PRONNIF elaborará el programa de convivencias internas, acorde a las necesidades de cada niña, niño o adolescente y posibilidades de las personas solicitantes de adopción, con un mínimo de tres convivencias, las cuales se desarrollarán en un plazo que no excederá de veinte días naturales, para estar en aptitud de determinar si existe compatibilidad, empatía e identificación; el número y modalidad de las convivencias dependerá de las necesidades específicas y la edad de cada niña, niño o adolescente, al final de éstas, emitirá un informe que será notificado al Consejo.  El Consejo podrá aprobar las convivencias externas una vez analizados los informes del periodo de adaptación remitidos por los especialistas que supervisaron las convivencias internas.  Las primeras convivencias externas, inicialmente no podrán tener una duración que exceda de cuatro horas, las cuales podrán incrementar hasta alcanzar un fin de semana de convivencia, sin pernocta, de acuerdo a las recomendaciones del área de psicología del centro de asistencia social.  En el transcurso de las convivencias internas como externas, el área de psicología puede realizar recomendaciones para mejorar estas.  El Consejo valorará los informes respecto de las convivencias dentro de los centros de asistencia social y determinará la viabilidad y el programa de convivencias externas, con un mínimo de tres convivencias, que deberán realizarse inicialmente durante el día sin considerar pernocta, en un plazo que no excederá de veinte días naturales.  Si de los informes de las convivencias pre-adoptivas se determina que no se consolidaron las condiciones de adaptación entre niñas, niños y adolescentes y las personas solicitantes de adopción, la secretaría técnica informará al Consejo para que resuelva lo conducente y analice la viabilidad de una nueva asignación, atendiendo al interés superior de la niñez.  En caso de ser favorables las convivencias externas y una vez que se haya generado un vínculo afectivo entre la niña, niño o adolescente y las personas solicitantes de adopción, se presentará un informe del periodo de adaptación al Consejo para que se pronuncie sobre el acogimiento pre-adoptivo, para lo cual deberá considerar los criterios establecidos en el artículo 389 de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza.  Las convivencias internas o externas podrán ser limitadas o suspendidas en cualquier momento por la autoridad correspondiente, cuando resultare necesario, tomando en consideración las recomendaciones efectuadas por los centros de asistencia social respectivos y los resultados de los informes del periodo de adaptación. |
| **CAPÍTULO VII**  **DEL ACOGIMIENTO PRE-ADOPTIVO** | El acogimiento pre-adoptivo es una modalidad de cuidado alternativo a través de la cual las personas solicitantes de adopción acogen en su seno a niñas, niños y adolescentes con fines de adopción, y asumen todas las obligaciones en cuanto a su cuidado y protección, de conformidad con el principio del interés superior de la niñez.  Para la designación del acogimiento pre-adoptivo, se deberá contar con:   1. Certificado de idoneidad expedido por la PRONNIF u otra Procuraduría de Protección a favor de las personas solicitantes de adopción; 2. Informe de adoptabilidad; 3. Informe del periodo de adaptación; 4. Asignación del Consejo.   A partir del inicio del periodo de acogimiento pre-adoptivo, la PRONNIF promoverá en un plazo que no excederá de treinta días hábiles el procedimiento judicial de adopción de conformidad con la legislación aplicable.  La PRONNIF deberá dar acompañamiento al proceso de adaptación e integración familiar, mediante visitas de seguimiento y orientación a través el equipo psicosocial, con el fin de prevenir o superar las dificultades que se puedan presentar.  Una vez iniciado el procedimiento judicial de adopción, las personas adoptantes no podrán reintegrar a la niña, niño o adolescente, sino solo mediante petición expresa ante la autoridad judicial que conozca de la adopción.  Una vez ejecutoriada la sentencia que declaró la procedencia de la adopción, la PRONNIF dará por concluido el procedimiento administrativo. |
| **TÍTULO QUINTO**  **DE LA ADOPCIÓN INTERNACIONAL** | |
| **CAPÍTULO ÚNICO**  **DISPOSICIONES GENERALES** | La adopción internacional se rige por los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano, en particular por la Convención sobre la Protección de Menores y la Cooperación en Materia de Adopción Internacional, y en lo conducente, por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el Código Civil Federal y la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza.  La PRONNIF es la autoridad competente para expedir el certificado de idoneidad, en los casos de adopciones internacionales, en donde se haga constar que las personas ciudadanas mexicanas o extranjeras residentes permanentes en el Estado, que pretenden adoptar en el extranjero, son aptas para ello. |
| **TÍTULO SEXTO**  **DEL SEGUIMIENTO POST-ADOPTIVO** | |
| **CAPÍTULO ÚNICO**  **DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO POST-ADOPTIVO** | El seguimiento post-adoptivo a la familia deberá efectuarse con una periodicidad de seis meses durante tres años contados a partir de que la sentencia judicial de adopción quede firme, pudiendo ampliar el plazo excepcionalmente en caso de ser necesario, con base en el interés superior de la niñez.  En los reportes del seguimiento realizados por la PRONNIF, se deberá apreciar la convivencia familiar y el desarrollo cotidiano de niñas, niños y adolescentes en su entorno, los cuales serán remitidos a la autoridad judicial. La intervención que represente el seguimiento será lo menos invasiva posible a efecto de no afectar el entorno familiar.  En caso de adopción internacional, el seguimiento post-adoptivo será realizado por la autoridad central competente. |
| **TÍTULO SÉPTIMO**  **DEL ACOGIMIENTO FAMILIAR** | |
| **CAPÍTULO I**  **DE LAS BASES, REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO** | Las personas interesadas en constituirse como familia de acogida, deberán presentar ante la PRONNIF una solicitud para obtener su certificación.  Dicha solicitud contendrá los datos generales de la familia, domicilio, dirección para oír y recibir notificaciones dentro del Estado, teléfono, correo electrónico u otros medios de contacto.  Una vez presentada la solicitud, la PRONNIF convocará a las personas interesadas a una reunión informativa de inducción grupal con otras familias interesadas.  Los requisitos para la expedición de la certificación, en lo conducente, serán los mismos que para la emisión del certificado de idoneidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la presente Ley.  El Consejo podrá solicitar información complementaria cuando se considere necesaria para asegurar y preservar el interés superior de la niñez.  En caso de que la solicitud sea promovida por personas extranjeras residentes en el Estado, a fin de integrar debidamente su solicitud, además de los requisitos señalados, deberán acreditar su residencia permanente en los términos de la Ley de Migración.  Para la integración del expediente, la PRONNIF deberá:   1. Verificar que las personas solicitantes de constituirse como familia de acogida cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 26 de la presente Ley, y exhiban la información adicional que el Consejo considere necesaria; 2. Realizar la investigación correspondiente a fin de cerciorarse que la información proporcionada por las personas solicitantes de constituirse como familia de acogida es fidedigna.   El Sistema DIF y la PRONNIF, como parte del otorgamiento de la certificación para constituirse en familia de acogida, impartirán un curso de capacitación a las personas que serán las responsables de la guarda y custodia de la niña, niño o adolescente que se acogerá, en el cual se les informará los aspectos psicosociales, administrativos y judiciales del cuidado, protección, crianza positiva y promoción del bienestar social de las niñas, niños y adolescentes, así como el desapego que deberán guardar y la concientización de la temporalidad de su acogimiento en dicha familia.  El Consejo definirá los objetivos y contenidos del curso de capacitación. |
| **CAPÍTULO II**  **DE LA EXPEDICIÓN DE LA CERTIFICACIÓN** | Una vez que las personas interesadas cumplan con los requisitos para ser consideradas como familia de acogida, el Consejo a través de la secretaría técnica, expedirá la certificación correspondiente en un plazo no mayor a diez días hábiles contados a partir de la celebración de la sesión del Consejo en la que se apruebe su emisión.  Todas las certificaciones otorgadas se deberán de inscribir en el registro que para tal efecto se instituya por la PRONNIF.  La certificación tendrá una vigencia de dos años contados a partir de su expedición, transcurrido dicho término y en caso de que se desee su renovación, se deberán actualizar los documentos necesarios y las valoraciones psicosociales.  La PRONNIF podrá solicitar al Consejo la cancelación de la certificación otorgada cuando se advierta que la información proporcionada en el informe mensual al que se hace referencia en la fracción V del artículo 74 de la presente Ley es falsa, o cuando las condiciones en las que se proporciona el acogimiento familiar vulneren o coloquen en situación de riesgo los derechos de la niña, niño o adolescente, sin perjuicio de las acciones que se pudieran emprender para la salvaguarda o restitución de los mismos.  En caso de cancelación, la PRONNIF asentará dicha anotación en el registro correspondiente. |
| **CAPÍTULO III**  **DE LA ASIGNACIÓN EN FAMILIA DE ACOGIDA** | La asignación de una familia de acogida a niñas, niños y adolescentes, sólo podrá otorgarse a las familias que cuenten con certificación vigente.  Para la asignación de la niña, niño o adolescente a una familia de acogida, se deberá considerar que entre éstos y quienes serán las personas responsables de su guarda y custodia, exista una diferencia de edad de por lo menos diecisiete años. En casos excepcionales y a juicio de la PRONNIF, el requisito de diferencia de edad, podrá dispensarse en atención al interés superior de la niña, niño o adolescente.  Una vez que la niña, niño o adolescente, se encuentre en posibilidad de ser integrado a una familia de acogida, la PRONNIF seleccionará la más idónea dentro del registro que se lleve para tal efecto.  Las características de la niña, niño o adolescente que requieren el acogimiento y sus necesidades, así como su interés superior y la prevalencia de sus derechos, serán la base para la selección de la familia.  Una vez realizada la designación, la familia de acogida deberá comunicar por escrito su aceptación ante la PRONNIF.  Una vez seleccionada la familia, la PRONNIF solicitará la autorización judicial de conformidad con lo establecido por el artículo 397 de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza.  Autorizada la designación por la autoridad judicial, se entregará a la familia de acogida, el oficio de asignación y el informe que contenga los datos generales de la niña, niño o adolescente, su ficha médica, la fecha a partir de la cual se asigna, así como la vigencia de la asignación y la demás información necesaria.  La familia de acogida tendrá las siguientes obligaciones respecto a las niñas, niños o adolescentes:   1. Brindar irrestricto respeto a sus derechos humanos; 2. Proveer de una alimentación sana; 3. Cuidar de su salud en todo momento; 4. Brindar el acceso a la educación, así como a las actividades recreativas que sean posibles para su desarrollo físico y emocional; 5. Rendir un informe mensual a la PRONNIF, además de informar sobre cualquier incidencia que se presente; 6. Guardar confidencialidad; 7. Permitir al personal autorizado de la PRONNIF el acceso a todas las áreas del domicilio, con la finalidad de realizar visitas de supervisión, así como presentar ante la misma las constancias escolares, médicas y demás documentación que se considere necesaria; 8. Abstenerse de trasladar a las niñas, niños o adolescentes fuera de la ciudad, sin autorización por escrito de la PRONNIF; 9. Reincorporar a las niñas, niños o adolescentes al término del acogimiento o ante el requerimiento de la PRONNIF; 10. Dar seguimiento a las canalizaciones que con motivo del plan de restitución de derechos de la niña, niño o adolescente emita la PRONNIF; 11. Las demás que se consideren necesarias para el sano desarrollo y bienestar de las niñas, niños o adolescentes. |
| **CAPÍTULO IV**  **DE LA TERMINACIÓN DEL ACOGIMIENTO** | La PRONNIF podrá dar por terminada la asignación, en los siguientes supuestos:   1. En caso de que se resuelva la situación jurídica de la niña, niño o adolescente; 2. Si de los seguimientos que se realicen se advierte que no se cumplieron las condiciones de adaptación; 3. En caso de presentarse algún tipo de violación a los derechos humanos de la niña, niño o adolescente; 4. En caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones establecidas en el artículo anterior; 5. Los demás que sean necesarias para la protección del interés superior de las niñas, niños y adolescentes. |
| **CAPÍTULO V**  **DEL REGISTRO DE LAS FAMILIAS DE ACOGIDA** | El registro de las familias de acogida a cargo de la PRONNIF, deberá contener, por lo menos, la información siguiente:   1. Datos generales de las personas solicitantes de constituirse como familia de acogida; 2. Domicilio de la familia; 3. Número de dependientes económicos en la familia; 4. Los ingresos y egresos mensuales de la familia; 5. La certificación emitida por el Consejo; 6. El perfil y número de niñas, niños o adolescentes que, en su caso, podrían acoger. |
| **TÍTULO OCTAVO**  **DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN** | |
| **CAPÍTULO ÚNICO**  **DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN** | Procede el recurso de reconsideración en contra del acuerdo donde se describan las razones por las que la certificación o el certificado de idoneidad no fue expedido.  El recurso de reconsideración se tramitará únicamente por las personas interesadas ante la PRONNIF, quien deberá resolverlo conforme a derecho.  El plazo para interponer el recurso de reconsideración será de tres días hábiles contados a partir de la emisión del acuerdo donde se describan las razones por las que la certificación o el certificado de idoneidad no fue expedido.  Los requisitos del recurso de reconsideración son los siguientes:   1. Se deberá interponer por escrito precisando el nombre y domicilio de las personas solicitantes de adopción o de constituirse como familia de acogida; 2. Señalar a la autoridad que emitió el acuerdo donde se describan las razones por las que la certificación o el certificado de idoneidad no fue expedido; 3. Expresar los agravios que cause el acuerdo señalado en la fracción anterior; 4. Ofrecer las pruebas que estimen pertinentes; 5. Firmar en forma autógrafa o estampar huella digital de las personas que lo promuevan.   Dentro del término de tres días hábiles, contados a partir de la admisión del recurso, se desahogarán las pruebas que hayan estimado pertinentes las personas solicitantes de adopción o de constituirse como familia de acogida con relación a los agravios expuestos.  Una vez desahogadas las pruebas ofrecidas, la PRONNIF emitirá la resolución que corresponda en un plazo de cinco días hábiles y se procederá a su debida notificación.  Las resoluciones que se emitan con motivo del recurso de reconsideración serán definitivas y en su contra no procederá recurso alguno. |
| **TÍTULO NOVENO**  **DEL ARCHIVO, BASE DATOS Y SISTEMA DE INFORMACIÓN** | |
| **CAPÍTULO ÚNICO**  **DISPOSICIONES GENERALES** | La PRONNIF contará con un sistema de información que permita registrar a las niñas, niños y adolescentes susceptibles de adopción, así como el listado de las personas solicitantes de adopción, las adopciones concluidas y sus seguimientos.  Para garantizar el derecho a la identidad de niñas, niños y adolescentes, se creará un archivo documental y digital de los expedientes que se hayan originado en el proceso de adopción y de acogimiento familiar, el cual estará a cargo de la PRONNIF, quien observará los principios de confidencialidad y reserva, debiendo proporcionar la información a la persona adoptada, cuando este desee conocer sus antecedentes familiares y sea mayor de edad.  Las niñas, niños y adolescentes que deseen conocer sus antecedentes familiares deberán contar con el consentimiento de las personas adoptantes, y podrán hacerlo siempre que ello atienda al interés superior de la niñez.  El archivo y base de datos a que se refiere el artículo anterior deberá conservarse por el periodo acordado por el Comité Técnico Documental de la PRONNIF atendiendo a lo establecido en la Ley General de Archivos. |

|  |  |
| --- | --- |
| **LEY DEL SISTEMA ESTATAL PARA LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE NIÑOS Y NIÑAS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA** | |
| **LEY VIGENTE** | **PROPUESTA DE REFORMA** |
| **Artículo 105.-** En el proceso administrativo de adopción, la Procuraduría deberá integrar el expediente conforme a lo establecido en el Reglamento del Proceso Administrativo de Adopciones del Estado de Coahuila de Zaragoza. | **Artículo 105.-** En el proceso administrativo de adopción, la Procuraduría deberá integrar el expediente conforme a lo establecido en la Ley de Adopciones y Acogimiento Familiar para el Estado de Coahuila de Zaragoza. |
| **Artículo 106.-** Una vez integrado el expediente, las Subprocuradurías Regionales lo remitirán al área de adopciones de la Procuraduría de las Niñas, Niños y la Familia, quien validará y enviará a la Unidad de Evaluación y Seguimiento para la Protección de Derechos del DIF, a fin de registrar su solicitud de adopción. | **Artículo 106.-** Una vez integrado el expediente, las Subprocuradurías Regionales lo remitirán al área de adopciones de la Procuraduría de las Niñas, Niños y la Familia, quien validará y registrará su solicitud de adopción. |
| **Artículo 107.-** La Procuraduría iniciará de manera inmediata el juicio de adopción de conformidad a lo previsto en la legislación civil aplicable una vez que se hayan agotado y satisfecho los requisitos legales que se desprenden de la Ley de Asistencia social y Protección de Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza, el Reglamento del Proceso Administrativo de Adopciones del Estado de Coahuila de Zaragoza y demás ordenamientos aplicables. | **Artículo 107.-** La Procuraduría iniciará el procedimiento judicial de adopción de conformidad a lo previsto en la legislación familiar aplicable, una vez que se hayan agotado y satisfecho los requisitos legales que se desprenden de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza, la Ley de Asistencia Social y Protección de Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley de Adopciones y Acogimiento Familiar para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás ordenamientos legales aplicables. |

En principio, nos enfocaremos al análisis de lo concerniente a la creación de la Ley de Adopciones y Acogimiento Familiar para el Estado de Coahuila de Zaragoza, la cual se compone por nueve títulos que se comprenden por 85 artículos, misma que tiene como finalidad promover un ejercicio de armonización legislativa con las disposiciones federales, asimismo, iniciar acciones tendientes a reformular de manera integral, los procesos organizacionales y administrativos, para hacer de la adopción un proceso cada vez más ágil, transparente y efectivo.

Para los integrantes de estas dictaminadoras, el pertenecer a una familia, es un derecho humano, al ser el primer contacto que tiene el ser humano con una organización social, y que constituye un pilar fundamental para la construcción de la vida y el desarrollo integral de los seres humanos, es así que la familia se caracteriza por brindar protección a las niñas y niños y por satisfacer las necesidades básicas, tanto biológicas, como psicológicas y anímicas.

Es en ese sentido, que diversos instrumentos internacionales, como la Convención Americana de Derechos Humanos, reconoce el derecho a la protección de la familia, el cual se contempla en su artículo 17, mismo que recalca la importancia de crecer y desarrollarse dentro de un vínculo familiar, mismo que a la letra dice:

***Artículo 17. Protección a la Familia***

*La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado.*

*…*

En el mismo orden de ideas, **en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, se reconoce el interés superior de la niñez, como un medio garantista de protección de los derechos humanos y a su vez reconoce a los miembros familiares como sujetos obligados a proteger estos derechos y principios, de conformidad a la redacción literal del texto vigente:

***Artículo 4.****La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.*

*En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.*

*Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.*

A pesar de ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, señala que existen cifras de menores que no cuentan con una familia, estando a cargo de instituciones, lo cual no les permite una plena atención así como una protección adecuada. De la misma forma, la Comisión Nacional reporta que *“existen 412 456 niñas y niños privados de cuidado parental, de los cuales 29 310 se encuentran en las 703 instituciones enfocadas a la atención y cuidado de personas menores de edad. Del resto no se tiene registro, por lo que el número podría ser mucho mayor.”*

Por lo cual consideramos que aun y cuando en México actualmente se ha venido trabajando en la protección de los derechos de los infantes, en la realidad muchas niñas, niños y adolescentes no cuentan con la protección, cuidado y amor de una familia, y se encuentran privados de seguridad, fortalecimiento de las relaciones e interacción en sociedad, de la creación de vínculos, del sentido de pertenencia y del desarrollo de afecto que origina la convivencia familiar, por lo cual vemos con beneplácito que se tomen acciones tendientes a garantizar este derecho.

En este orden de ideas, para los integrantes de estas comisiones unidas es fundamental que, a fin de garantizar la plena efectividad del derecho a la protección de la familia, en nuestro estado se implementen acciones para salvaguardar este derecho, a través de instrumentos jurídicos en materia familiar, con el objetivo de proteger el principio del interés superior de la niñez.

Por lo cual consideramos que la iniciativa objeto del presente dictamen, viene a implementar mecanismos que permitan garantizar el pleno goce de sus derechos a las niñas, niños y adolescentes que son separados de su núcleo familiar de origen, y que si bien, su situación los vuelve más vulnerable, esta ley en materia de adopciones permitirá regular el procedimiento, que permita mejorar el proceso y garantizar la protección de la infancia coahuilense, desde la tramitación hasta la conclusión del mismo.

Como bien se señala en la exposición de motivos, el marco jurídico de la adopción en nuestro Estado ha sido objeto de un constante proceso de perfeccionamiento en los últimos años, y el actualmente el Reglamento del Proceso Administrativo de Adopciones del Estado de Coahuila de Zaragoza, data del día 27 de septiembre de 2013, por lo que coincidimos en la necesidad de adecuar el marco jurídico con esta nueva ley, que entre sus novedades podemos encontrar la disminución o supresión de requisitos y exigencias innecesarias, que no contribuyen a determinar la idoneidad para convertirse en familia adoptiva, asimismo se elimina cualquier vestigio discriminatorio por razón de sexo, preferencias o condición de salud, como la exigencia de pruebas de VIH/SIDA o certificado médico de infertilidad, se precisan plazos y términos respecto a la elaboración de los estudios a las personas solicitantes, para la expedición del certificado de idoneidad y el inicio del procedimiento judicial de adopción, así como para la revocación del consentimiento otorgado ante la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia con propósito de adopción. Asimismo, se amplía el objeto y las atribuciones del actual Consejo Técnico de Adopciones, adicionando a las vigentes de conocer de las solicitudes de adopción y emitir opinión respecto de éstas, las relativas a la certificación y capacitación de las personas solicitantes de constituirse como familia de acogida, por lo que dicha modificación conlleva en congruencia un cambio en su integración y denominación a Consejo Técnico de Evaluación.

Otro aspecto importante de la iniciativa es que incorpora como integrantes del Consejo Técnico de Evaluación, a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como de dos personas representantes de la sociedad civil.

Además, se señala que la revisión del proceso administrativo de adopción y las propuestas para su agilización y optimización no se deben entender como la búsqueda de asignación indiscriminada e irresponsable de niñas, niños y adolescentes a cualquier núcleo familiar, sino que la revisión se debe entender y realizar en un marco de corresponsabilidad absoluta de la sociedad y el Estado con la finalidad de proporcionar una familia a quienes carecen de ella, pudiendo observar que el proyecto de decreto ha sido elaborado con un enfoque basado en derechos humanos que priorice el principio pro-niño, regulando de forma precisa la figura de la Familia de Acogida, establecida ya en la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Por último, a fin de que se asegure la operatividad de esta nueva ley, coincidimos en la necesidad de adecuar la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila de Zaragoza, en sus artículos 105, 106 y 107, en lo concerniente ala participación de la Procuraduría en los procesos de adopción.

En virtud de lo antes expuesto, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente proyecto de:

**D E C R E T O**

**ARTÍCULO PRIMERO.-** Se expide la Ley de Adopciones y Acogimiento Familiar para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**LEY DE ADOPCIONES Y ACOGIMIENTO FAMILIAR PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA**

**TÍTULO PRIMERO**

**DISPOSICIONES PRELIMINARES**

**CAPÍTULO ÚNICO**

**DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN Y OBJETO**

**Artículo 1.** Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés social y de observancia general dentro del territorio del Estado de Coahuila de Zaragoza y su aplicación corresponderá al Poder Ejecutivo, a través de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección de Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza.

**Artículo 2.** La presente Ley tiene como objeto garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes en materia de adopción y acogimiento familiar, conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte, así como en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza, el Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Coahuila de Zaragoza, y demás ordenamientos legales aplicables.

**Artículo 3.** Podrá ser adoptante o familia de acogida toda persona que reúna los requisitos establecidos en la presente Ley, sin discriminación alguna, de conformidad a lo previsto con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza.

**Artículo 4.** Queda prohibido realizar cualquier cobro por concepto de tramitación de adopciones, acogimiento pre-adoptivo y familias de acogida en los casos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en acogimiento residencial en centros de asistencia social.

**Artículo. 5.** Para los efectos de la presente Ley, se entiende por:

1. Acogimiento residencial: Aquél brindado por centros de asistencia social como una medida especial de protección;
2. Acogimiento pre-adoptivo: Fase dentro del procedimiento administrativo de adopción, bajo la supervisión de la PRONNIF, en la que una familia, distinta a la de origen y de la extensa, acoge provisionalmente a niñas, niños y adolescentes con fines de adopción y asume todas las obligaciones en cuanto a su cuidado y protección, de conformidad con el principio del interés superior de la niñez;
3. Adolescente: Persona entre los doce y dieciocho años de edad;
4. Adopción: Constituye, de una manera irrevocable, una relación de filiación entre adoptante y adoptado o adoptada, al mismo tiempo que establece un parentesco equiparable al consanguíneo entre el adoptado o adoptada y la familia de la o el adoptante y entre ésta y éste y los descendientes del adoptado o adoptada;
5. Adopción internacional: Aquella que se promueva por personas de otro país, con residencia habitual fuera del territorio nacional, misma que tiene como objeto incorporar en una familia a una niña, niño o adolescente de nacionalidad mexicana, que no puede encontrar una familia en su propio país de origen. Este tipo de adopción se regirá por los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Civil Federal;
6. Adopción por extranjeros: Aquella promovida por ciudadanos de otro país, con domicilio permanente en el territorio nacional, respecto de niñas, niños o adolescentes con residencia en el Estado. Esta adopción se regirá por lo dispuesto en la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza;
7. Autoridad central: Autoridades designadas por los países ratificantes de la Convención sobre la Protección de Menores y la Cooperación en Materia de Adopción Internacional, para intervenir con dicho carácter en los procedimientos de adopción internacional, según lo dispuesto por el artículo 6 de la citada Convención;
8. Centro de asistencia social: Instituciones públicas o privadas que brindan acogimiento residencial para niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental o familiar;
9. Certificado de idoneidad: Documento expedido por las Procuradurías de Protección o por la autoridad central del país de origen de las personas adoptantes en los casos de adopciones internacionales, en virtud del cual se determina la idoneidad de las personas solicitantes de adopción;
10. Certificación: Documento expedido por el Consejo Técnico de Evaluación, mediante el cual se hace constar que las personas solicitantes de constituirse como familia de acogida son aptas para brindar cuidado, protección, crianza positiva y la promoción del bienestar social de niñas, niños y adolescentes;
11. Consejo: Consejo Técnico de Evaluación;
12. Convivencias internas: Aquellas que se llevan a cabo en las instalaciones del centro de asistencia social en el que se encuentra recibiendo acogimiento residencial la niña, niño o adolescente susceptible de adopción;
13. Convivencias externas: Aquellas que se llevan a cabo fuera de las instalaciones del centro de asistencia social en el que se encuentra recibiendo acogimiento residencial la niña, niño o adolescente susceptible de adopción, con o sin pernocta;
14. Convivencias pre-adoptivas: Etapa del procedimiento administrativo de adopción en la que las niñas, niños o adolescentes interactúan con las personas solicitantes de adopción para establecer el vínculo afectivo y evaluar su adaptabilidad;
15. Estado: Estado de Coahuila de Zaragoza;
16. Familia de acogida: Aquélla que cuente con la certificación de la autoridad competente y que brinde cuidado, protección, crianza positiva y la promoción del bienestar social de niñas, niños y adolescentes por un tiempo limitado hasta que se pueda asegurar una opción permanente con la familia de origen, extensa o adoptiva;
17. Familia extensa: Aquélla compuesta por las personas ascendientes de niñas, niños y adolescentes en línea recta sin limitación de grado, y los colaterales hasta el cuarto grado;
18. Familia de origen: Aquélla compuesta por las personas titulares de la patria potestad, tutela, guarda o custodia, respecto de quienes las niñas, niños y adolescentes tienen parentesco ascendente hasta segundo grado, de conformidad con Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza;
19. Ley: Ley de Adopciones y Acogimiento Familiar para el Estado de Coahuila de Zaragoza;
20. Niña o niño: Persona menor de doce años de edad;
21. Niña, niño o adolescente de atención prioritaria: Aquel que viva con una discapacidad o sea mayor de doce años de edad;
22. Niña, niño o adolescente susceptible de adopción: Aquel que jurídica y psicológicamente es apto de integrarse a una familia, y del cual se puede constatar mediante evaluación, que tiene aptitud para insertarse con beneficio propio en un entorno familiar de substitución y que ha roto definitivamente con los lazos de filiación respecto a sus padres de origen, conforme a la legislación vigente;
23. Niña, niño o adolescente institucionalizado: Aquel que recibe como medida de protección judicial o administrativa, el internamiento en un centro de asistencia social público o privado, debido a la carencia de cuidado parental o familiar;
24. Opinión: Documento suscrito por los titulares de la presidencia y la secretaría técnica del Consejo Técnico de Evaluación mediante el cual se hace del conocimiento de la autoridad judicial, el resultado del análisis de las solicitudes de adopción por las personas integrantes del Consejo;
25. Personas adoptantes: Aquellas que, por voluntad propia, reciben como hija o hijo a una niña, niño o adolescente y éstas asumen respecto de la persona adoptada los derechos y obligaciones inherentes a una madre o padre;
26. Procuradurías de Protección: Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes de cada entidad federativa;
27. PRONNIF: Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia;
28. Seguimiento post-adoptivo: Valoración técnica realizada por las Procuradurías de Protección, que verifica la integración de niñas, niños o adolescentes con las personas que los hayan adoptado;
29. Sistema DIF: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección de Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza.

**TÍTULO SEGUNDO**

**DE LOS PRINCIPIOS Y DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SUSCEPTIBLES DE ADOPCIÓN**

**CAPÍTULO I**

**DE LOS PRINCIPIOS RECTORES**

**Artículo 6.** Son principios rectores en el cumplimiento, interpretación y aplicación de esta Ley, los contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, los tratados internacionales en materia de adopción y protección a la infancia, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila de Zaragoza, que atiendan a la protección del interés superior de las niñas, niños y adolescentes.

**CAPÍTULO II**

**DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

**SUSCEPTIBLES DE ADOPCIÓN**

**Artículo 7.** En el ejercicio de sus facultades y obligaciones, todas las autoridades involucradas en el proceso integral de adopción, deberán:

1. Garantizar la plena observancia de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, de conformidad con el principio del interés superior de la niñez;
2. Asegurar que todas las niñas, niños y adolescentes sean escuchados de acuerdo con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez;
3. Garantizar que quienes consientan la adopción, así como quienes la soliciten, reciban una asesoría integral que les permita conocer los alcances jurídicos, psicoafectivos, familiares y sociales de la misma;
4. Implementar las acciones necesarias para garantizar que la adopción no sea motivada por la obtención de beneficios económicos para quienes participen en ella;
5. Garantizar que las niñas, niños y adolescentes gocen de los derechos y garantías de seguridad jurídica y debido proceso establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones aplicables.

**CAPÍTULO III**

**DE LAS PROHIBICIONES EN LA ADOPCIÓN**

**Artículo 8.** Para los efectos de la presente Ley, se prohíbe:

1. La promesa de adopción durante el proceso de gestación;
2. Que las personas solicitantes de adopción tramiten simultáneamente dos o más procedimientos de adopción;
3. La adopción privada, en los términos establecidos por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza;
4. Que la adopción se realice para fines de venta, sustracción, retención u ocultación ilícita, tráfico, trata de personas, explotación, trabajo infantil o cualquier ilícito;
5. El contacto de la madre, padre o ambos padres, que entregaron en adopción a una niña, niño o adolescente, con las personas solicitantes de adopción, la persona que se pretende adoptar o con cualquier persona involucrada en la adopción, con excepción de los casos en que los adoptantes sean familiares biológicos, de la familia extensa o cuando la persona adoptada desee conocer sus antecedentes familiares y sea mayor de edad;
6. La obtención directa o indirecta de beneficios materiales o de cualquier índole, por la familia de origen o extensa de la persona que se pretende adoptar, o por cualquier persona, así como por funcionarios o trabajadores de instituciones públicas o privadas y autoridades involucradas en el proceso de adopción;
7. Que las personas titulares o las que presten sus servicios en los centros de asistencia social, permitan visitas o cualquier tipo de relación que pudieran generar vínculos afectivos o de apego entre las niñas, niños o adolescentes susceptibles de adopción y las personas que pretendan adoptar, sin autorización del Consejo;
8. Que la PRONNIF de inicio al procedimiento judicial, sin la previa expedición del certificado de idoneidad o la asignación del Consejo;
9. Toda adopción contraria a las disposiciones constitucionales, los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano o al interés superior de la niñez y su adecuado desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.

**CAPÍTULO IV**

**DEL CONSENTIMIENTO OTORGADO** **ANTE**

**LA PRONNIF CON PROPÓSITO DE ADOPCIÓN**

**Artículo 9.** En los casos en que una madre, padre o ambos padres de una niña, niño o adolescente, no pudieran o no estuvieran en las condiciones necesarias para la crianza de éste, podrán hacer la entrega voluntaria del mismo a la PRONNIF con el propósito de que sea dado en adopción, siempre y cuando concurran los siguientes supuestos:

1. Haya sido registrado y se presentare en ese acto el acta de nacimiento;
2. Se exhiba identificación oficial de quien se ostenta como madre, padre, o ambos, o por quien ejerce la tutela o patria potestad;
3. Se corrobore que han sido convenientemente asesoradas y debidamente informadas por la PRONNIF, de las consecuencias legales que la adopción implica, del consentimiento otorgado y en particular de la ruptura de los vínculos jurídicos entre la niña, niño o adolescente y su familia de origen;
4. Que el consentimiento haya sido otorgado libremente, sin que medie pago o compensación alguna;
5. Que el consentimiento de la madre, padre o ambos, sea otorgado cuando menos diez días después del parto.

**Artículo 10.** Las personas titulares de la Dirección de Adopciones y de las Subprocuradurías Regionales de la PRONNIF estarán investidas de fe pública con el objeto de recabar el consentimiento para la adopción, y deberán levantar un acta circunstanciada ante la presencia de dos testigos mayores de edad plenamente identificados, en la cual conste la entrega de la niña, niño o adolescente y el propósito con el que se hizo la misma, así como la manifestación expresa de la situación familiar y los motivos que originan tal entrega, anexando al acta la documentación a que se refiere el artículo anterior.

**Artículo 11.** No procederá la asignación de la niña, niño o adolescente a una familia adoptiva hasta transcurrido un término de treinta días naturales, contados a partir del otorgamiento del consentimiento, en el cual la madre o el padre biológico, o cualquiera de ellos en el caso de que haya sido otorgado conjuntamente, podrán solicitar la revocación del consentimiento otorgado ante la PRONNIF, la cual, en caso de ser procedente, levantará un acta circunstanciada asentando tal reintegración al núcleo de su familia de origen o extensa, siempre que ello no represente un riesgo al interés superior de la niñez.

**Artículo 12.** Una vez transcurrido el término señalado en el artículo anterior, sin que se revoque el consentimiento otorgado, y previa la satisfacción de los requisitos señalados en la presente Ley, se podrá asignar a la niña, niño o adolescente en acogimiento pre-adoptivo.

**TÍTULO TERCERO**

**DEL** **CONSEJO TÉCNICO DE EVALUACIÓN**

**CAPÍTULO I**

**DISPOSICIONES GENERALES**

**Artículo 13.** El Consejo es un órgano colegiado interdisciplinario, técnico y de opinión, que tiene como objeto conocer, analizar, valorar y dictaminar las solicitudes de adopción y acogimiento familiar en relación a las niñas, niños y adolescentes que se encuentren bajo acogimiento residencial en un centro de asistencia social como una medida especial de protección, así como de emitir opinión respecto de las adopciones promovidas ante el Poder Judicial del Estado de las niñas, niños y adolescentes no institucionalizados.

**Artículo 14.** El Consejo estará encargado de garantizar los derechos de las niñas, niños o adolescentes susceptibles de adopción, así como de procurar su debida asignación e integración a personas solicitantes de adopción que resulten idóneas, para que les proporcionen las condiciones necesarias para brindarles una crianza positiva, un sano desarrollo y el máximo bienestar posible.

**Artículo 15.** El Consejo estará integrado por:

1. Una presidencia, a cargo de la persona titular de la Dirección del Sistema DIF;
2. Una secretaría técnica, a cargo de la persona titular de la PRONNIF;
3. Una secretaría auxiliar, a cargo de la persona titular de la Dirección de Adopciones;
4. Una persona representante del Tribunal Superior de Justicia del Estado;
5. Una persona representante del Sistema DIF, que por las funciones que desarrollen, así como por sus conocimientos especializados en psicología, trabajo social, derecho, docencia o medicina, sean designados por la persona titular de la presidencia;
6. Una persona representante del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de donde sean originarios o atendidos las niñas, niños o adolescentes susceptibles de adopción;
7. La persona titular del centro de asistencia social donde se encuentren acogidas las niñas, niños o adolescentes susceptibles de adopción respecto de quien se propondrá asignación de familia;
8. Dos personas representantes de las asociaciones civiles constituidas por adoptantes o adoptados, o ambos, cuyo objeto social sea promover la institución de adopción o del acogimiento familiar, así como asesorar, orientar y brindar apoyo a sus integrantes, designados conforme a la convocatoria que el Consejo Técnico de Evaluación emita para tal efecto.

Todas las personas integrantes del Consejo tendrán derecho a voz y voto, y podrán nombrar en sus ausencias, a sus respectivos suplentes, quienes contarán con voz y voto, y deberán ser servidores públicos del nivel jerárquico inmediato inferior al de la persona titular que suplan, cuya designación se hará a través de un escrito dirigido a la secretaría técnica.

Los acuerdos y resoluciones del Consejo se tomarán por mayoría de votos de sus integrantes presentes en la sesión, en caso de empate, la presidencia tendrá voto de calidad.

Los cargos del Consejo serán honorarios, por lo que sus integrantes no percibirán remuneración alguna, y se regirán con base a los principios de legalidad, debido proceso, honradez, confidencialidad, celeridad procesal e interés superior de la niñez.

Serán invitadas permanentes a las sesiones del Consejo, con derecho a voz, pero sin voto, la persona titular de la Presidencia Honoraria del Sistema DIF, el Diputado o Diputada Coordinador o Coordinadora de la Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos, así como una persona representante de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza y de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

La persona titular de la presidencia podrá convocar con voz, pero sin voto, a personas expertas en materia de adopción o acogimiento familiar, académicas o integrantes de la sociedad que se consideren necesarias, para que expresen criterios que orienten la toma de decisiones del Consejo.

**Artículo 16.** El Consejo tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

1. Fomentar la cultura de la adopción y el acogimiento familiar de las niñas, niños y adolescentes, en especial los de atención prioritaria;
2. Proponer políticas, acciones y lineamientos en materia de adopción y acogimiento familiar;
3. Realizar las sesiones necesarias para el cumplimiento de su objeto;
4. Verificar que las solicitudes de adopción y certificación estén debidamente requisitadas en los términos de las disposiciones aplicables;
5. Analizar los estudios de psicología, trabajo social y evaluación médica practicados a las personas solicitantes de adopción y de constituirse como familia de acogida;
6. Determinar, con base en las evaluaciones respectivas, las características de las personas solicitantes de adopción y de constituirse como familia de acogida;
7. Analizar los expedientes de solicitud de adopción o de certificación de familia de acogida propuestos por la secretaría técnica del Consejo, atendiendo en todo momento al interés superior de la niña, niño o adolescente;
8. Aplicar los criterios para asignación de una familia adoptiva a una niña, niño o adolescente;
9. Verificar la adaptación de la niña, niño o adolescente con la familia asignada y en su caso levantar el acta respectiva, previamente al procedimiento judicial de adopción;
10. Emitir opinión respecto de las adopciones promovidas ante el Poder Judicial del Estado de las niñas, niños y adolescentes no institucionalizados;
11. Solicitar la revaloración de las personas solicitantes de adopción y de constituirse como familia de acogida;
12. Determinar la baja de las solicitudes de adopción;
13. Conocer y analizar los resultados de las convivencias autorizadas;
14. Guardar estricta confidencialidad sobre todos los asuntos de su competencia;
15. Las demás que establezca la presente Ley y otras disposiciones aplicables.

**CAPÍTULO II**

**DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS**

**Artículo 17.** La persona titular de la presidencia tendrá las funciones siguientes:

1. Representar legalmente al Consejo, en el ámbito de su competencia, ante todo tipo de autoridades, organismos, e instituciones;
2. Presidir y dirigir las sesiones del Consejo, así como declarar resueltos los asuntos en el sentido de las votaciones;
3. Convocar a las personas integrantes del Consejo, por conducto de la secretaría técnica, a las sesiones;
4. Proponer los mecanismos que permitan el mejor funcionamiento del Consejo;
5. Suscribir las actas en que se hagan constar los acuerdos y resoluciones de las sesiones del Consejo;
6. Representar legalmente al Consejo, en el ámbito de su competencia, ante todo tipo de autoridades, organismos, e instituciones;
7. Las demás que le confieran otros ordenamientos legales aplicables.

**Artículo 18.** La persona titular de la secretaría técnica tendrá las funciones siguientes:

1. Presentar propuestas de asignación de niñas, niños y adolescentes susceptibles de adopción;
2. Emitir las convocatorias para las sesiones del Consejo, previo acuerdo de la persona titular de la presidencia;
3. Iniciar la sesión del Consejo y dar lectura al orden del día, previa autorización de la persona titular de la presidencia;
4. Conducir el desarrollo de las sesiones del Consejo;
5. Elaborar y suscribir el acta de las sesiones del Consejo, haciendo constar los acuerdos que en ellas se tomen;
6. Dar seguimiento a los acuerdos emitidos e informar de éstos periódicamente a la persona titular de la presidencia;
7. Mantener, a través de la secretaría auxiliar, en orden y actualizados:
   1. Los archivos de las actas de las sesiones del Consejo;
   2. Los archivos de los expedientes de adopción;
   3. El Libro de Gobierno donde se asienta el nombre de las personas solicitantes de adopción que ingresan a la lista de espera;
   4. Los archivos de los expedientes que integran la lista de espera;
   5. Los documentos relativos a los juicios de adopción;
8. Proporcionar a las personas integrantes del Consejo la información que requieran;
9. Realizar el seguimiento al periodo de adaptación de la niña, niño o adolescente asignado en convivencia a las personas solicitantes de adopción y emitir el informe correspondiente;
10. Emitir el certificado de idoneidad y la certificación;
11. Las demás que le confieran otros ordenamientos legales aplicables.

**Artículo 19.** Las personas que funjan como vocales del Consejo tendrán las funciones siguientes:

1. Asistir y participar con voz y voto a las sesiones del Consejo;
2. Dar seguimiento al orden del día, y emitir las opiniones correspondientes sobre los asuntos que se pongan a su consideración;
3. Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos;
4. Suscribir las actas de las sesiones del Consejo;
5. Realizar las actividades que les encomiende la persona titular de la presidencia;
6. Las demás que le confieran otros ordenamientos legales aplicables.

**Artículo 20.** El Consejo sesionará bimestralmente de manera ordinaria, y de forma extraordinaria cuando sea necesario, en atención a la importancia y urgencia de los asuntos que deban tratar, a convocatoria de la persona titular de su presidencia, o en su caso, de la secretaría técnica.

**Artículo 21.** Las personas integrantes del Consejo estarán impedidas y tendrán el deber de excusarse para conocer los siguientes casos:

1. Aquellos en los que tengan un interés personal y directo en el asunto de que se trate;
2. Tengan parentesco consanguíneo o por afinidad con alguna de las personas solicitantes de adopción o de constituirse como familia de acogida, en línea recta sin limitación de grado, y en línea transversal dentro del cuarto grado por consanguinidad y del segundo grado por afinidad;
3. Tengan amistad estrecha o animadversión con alguna de las personas solicitantes de adopción o de constituirse como familia de acogida;
4. Haber sido representante legal, apoderado o asesor de cualquiera de las personas solicitantes de adopción o de constituirse como familia de acogida;
5. Cuando tenga interés su cónyuge, concubina o concubino, compañera o compañero civil, o alguno de sus parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de grado, y en línea transversal dentro del cuarto grado por consanguinidad y del segundo grado por afinidad;
6. Cualquier situación análoga que pueda afectar su imparcialidad a juicio del Consejo.

**Artículo 22.** Cuando una persona integrante del Consejo se encuentre en cualquiera de los supuestos que señala el artículo anterior, deberá excusarse por escrito.

**Artículo 23.** La PRONNIF impartirá el curso de capacitación para madres y padres adoptivos a las personas solicitantes de adopción, en el cual se les informarán los aspectos psicosociales, administrativos y judiciales de la misma.

Una vez concluido el curso, se les hará entrega de la constancia de participación a quienes hayan acreditado el mismo, momento a partir del cual las personas solicitantes de adopción contarán con sesenta días naturales para la integración del expediente administrativo de adopción.

**TÍTULO CUARTO**

**DEL PROCESO DE ADOPCIÓN**

**CAPÍTULO I**

**DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

**SUSCEPTIBLES DE ADOPCIÓN**

**Artículo 24.** Para que las niñas, niños o adolescentes sean susceptibles de adopción, deberá estar resuelta su situación jurídica, a través de:

1. Sentencia ejecutoriada de juicio especial de pérdida de patria potestad;
2. Consentimiento expreso otorgado por la madre, padre o ambos padres, de conformidad con la legislación aplicable;
3. Tratándose de niñas, niños y adolescentes expósitos, abandonados o en acogimiento residencial en un centro de asistencia social, y de los cuales nadie ejerza la patria potestad, cuando haya transcurrido el término establecido en el artículo 69 de la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila de Zaragoza.

**CAPÍTULO II**

**DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN**

**Artículo 25.** Las personas que deseen adoptar, además de cumplir con los requisitos de adopción establecidos en la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza, deberán iniciar el procedimiento administrativo ante la PRONNIF. Dicho procedimiento se regirá conforme a lo previsto en la presente Ley y comprenderá las siguientes fases:

1. Presentación de la solicitud;
2. Entrevista inicial;
3. Práctica de estudios por el área de trabajo social y psicología;
4. Acreditación del curso de capacitación para madres y padres adoptivos;
5. Integración y valoración del expediente;
6. Emisión del certificado de idoneidad o del acuerdo donde se describan las razones por las que el mismo no fue expedido;
7. Asignación de niñas, niños y adolescentes susceptibles de adopción;
8. Convivencias pre-adoptivas;
9. Informe del periodo de adaptación;
10. Acogimiento pre-adoptivo, en caso de haber obtenido un certificado de idoneidad y siempre que se corrobore que el perfil de las personas solicitantes de adopción coincide con el de una niña, niño o adolescente susceptible de adopción, con base al informe del periodo de adaptación posterior a las convivencias pre-adoptivas;
11. Inicio del procedimiento judicial de adopción.

**Artículo 26.** Las personas solicitantes de adopción de niñas, niños y adolescentes, deberán exhibir en original o copia certificada, los siguientes documentos:

1. Solicitud de adopción debidamente requisitada;
2. Carta individual de exposición de motivos;
3. Acta de nacimiento de las personas solicitantes de adopción;
4. Acta de matrimonio o constancia de concubinato, en su caso;
5. En el caso de que las personas solicitantes de adopción tengan hijas o hijos, deberán presentar también actas de nacimiento de los mismos;
6. Copia de la Clave Única de Registro de Población e identificación oficial con fotografía;
7. Dos fotografías tamaño credencial de las personas solicitantes de adopción;
8. Fotografías en tamaño postal y a color de las personas solicitantes de adopción en su entorno familiar, así como de su domicilio;
9. Comprobantes de ingresos;
10. Constancia de trabajo, misma que deberá hacer referencia al puesto que ocupa la persona solicitante de adopción, las actividades que desarrolla en el mismo, su antigüedad y su sueldo;

En caso de que las personas solicitantes de adopción estén imposibilitadas de exhibir constancia de trabajo, deberán presentar una constancia contable, o bien, un documento privado u oficial del que se desprenda su actividad laboral, y el ingreso que perciben, así como el tiempo que lleva realizando dicha actividad;

1. Comprobante de domicilio de las personas solicitantes de adopción;
2. Certificado médico expedido por institución oficial respecto de las personas solicitantes de adopción conforme a lo establecido en el artículo 37 de la presente Ley;
3. Examen toxicológico de las siguientes sustancias: anfetaminas, barbitúricos, benzodiacepinas, cannabinoides, cocaína y opiáceos;
4. Carta de no antecedentes penales de las personas solicitantes de adopción, respecto de delitos de índole sexual o cualquier otro cometido dolosamente o negligentemente en contra de niñas, niños y adolescentes;
5. Dos cartas de recomendación de personas que conozcan su intención de adoptar, con los datos de contacto de quien expida la misma.

**Artículo 27.** En caso de que las personas solicitantes de adopción no cumplan con todos los requisitos señalados en el artículo anterior o los mismos presenten alguna deficiencia, se prevendrá a los interesados para que en un término que no exceda de treinta días hábiles tratándose de adopciones nacionales y noventa días hábiles en caso de adopciones internacionales, los subsanen, en caso contrario se desechará la solicitud y se procederá a la baja documental.

**Artículo 28.** Las personas solicitantes de adopción extranjeras deberán acreditar su legal estancia en el país, así como su calidad migratoria y permiso para tramitar el procedimiento de adopción emitido por las autoridades migratorias correspondientes.

**Artículo 29.** Las personas solicitantes de adopción extranjeras deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 26 de la presente Ley, debiendo presentar sus actas debidamente apostilladas o legalizadas.

**Artículo 30.** Una vez presentada la solicitud, acompañada de los documentos requeridos, se programará una entrevista conjunta entre el equipo psicosocial y las personas solicitantes de adopción con la finalidad de explorar la historia familiar y en su caso de pareja, la motivación para la adopción y las expectativas ante la misma, así como el apoyo social del que disponen y los demás criterios a tomar en cuenta para su ulterior valoración.

Realizada la entrevista inicial, las personas solicitantes de adopción serán canalizadas a las áreas de trabajo social y psicología, para que se realicen los estudios correspondientes a fin de completar su expediente.

**Artículo 31.** El procedimiento administrativo de adopción termina:

1. Cuando por causas imputables a las personas solicitantes de adopción, no se encuentre debidamente integrado el expediente;
2. Cuando la PRONNIF compruebe que existe algún tipo de falsedad o alteración en los documentos o información que proporcionen las personas solicitantes de adopción;
3. Cuando las personas solicitantes de adopción manifiesten su voluntad de no continuar el procedimiento mediante escrito dirigido a la PRONNIF;
4. Cuando la PRONNIF entregue por escrito el informe donde se funde y motive las razones por las que el certificado de idoneidad no fue expedido, adjuntando la documentación perteneciente a las personas solicitantes de adopción;
5. Cuando las personas solicitantes de adopción vulneren los derechos de la niña, niño o adolescente que se pretende adoptar;
6. Cuando sobrevengan causas que cambien las condiciones de las personas solicitantes de adopción, que impidan garantizar el interés superior de la niñez;
7. Cuando las personas solicitantes de adopción se nieguen a someterse a las valoraciones que determine el Consejo;
8. Cuando las personas solicitantes de adopción no acaten las recomendaciones derivadas de los estudios en los plazos establecidos para ello;
9. Cuando la autoridad judicial dicte la resolución que decrete la adopción de manera definitiva.

Las autoridades podrán suspender el procedimiento administrativo de adopción cuando tengan razones para creer que ésta se realiza en contravención de lo establecido por la presente Ley.

**CAPÍTULO III**

**DEL CERTIFICADO DE IDONEIDAD**

**Artículo 32.** Una vez integrado el expediente de las personas solicitantes de adopción con los requisitos establecidos en el artículo 26 de la presente Ley y previa valoración psicológica, económica y de trabajo social necesarias para determinar su aptitud, la PRONNIF emitirá el certificado de idoneidad en un término que no excederá de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de los resultados de los estudios antes referidos, salvo que no tenga certeza respecto de la documentación que integra el expediente o que no cuente con suficientes elementos, supuestos en los que se podrá ampliar el plazo hasta por treinta días naturales.

Una vez emitido el certificado de idoneidad las personas solicitantes de adopción se integrarán en la lista de espera.

**Artículo 33.** Las personas solicitantes de adopción no deberán tener contacto con las niñas, niños o adolescentes que pretendan adoptar, ni con sus padres o las personas que los tengan bajo su cuidado, hasta en tanto cuenten con un certificado de idoneidad y se autorice el inicio de convivencias, con excepción de los casos en que la adopción sea entre familiares.

Tratándose de adopciones internacionales, las personas solicitantes de adopción deberán obtener el certificado de idoneidad emitido por la autoridad central de su país de residencia.

**Artículo 34.** En los casos que la PRONNIF resuelva la no emisión del certificado de idoneidad de las personas solicitantes de adopción, se podrá presentar una nueva solicitud transcurrido un año contado a partir de la notificación de dicha resolución.

**Artículo 35.** El informe de adoptabilidad que emitan la PRONNIF deberá contener, por lo menos, los siguientes datos sobre la niña, niño o adolescente susceptible de adopción:

1. Nombre completo;
2. Lugar y fecha de nacimiento;
3. Edad;
4. Sexo;
5. Media filiación, así como los antecedentes familiares;
6. Situación jurídica;
7. Condición e historia médica;
8. Características psicológicas, así como necesidades afectivas y emocionales;
9. Evolución pedagógica;
10. Requerimiento de atención especial;
11. Información sobre los motivos por los cuales no se pudo encontrar a una familia nacional que pudiera adoptar a la niña, niño o adolescente, tratándose de adopciones internacionales;
12. Opinión de la niña, niño y adolescente en relación a la adopción, siempre que sea posible de acuerdo con su edad, desarrollo cognoscitivo y grado de madurez.

La PRONNIF podrá solicitar a los centros de asistencia social que tengan bajo su cuidado a la niña, niño o adolescente, cualquier información adicional a la prevista en este artículo que considere necesaria para salvaguardar el interés superior de la niñez, misma que deberá incluirse en el informe de adoptabilidad.

**CAPÍTULO IV**

**DE LOS ESTUDIOS QUE DEBEN REALIZARSE LAS**

**PERSONAS SOLICITANTES DE ADOPCIÓN Y DE CONSTITUCIÓN**

**COMO FAMILIA DE ACOGIDA**

**Artículo 36.** La PRONNIF deberá practicar estudios socioeconómicos a las personas solicitantes de adopción y de constituirse como familia de acogida, los cuales deberán contener, por lo menos, lo siguiente:

1. Datos generales;
2. Situación laboral;
3. Composición familiar;
4. Situación económica y patrimonial;
5. Características de la vivienda y el entorno;
6. Hábitos.

**Artículo 37.** Las personas solicitantes de adopción y de constituirse como familia de acogida deberán realizarse, a través de instituciones públicas del sistema de salud, los siguientes estudios médicos:

1. Grupo sanguíneo y Factor Rhesus (Rh);
2. Biometría hemática;
3. Química sanguínea;
4. Examen general de orina.

El certificado médico deberá autenticar la existencia de una situación aceptable de salud física de las personas solicitantes de adopción y de constituirse como familia de acogida, que no conlleve discapacidad grave o severa, un riesgo inminente de muerte o cualquier otro padecimiento que les impida garantizar el buen desarrollo social, psicológico, educativo y de salud de la niña, niño o adolescente que se pretenda adoptar.

En caso de requerirlo, el equipo psicosocial podrá consultar al personal médico que expidió el certificado a fin de aclarar su contenido.

**Artículo 38.** La PRONNIF deberá practicar estudios psicológicos a las personas solicitantes de adopción y de constituirse como familia de acogida, los cuales deberán contener, por lo menos, las siguientes baterías de pruebas:

1. Entrevista psicológica, en el caso de que las personas solicitantes de adopción y de constituirse como familia de acogida sean cónyuges o concubinos, la entrevista deberá ser en pareja;
2. CUIDA (Cuestionario para la Evaluación de Adoptantes, Cuidadores, Tutores y Mediadores);
3. 16 PF-5 (16 Factores de Personalidad de Cattell);
4. MSI-R (Inventario de Satisfacción Marital Revisado), en el caso de que las personas solicitantes de adopción y de constituirse como familia de acogida sean cónyuges o concubinos;
5. SENA (Sistema de Evaluación de Niños y Adolescentes);
6. MSCEIT (Test de Inteligencia Emocional de Mayer-Salovey-Caruso);
7. MMPI-2 (Inventario Multifásico de la Personalidad de Minnesota);
8. Cualquier otro que se requiera para acreditar la viabilidad psicológica de las personas solicitantes de adopción y de constituirse como familia de acogida.

Todas las pruebas tendrán una vigencia de seis meses a partir de la notificación de su resultado.

**Artículo 39.** Se consideran impedimentos de las personas solicitantes de adopción y de constituirse como familia de acogida, que pueden afectar el sano desarrollo de niñas, niños o adolescentes, los que se indican a continuación:

1. Cualquier patología o rasgos de personalidad que pongan en riesgo a las niñas, niños o adolescentes;
2. La inestabilidad emocional de las personas solicitantes de adopción o de constituirse como familia de acogida;
3. La inestabilidad o poca solidez de pareja, en el caso de que las personas solicitantes de adopción o de constituirse como familia de acogida sean cónyuges o concubinos;
4. La violencia familiar;
5. La incapacidad de atenderse a sí mismo o cuidar de otros;
6. La escasa adaptación al medio o contar con pocas redes de apoyo social o familiar;
7. La motivación o razón para adoptar no favorezca el interés superior de la niña, niño o adolescente;
8. El padecimiento de alguna enfermedad que les impida garantizar el buen desarrollo social, psicológico, educativo y de salud de la niña, niño o adolescente que se pretenda adoptar.

**Artículo 40.** En el supuesto de que las personas solicitantes de adopción y de constituirse como familia de acogida presenten uno o más impedimentos que a juicio de la PRONNIF puedan ser subsanados, la misma deberá notificar en qué consisten, así como las recomendaciones y canalizaciones que estimen pertinentes para que los pueda subsanar en el plazo que se les indique para tal efecto.

Durante el referido plazo, se tendrá por suspendido temporalmente su procedimiento y antes de su vencimiento, las personas solicitantes de adopción y de constituirse como familia de acogida, deberán de comparecer nuevamente ante la PRONNIF, para acreditar que se resolvió satisfactoriamente el impedimento, para que esto sea verificado y en su caso se reactive el mismo.

Si las personas solicitantes de adopción y de constituirse como familia de acogida no cumplen en tiempo y forma las recomendaciones, se dará de baja su solicitud por falta de interés.

**CAPÍTULO V**

**DE LA ASIGNACIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

**Artículo 41**. La PRONNIF convocará al equipo psicosocial para analizar el expediente de la niña, niño o adolescente susceptible de adopción y de quienes conforman la lista de espera de personas solicitantes de adopción, con la finalidad de seleccionar candidatos idóneos, de acuerdo a las necesidades de la niña, niño o adolescente.

**Artículo 42**. El análisis se basará en el grado de compatibilidad existente entre las necesidades y características de la niña, niño o adolescente con las personas solicitantes de adopción, para el cual se considerará la edad, el sexo, la personalidad, las expectativas de desarrollo social y económico, algún tipo de discapacidad, el diagnóstico médico, así como cualquier otro factor que favorezca la compatibilidad entre las personas solicitantes de adopción y la niña, niño o adolescente.

**Artículo 43**. La PRONNIF presentará ante el Consejo, las razones que justifican las propuestas de asignación de las familias para cada niña, niño o adolescente.

**Artículo 44**. El Consejo elegirá, entre las propuestas que le fueron presentadas, a las familias que considere que, en base al interés superior de la niñez, son las más adecuadas para la niña, niño o adolescente, estableciendo un orden de prelación entre estas y en su caso autorizará el inicio del periodo de convivencias pre-adoptivas.

**Artículo 45.** La PRONNIF informará a las personas solicitantes de adopción que les ha sido asignado una niña, niño o adolescente y los citará a una reunión con la finalidad de conocer su opinión.

En la reunión, en base al expediente de la niña, niño o adolescente, las personas solicitantes de adopción recibirán información médica y psicológica, así como del desenvolvimiento y comportamiento de la niña, niño o adolescente en el centro de asistencia social en que se encuentra.

Una vez que conozcan las circunstancias generales y que hubieren expresado sus inquietudes y dudas, las personas solicitantes de adopción podrán aceptar o declinar la asignación propuesta.

**Artículo 46**. En caso de que las personas solicitantes de adopción rechacen a un niño, niña o adolescente sin justificación suficiente, una vez efectuada la asignación y hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia de adopción, la PRONNIF propondrá al Consejo su baja definitiva de la lista de espera.

**CAPÍTULO VI**

**DE LAS CONVIVENCIAS PRE-ADOPTIVAS**

**Artículo 47.** La PRONNIF podrá aprobar convivencias internas, mismas que siempre se llevarán a cabo en las instalaciones del centro de asistencia social en el que se encuentren bajo acogimiento residencial las niñas, niños o adolescentes, las cuales deberán ser supervisadas por personal de psicología de dichas instituciones o del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de donde sean originarios o atendidos las niñas, niños o adolescentes susceptibles de adopción, quienes deberán emitir los informes correspondientes, los cuales se integrarán al expediente de las personas susceptibles de adopción.

El personal de psicología que participe en la supervisión deberá contar con autorización y registro del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

La PRONNIF elaborará el programa de convivencias internas, acorde a las necesidades de cada niña, niño o adolescente y posibilidades de las personas solicitantes de adopción, con un mínimo de tres convivencias, las cuales se desarrollarán en un plazo que no excederá de veinte días naturales, para estar en aptitud de determinar si existe compatibilidad, empatía e identificación; el número y modalidad de las convivencias dependerá de las necesidades específicas y la edad de cada niña, niño o adolescente, al final de éstas, emitirá un informe que será notificado al Consejo.

**Artículo 48.** El Consejo podrá aprobar las convivencias externas una vez analizados los informes del periodo de adaptación remitidos por los especialistas que supervisaron las convivencias internas.

**Artículo 49.** Las primeras convivencias externas, inicialmente no podrán tener una duración que exceda de cuatro horas, las cuales podrán incrementar hasta alcanzar un fin de semana de convivencia, sin pernocta, de acuerdo a las recomendaciones del área de psicología del centro de asistencia social.

En el transcurso de las convivencias internas como externas, el área de psicología puede realizar recomendaciones para mejorar estas.

**Artículo 50.** El Consejo valorará los informes respecto de las convivencias dentro de los centros de asistencia social y determinará la viabilidad y el programa de convivencias externas, con un mínimo de tres convivencias, que deberán realizarse inicialmente durante el día sin considerar pernocta, en un plazo que no excederá de veinte días naturales.

Si de los informes de las convivencias pre-adoptivas se determina que no se consolidaron las condiciones de adaptación entre niñas, niños y adolescentes y las personas solicitantes de adopción, la secretaría técnica informará al Consejo para que resuelva lo conducente y analice la viabilidad de una nueva asignación, atendiendo al interés superior de la niñez.

**Artículo 51.** En caso de ser favorables las convivencias externas y una vez que se haya generado un vínculo afectivo entre la niña, niño o adolescente y las personas solicitantes de adopción, se presentará un informe del periodo de adaptación al Consejo para que se pronuncie sobre el acogimiento pre-adoptivo, para lo cual deberá considerar los criterios establecidos en el artículo 389 de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza.

**Artículo 52.** Las convivencias internas o externas podrán ser limitadas o suspendidas en cualquier momento por la autoridad correspondiente, cuando resultare necesario, tomando en consideración las recomendaciones efectuadas por los centros de asistencia social respectivos y los resultados de los informes del periodo de adaptación.

**CAPÍTULO VII**

**DEL ACOGIMIENTO PRE-ADOPTIVO**

**Artículo 53.** El acogimiento pre-adoptivo es una modalidad de cuidado alternativo a través de la cual las personas solicitantes de adopción acogen en su seno a niñas, niños y adolescentes con fines de adopción, y asumen todas las obligaciones en cuanto a su cuidado y protección, de conformidad con el principio del interés superior de la niñez.

**Artículo 54.** Para la designación del acogimiento pre-adoptivo, se deberá contar con:

1. Certificado de idoneidad expedido por la PRONNIF u otra Procuraduría de Protección a favor de las personas solicitantes de adopción;
2. Informe de adoptabilidad;
3. Informe del periodo de adaptación;
4. Asignación del Consejo.

A partir del inicio del periodo de acogimiento pre-adoptivo, la PRONNIF promoverá en un plazo que no excederá de treinta días hábiles el procedimiento judicial de adopción de conformidad con la legislación aplicable.

**Artículo 55.** La PRONNIF deberá dar acompañamiento al proceso de adaptación e integración familiar, mediante visitas de seguimiento y orientación a través el equipo psicosocial, con el fin de prevenir o superar las dificultades que se puedan presentar.

**Artículo 56.** Una vez iniciado el procedimiento judicial de adopción, las personas adoptantes no podrán reintegrar a la niña, niño o adolescente, sino solo mediante petición expresa ante la autoridad judicial que conozca de la adopción.

**Artículo 57.** Una vez ejecutoriada la sentencia que declaró la procedencia de la adopción, la PRONNIF dará por concluido el procedimiento administrativo.

**TÍTULO QUINTO**

**DE LA ADOPCIÓN INTERNACIONAL**

**CAPÍTULO ÚNICO**

**DISPOSICIONES GENERALES**

**Artículo 58.** La adopción internacional se rige por los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano, en particular por la Convención sobre la Protección de Menores y la Cooperación en Materia de Adopción Internacional, y en lo conducente, por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el Código Civil Federal y la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza.

**Artículo 59.** La PRONNIF es la autoridad competente para expedir el certificado de idoneidad, en los casos de adopciones internacionales, en donde se haga constar que las personas ciudadanas mexicanas o extranjeras residentes permanentes en el Estado, que pretenden adoptar en el extranjero, son aptas para ello.

**TÍTULO SEXTO**

**DEL SEGUIMIENTO POST-ADOPTIVO**

**CAPÍTULO ÚNICO**

**DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO POST-ADOPTIVO**

**Artículo 60.** El seguimiento post-adoptivo a la familia deberá efectuarse con una periodicidad de seis meses durante tres años contados a partir de que la sentencia judicial de adopción quede firme, pudiendo ampliar el plazo excepcionalmente en caso de ser necesario, con base en el interés superior de la niñez.

En los reportes del seguimiento realizados por la PRONNIF, se deberá apreciar la convivencia familiar y el desarrollo cotidiano de niñas, niños y adolescentes en su entorno, los cuales serán remitidos a la autoridad judicial. La intervención que represente el seguimiento será lo menos invasiva posible a efecto de no afectar el entorno familiar.

En caso de adopción internacional, el seguimiento post-adoptivo será realizado por la autoridad central competente.

**TÍTULO SÉPTIMO**

**DEL ACOGIMIENTO FAMILIAR**

**CAPÍTULO I**

**DE LAS BASES, REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO**

**Artículo 61.** Las personas interesadas en constituirse como familia de acogida, deberán presentar ante la PRONNIF una solicitud para obtener su certificación.

Dicha solicitud contendrá los datos generales de la familia, domicilio, dirección para oír y recibir notificaciones dentro del Estado, teléfono, correo electrónico u otros medios de contacto.

**Artículo 62.** Una vez presentada la solicitud, la PRONNIF convocará a las personas interesadas a una reunión informativa de inducción grupal con otras familias interesadas.

**Artículo 63.** Los requisitos para la expedición de la certificación, en lo conducente, serán los mismos que para la emisión del certificado de idoneidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la presente Ley.

El Consejo podrá solicitar información complementaria cuando se considere necesaria para asegurar y preservar el interés superior de la niñez.

**Artículo 64.** En caso de que la solicitud sea promovida por personas extranjeras residentes en el Estado, a fin de integrar debidamente su solicitud, además de los requisitos señalados, deberán acreditar su residencia permanente en los términos de la Ley de Migración.

**Artículo 65.** Para la integración del expediente, la PRONNIF deberá:

1. Verificar que las personas solicitantes de constituirse como familia de acogida cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 26 de la presente Ley, y exhiban la información adicional que el Consejo considere necesaria;
2. Realizar la investigación correspondiente a fin de cerciorarse que la información proporcionada por las personas solicitantes de constituirse como familia de acogida es fidedigna.

**Artículo 66.** El Sistema DIF y la PRONNIF, como parte del otorgamiento de la certificación para constituirse en familia de acogida, impartirán un curso de capacitación a las personas que serán las responsables de la guarda y custodia de la niña, niño o adolescente que se acogerá, en el cual se les informará los aspectos psicosociales, administrativos y judiciales del cuidado, protección, crianza positiva y promoción del bienestar social de las niñas, niños y adolescentes, así como el desapego que deberán guardar y la concientización de la temporalidad de su acogimiento en dicha familia.

El Consejo definirá los objetivos y contenidos del curso de capacitación.

**CAPÍTULO II**

**DE LA EXPEDICIÓN DE LA CERTIFICACIÓN**

**Artículo 67.** Una vez que las personas interesadas cumplan con los requisitos para ser consideradas como familia de acogida, el Consejo a través de la secretaría técnica, expedirá la certificación correspondiente en un plazo no mayor a diez días hábiles contados a partir de la celebración de la sesión del Consejo en la que se apruebe su emisión.

Todas las certificaciones otorgadas se deberán de inscribir en el registro que para tal efecto se instituya por la PRONNIF.

**Artículo 68.** La certificación tendrá una vigencia de dos años contados a partir de su expedición, transcurrido dicho término y en caso de que se desee su renovación, se deberán actualizar los documentos necesarios y las valoraciones psicosociales.

**Artículo 69.** La PRONNIF podrá solicitar al Consejo la cancelación de la certificación otorgada cuando se advierta que la información proporcionada en el informe mensual al que se hace referencia en la fracción V del artículo 74 de la presente Ley es falsa, o cuando las condiciones en las que se proporciona el acogimiento familiar vulneren o coloquen en situación de riesgo los derechos de la niña, niño o adolescente, sin perjuicio de las acciones que se pudieran emprender para la salvaguarda o restitución de los mismos.

En caso de cancelación, la PRONNIF asentará dicha anotación en el registro correspondiente.

**CAPÍTULO III**

**DE LA ASIGNACIÓN EN FAMILIA DE ACOGIDA**

**Artículo 70.** La asignación de una familia de acogida a niñas, niños y adolescentes, sólo podrá otorgarse a las familias que cuenten con certificación vigente.

**Artículo 71.** Para la asignación de la niña, niño o adolescente a una familia de acogida, se deberá considerar que entre éstos y quienes serán las personas responsables de su guarda y custodia, exista una diferencia de edad de por lo menos diecisiete años. En casos excepcionales y a juicio de la PRONNIF, el requisito de diferencia de edad, podrá dispensarse en atención al interés superior de la niña, niño o adolescente.

**Artículo 72.** Una vez que la niña, niño o adolescente, se encuentre en posibilidad de ser integrado a una familia de acogida, la PRONNIF seleccionará la más idónea dentro del registro que se lleve para tal efecto.

Las características de la niña, niño o adolescente que requieren el acogimiento y sus necesidades, así como su interés superior y la prevalencia de sus derechos, serán la base para la selección de la familia.

Una vez realizada la designación, la familia de acogida deberá comunicar por escrito su aceptación ante la PRONNIF.

**Artículo 73.** Una vez seleccionada la familia, la PRONNIF solicitará la autorización judicial de conformidad con lo establecido por el artículo 397 de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza.

Autorizada la designación por la autoridad judicial, se entregará a la familia de acogida, el oficio de asignación y el informe que contenga los datos generales de la niña, niño o adolescente, su ficha médica, la fecha a partir de la cual se asigna, así como la vigencia de la asignación y la demás información necesaria.

**Artículo 74.** La familia de acogida tendrá las siguientes obligaciones respecto a las niñas, niños o adolescentes:

1. Brindar irrestricto respeto a sus derechos humanos;
2. Proveer de una alimentación sana;
3. Cuidar de su salud en todo momento;
4. Brindar el acceso a la educación, así como a las actividades recreativas que sean posibles para su desarrollo físico y emocional;
5. Rendir un informe mensual a la PRONNIF, además de informar sobre cualquier incidencia que se presente;
6. Guardar confidencialidad;
7. Permitir al personal autorizado de la PRONNIF el acceso a todas las áreas del domicilio, con la finalidad de realizar visitas de supervisión, así como presentar ante la misma las constancias escolares, médicas y demás documentación que se considere necesaria;
8. Abstenerse de trasladar a las niñas, niños o adolescentes fuera de la ciudad, sin autorización por escrito de la PRONNIF;
9. Reincorporar a las niñas, niños o adolescentes al término del acogimiento o ante el requerimiento de la PRONNIF;
10. Dar seguimiento a las canalizaciones que con motivo del plan de restitución de derechos de la niña, niño o adolescente emita la PRONNIF;
11. Las demás que se consideren necesarias para el sano desarrollo y bienestar de las niñas, niños o adolescentes.

**CAPÍTULO IV**

**DE LA TERMINACIÓN DEL ACOGIMIENTO**

**Artículo 75.** La PRONNIF podrá dar por terminada la asignación, en los siguientes supuestos:

1. En caso de que se resuelva la situación jurídica de la niña, niño o adolescente;
2. Si de los seguimientos que se realicen se advierte que no se cumplieron las condiciones de adaptación;
3. En caso de presentarse algún tipo de violación a los derechos humanos de la niña, niño o adolescente;
4. En caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones establecidas en el artículo anterior;
5. Los demás que sean necesarias para la protección del interés superior de las niñas, niños y adolescentes.

**CAPÍTULO V**

**DEL REGISTRO DE LAS FAMILIAS DE ACOGIDA**

**Artículo 76.** El registro de las familias de acogida a cargo de la PRONNIF, deberá contener, por lo menos, la información siguiente:

1. Datos generales de las personas solicitantes de constituirse como familia de acogida;
2. Domicilio de la familia;
3. Número de dependientes económicos en la familia;
4. Los ingresos y egresos mensuales de la familia;
5. La certificación emitida por el Consejo;
6. El perfil y número de niñas, niños o adolescentes que, en su caso, podrían acoger.

**TÍTULO OCTAVO**

**DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN**

**CAPÍTULO ÚNICO**

**DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN**

**Artículo 77.** Procede el recurso de reconsideración en contra del acuerdo donde se describan las razones por las que la certificación o el certificado de idoneidad no fue expedido.

**Artículo 78.** El recurso de reconsideración se tramitará únicamente por las personas interesadas ante la PRONNIF, quien deberá resolverlo conforme a derecho.

**Artículo 79.** El plazo para interponer el recurso de reconsideración será de tres días hábiles contados a partir de la emisión del acuerdo donde se describan las razones por las que la certificación o el certificado de idoneidad no fue expedido.

**Artículo 80.** Los requisitos del recurso de reconsideración son los siguientes:

1. Se deberá interponer por escrito precisando el nombre y domicilio de las personas solicitantes de adopción o de constituirse como familia de acogida;
2. Señalar a la autoridad que emitió el acuerdo donde se describan las razones por las que la certificación o el certificado de idoneidad no fue expedido;
3. Expresar los agravios que cause el acuerdo señalado en la fracción anterior;
4. Ofrecer las pruebas que estimen pertinentes;
5. Firmar en forma autógrafa o estampar huella digital de las personas que lo promuevan.

**Artículo 81.** Dentro del término de tres días hábiles, contados a partir de la admisión del recurso, se desahogarán las pruebas que hayan estimado pertinentes las personas solicitantes de adopción o de constituirse como familia de acogida con relación a los agravios expuestos.

Una vez desahogadas las pruebas ofrecidas, la PRONNIF emitirá la resolución que corresponda en un plazo de cinco días hábiles y se procederá a su debida notificación.

**Artículo 82.** Las resoluciones que se emitan con motivo del recurso de reconsideración serán definitivas y en su contra no procederá recurso alguno.

**TÍTULO NOVENO**

**DEL ARCHIVO, BASE DATOS Y SISTEMA DE INFORMACIÓN**

**CAPÍTULO ÚNICO**

**DISPOSICIONES GENERALES**

**Artículo 83.** La PRONNIF contará con un sistema de información que permita registrar a las niñas, niños y adolescentes susceptibles de adopción, así como el listado de las personas solicitantes de adopción, las adopciones concluidas y sus seguimientos.

**Artículo 84.** Para garantizar el derecho a la identidad de niñas, niños y adolescentes, se creará un archivo documental y digital de los expedientes que se hayan originado en el proceso de adopción y de acogimiento familiar, el cual estará a cargo de la PRONNIF, quien observará los principios de confidencialidad y reserva, debiendo proporcionar la información a la persona adoptada, cuando este desee conocer sus antecedentes familiares y sea mayor de edad.

Las niñas, niños y adolescentes que deseen conocer sus antecedentes familiares deberán contar con el consentimiento de las personas adoptantes, y podrán hacerlo siempre que ello atienda al interés superior de la niñez.

**Artículo 85.** El archivo y base de datos a que se refiere el artículo anterior deberá conservarse por el periodo acordado por el Comité Técnico Documental de la PRONNIF atendiendo a lo establecido en la Ley General de Archivos.

**ARTICULO SEGUNDO.-** Se modifican los artículos 105, 106 y 107 de la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 105.-** En el proceso administrativo de adopción, la Procuraduría deberá integrar el expediente conforme a lo establecido en la Ley de Adopciones y Acogimiento Familiar para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

**Artículo 106.-** Una vez integrado el expediente, las Subprocuradurías Regionales lo remitirán al área de adopciones de la Procuraduría de las Niñas, Niños y la Familia, quien validará y registrará su solicitud de adopción.

**Artículo 107.-** La Procuraduría iniciará el procedimiento judicial de adopción de conformidad a lo previsto en la legislación familiar aplicable, una vez que se hayan agotado y satisfecho los requisitos legales que se desprenden de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza, la Ley de Asistencia Social y Protección de Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley de Adopciones y Acogimiento Familiar para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás ordenamientos legales aplicables.

**T R A N S I T O R I O S**

**ARTÍCULO PRIMERO.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** Se abroga el Reglamento del Proceso Administrativo de Adopciones del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 27 de septiembre de 2013.

**ARTÍCULO TERCERO.-** Los procesos de adopción que se encuentren en trámite a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, se deberán concluir conforme a la normatividad vigente al momento de su inicio.

**ARTÍCULO CUARTO.-** Se modifica la denominación del Consejo Técnico de Adopciones por Consejo Técnico de Evaluación, mismo que deberá integrarse de conformidad con lo establecido en el presente Decreto, en un periodo que no excederá de sesenta días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del mismo, previa emisión de la convocatoria para elegir a las personas representantes de las asociaciones civiles.

Cuando alguna disposición legal o administrativa haga mención al Consejo Técnico de Adopciones, se entenderá que se refiere al Consejo Técnico de Evaluación.

**ARTÍCULO QUINTO.-** Cuando se haga alusión en un ordenamiento jurídico al Reglamento del Proceso Administrativo de Adopciones del Estado de Coahuila de Zaragoza se entenderá que se refiere a la Ley de Adopciones y Acogimiento Familiar para el Estado de Coahuila de Zaragoza, sin perjuicio de que con posterioridad se hagan los ajustes normativos necesarios.

**ARTÍCULO SEXTO.-** Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y la Comisión Especial para la Garantía de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda, Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza, Dip. Blanca Eppen Canales (Secretaria), Dip. Diana Patricia González Soto, Dip. María Esperanza, Dip. Fernando Izaguirre Valdés, y Dip. Elisa Catalina Villalobos Hernández.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 22 de Septiembre de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**COMISIÓN ESPECIAL PARA LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. BLANCA EPPEN CANALES**  **(SECRETARIA)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARÌA ESPERANZA CHAPA GARCÍA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDÈS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. ELISA CTALINA VILLALOBOS HERNÁNDEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y de Transparencia y Acceso a la Información de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la fracción V del artículo 18 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila, suscrita por el Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 04 del mes de diciembre del año 2019, se acordó turnar a las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y de Transparencia y Acceso a la Información, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnó a estas Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y de Transparencia y Acceso a la Información, la iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la fracción V del artículo 18 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila, suscrita por el Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que estas Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y de Transparencia y Acceso a la Información, con fundamento en los artículos 90, 111, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, son competentes para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la fracción V del artículo 18 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila, suscrita por el Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

***E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S***

*“Los nuevos modelos de comunicación han provocado la exigencia ciudadana de generación de información por parte de los gobiernos ya no solo confiable, sino también accesible. El movimiento mundial “datos abiertos” busca que los gobiernos no solamente cumplan con su normativa de acceso a la información y transparencia, sino que la información este dispuesta en formatos asequibles, para que el propio ciudadano pueda contribuir a generar aplicaciones, nuevos datos y otros servicios, para lograr una mayor comprensión y aprovechamiento de la información.*

*Al observar diversos portales electrónicos de información y transparencias de diversos organismos públicos del Estado de Coahuila de Zaragoza, nos topamos con que la información esta presentada en formatos como imágenes y fotocopias, formatos que impiden que dicha información sea trabajada por parte del ciudadano con la finalidad de realizar un análisis a profundidad de la misma y que pudiera colaborar a que dicha información sirviera como fundamento para nuevas y mejoras políticas públicas en el Estado.*

*Cito textual*

*“Las iniciativas de Datos Abiertos se han consolidado como políticas nacionales en diversos países, por ejemplo, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Nueva Zelanda, naciones que comprometieron acciones específicas para la apertura de su información pública”*

*En septiembre de 2015, México hizo un llamado a nivel mundial para adoptar la Carta Internacional de Datos Abiertos, con la finalidad de aprovechar a plenitud las nuevas tecnologías logrando mejoras significativas en el bienestar de los ciudadanos.*

*La Carta Internacional de Datos Abiertos es una iniciativa de gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, sector privado y expertos en la materia, que articula los principios fundamentales para coordinar y promover la adopción de los Datos Abiertos a nivel global. Estos principios son un marco de acción común para que los datos sean un medio para el desarrollo sostenible.*

*El compromiso para impulsar los datos abiertos en México se vio estampado en el acuerdo firmado por 17 países en el 2015 y que ha ido agrupando nuevas naciones desde dichas fechas.*

*Es de destacar que el 20 de febrero del 2015 se publicó el Decreto federal en materia de la regulación de Datos Abiertos en México y que tiene por objeto:*

*“regular la forma mediante la cual, los datos de carácter público, generados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y por las empresas productivas del Estado, se pondrán a disposición de la población como datos abiertos, con el propósito de facilitar su acceso, uso, reutilización y redistribución para cualquier fin, conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables”*

*En dicho Decreto en su Artículo Quinto se establece:*

*“Para ser considerados como datos abiertos, los conjuntos de datos deberán contar con las características mínimas siguientes:*

***Gratuitos:*** *Se obtendrán sin entregar a cambio contraprestación alguna;*

***No discriminatorios:*** *Serán accesibles sin restricciones de acceso para los usuarios;*

***De libre uso:*** *Citarán la fuente de origen como único requerimiento para ser utilizados libremente;*

*Legibles por máquinas: Deberán estar estructurados, total o parcialmente, para ser procesados e interpretados por equipos electrónicos de manera automática;*

*Integrales: Deberán contener, en la medida de lo posible, el tema que describen a detalle y con los metadatos necesarios;*

***Primarios:*** *Provendrán de la fuente de origen con el máximo nivel de desagregación posible;*

***Oportunos:*** *Serán actualizados periódicamente, conforme se generen, y*

***Permanentes:*** *Se deberán conservar en el tiempo, para lo cual, las versiones históricas relevantes para uso público se mantendrán disponibles a través de identificadores adecuados para tal efecto.*

*Es por lo anterior y con la finalidad de que la Ley de Acceso a la Información Pública de Coahuila, siga siendo un referente a nivel nacional e internacional que pongo a su consideración la presente iniciativa ciudadana, que tiene como único fin contribuir a que la sociedad contribuya a proponer nuevas políticas públicas, diferentes indicadores de gestión y propuestas de mejoras, sin dejar de lado que la presente iniciativa servirá para que la Ley en cuestión este en concordancia con leyes y decretos nacionales y con políticas públicas de avanzada a nivel internacional”.*

**TERCERO.-** Quienes integramos esta comisión dictaminadora efectuamos el estudio y análisis de la iniciativa de reforma, así como de las consideraciones en la que encuentra sustento la misma, verificando que el proyecto normativo tiene por objeto reformar la fracción V del artículo 18 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, referente a la regulación de datos abiertos.

El acceso a la información se considera un derecho fundamental que se le otorga a la ciudadanía, por medio del cual se puede solicitar al gobierno información y de ello obtener respuestas satisfactorias, a fin de consolidar un mejor y más confiable sistema democrático.

En este sentido, encontramos que artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que el derecho a la libertad de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información, el cual al tenor literal manifiesta que:

*Artículo 19*

*1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.*

*2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.*

*3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:*

*a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;*

*b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.*

Por su parte el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también consolida el derecho del acceso a la información, estableciendo que:

***Artículo 6o.*** *La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.*

***Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.***

***El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.***

*Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:*

***A.*** *Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:*

***I.*** *Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.*

***II.*** *La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.*

***III.*** *Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.*

***IV.*** *Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.*

***V.*** *Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.*

***VI.*** *Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.*

***VII.*** *La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes.*

***VIII.*** *La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley.*

*El organismo autónomo previsto en esta fracción, se regirá por la ley en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, en los términos que establezca la ley general que emita el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho.*

*En su funcionamiento se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.*

*El organismo garante tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal; con excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un comité integrado por tres ministros. También conocerá de los recursos que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los organismos autónomos especializados de las entidades federativas que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información, en los términos que establezca la ley.*

*El organismo garante federal, de oficio o a petición fundada del organismo garante equivalente de las entidades federativas, podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten.*

*La ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial.*

*Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. El Consejero Jurídico del Gobierno podrá interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos que establezca la ley, sólo en el caso que dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional conforme a la ley de la materia.*

*El organismo garante se integra por siete comisionados. Para su nombramiento, la Cámara de Senadores, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, a propuesta de los grupos parlamentarios, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, nombrará al comisionado que deba cubrir la vacante, siguiendo el proceso establecido en la ley. El nombramiento podrá ser objetado por el Presidente de la República en un plazo de diez días hábiles. Si el Presidente de la República no objetara el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de comisionado la persona nombrada por el Senado de la República.*

*En caso de que el Presidente de la República objetara el nombramiento, la Cámara de Senadores nombrará una nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior, pero con una votación de las tres quintas partes de los miembros presentes. Si este segundo nombramiento fuera objetado, la Cámara de Senadores, en los términos del párrafo anterior, con la votación de las tres quintas partes de los miembros presentes, designará al comisionado que ocupará la vacante.*

*Los comisionados durarán en su encargo siete años y deberán cumplir con los requisitos previstos en las fracciones I, II, IV, V y VI del artículo 95 de esta Constitución, no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas o de beneficencia, sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos del Título Cuarto de esta Constitución y serán sujetos de juicio político.*

*En la conformación del organismo garante se procurará la equidad de género.*

*El comisionado presidente será designado por los propios comisionados, mediante voto secreto, por un periodo de tres años, con posibilidad de ser reelecto por un periodo igual; estará obligado a rendir un informe anual ante el Senado, en la fecha y en los términos que disponga la ley.*

*El organismo garante tendrá un Consejo Consultivo, integrado por diez consejeros, que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo.*

*La ley establecerá las medidas de apremio que podrá imponer el organismo garante para asegurar el cumplimiento de sus decisiones.*

*Toda autoridad y servidor público estará obligado a coadyuvar con el organismo garante y sus integrantes para el buen desempeño de sus funciones.*

*El organismo garante coordinará sus acciones con la Auditoría Superior de la Federación, con la entidad especializada en materia de archivos y con el organismo encargado de regular la captación, procesamiento y publicación de la información estadística y geográfica, así como con los organismos garantes de las entidades federativas, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado Mexicano.*

***B.*** *En materia de radiodifusión y telecomunicaciones:*

***I.*** *El Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales.*

***II.*** *Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias.*

***III.*** *La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3o. de esta Constitución.*

***IV.*** *Se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa; se establecerán las condiciones que deben regir los contenidos y la contratación de los servicios para su transmisión al público, incluidas aquellas relativas a la responsabilidad de los concesionarios respecto de la información transmitida por cuenta de terceros, sin afectar la libertad de expresión y de difusión.*

***V.*** *La ley establecerá un organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión, que tendrá por objeto proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, a efecto de asegurar el acceso al mayor número de personas en cada una de las entidades de la Federación, a contenidos que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional, y dar espacio a las obras de producción independiente, así como a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad.*

*El organismo público contará con un Consejo Ciudadano con el objeto de asegurar su independencia y una política editorial imparcial y objetiva. Será integrado por nueve consejeros honorarios que serán elegidos mediante una amplia consulta pública por el voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente. Los consejeros desempeñarán su encargo en forma escalonada, por lo que anualmente serán sustituidos los dos de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen ratificados por el Senado para un segundo periodo.*

*El Presidente del organismo público será designado, a propuesta del Ejecutivo Federal, con el voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente; durará en su encargo cinco años, podrá ser designado para un nuevo periodo por una sola vez, y sólo podrá ser removido por el Senado mediante la misma mayoría.*

*El Presidente del organismo presentará anualmente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión un informe de actividades; al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que dispongan las leyes.*

***VI.*** *La ley establecerá los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, de las audiencias, así como los mecanismos para su protección.*

En este contexto, el iniciador expone que *“los nuevos modelos de comunicación han provocado la exigencia ciudadana de generación de información por parte de los gobiernos ya no solo confiable, sino también accesible. El movimiento mundial “datos abiertos” busca que los gobiernos no solamente cumplan con su normativa de acceso a la información y transparencia, sino que la información esté dispuesta en formatos asequibles, para que el propio ciudadano pueda contribuir a generar aplicaciones, nuevos datos y otros servicios, para lograr una mayor comprensión y aprovechamiento de la información”.*

De lo anterior, se concluye que en la actualidad no basta con recibir la información requerida, sino que también resulta oportuno que dicha información cumpla con los requisitos indispensables para facilitar en la medida de lo posible lo solicitado por la ciudadanía.

En base a ello, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece las características que deben cumplir los datos abiertos, entre las que se enlista que tales deben otorgarse de manera gratuita, que sean accesibles para todo usuario, que sean legibles por maquinas, entre otros.

Por su parte la Ley de Acceso a la Información Pública de nuestro Estado, sienta la obligatoriedad de efectuar a la utilización de formatos abiertos y de fácil comprensión, sin embargo, resulta oportuno enlistar las características mínimas para dar adecuado cumplimiento con este derecho.

Por todo lo anteriormente expuesto, es que quienes integramos estas comisiones unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y de Transparencia y Acceso a la Información, coincidimos en la necesidad imprescindible de incorporar dentro de la ley de transparencia, las medidas para que se otorgue una información pública de fácil comprensión y que cumpla con las características básicas para su debido cumplimiento, todo ello en apego a la ley general en la materia.

No obstante lo anterior, estimamos que lo más adecuado, es definir dentro del glosario el concepto de datos abiertos, ya que ello facilitará la comprensión de los enunciados normativos y su correcta aplicación. En este sentido, se optó por la colocación de la porción normativa en el artículo tercero en lugar del artículo originalmente planteado.

En virtud de lo antes expuesto, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO ÚNICO.-** Se adiciona la fracción II del artículo 3 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, recorriéndose las ulteriores, para quedar como sigue:

**Artículo 3.** …

1. …
2. **Datos abiertos**: Los datos digitales de carácter público que son accesibles en línea que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado y que tienen las siguientes características:

**a) Accesibles**:Los datos están disponibles para la gama más amplia de usuarios, para cualquier propósito;

**b) Integrales**: Contienen el tema que describen a detalle y con los metadatos necesarios;

**c) Gratuitos**:Se obtienen sin entregar a cambio contraprestación alguna;

**d) No discriminatorios**: Los datos están disponibles para cualquier persona, sin necesidad de registro;

**e) Oportunos:** Son actualizados, periódicamente, conforme se generen;

**f) Permanentes:** Se conservan en el tiempo, para lo cual, las versiones históricas relevantes para uso público se mantendrán disponibles con identificadores adecuados al efecto;

**g) Primarios:** Provienen de la fuente de origen con el máximo nivel de desagregación posible;

**h) Legibles por máquinas:** Deberán estar estructurados, total o parcialmente, para ser procesados e interpretados por equipos electrónicos de manera automática;

**i) En formatos abiertos:** Los datos estarán disponibles con el conjunto de características técnicas y de presentación que corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos en un archivo digital, cuyas especificaciones técnicas están disponibles públicamente, que no suponen una dificultad de acceso y que su aplicación y reproducción no estén condicionadas a contraprestación alguna;

**j) De libre uso**: Citan la fuente de origen como único requerimiento para ser utilizados libremente;

1. **Días:** Días hábiles.
2. **Documentos:** Los reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico.
3. **Expediente:** Unidad documental constituida por uno o varios documentos, ordenados y relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite de los sujetos obligados.
4. **Documento Electrónico:** Información que puede constituir un documento, archivada o almacenada en un soporte electrónico, en un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento.
5. **Expediente Electrónico:** Es el conjunto de documentos electrónicos cuyo contenido y estructura permiten identificarlos como documentos de archivo que aseguran la validez, autenticidad, confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información que contienen.
6. **Indicadores de Gestión:** La información numérica o gráfica que permite evaluar la eficacia y eficiencia en el cumplimiento del grado de ejecución de las actividades, la asignación y el uso de recursos en las diferentes etapas de los procesos, proyectos y programas; así como, los planes gubernamentales de los sujetos obligados en una dimensión de mediano y largo plazo.
7. **Indicador de Resultados:** La información que permita evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, indicando los beneficios obtenidos, de acuerdo a los resultados de la gestión.
8. **Información:** La contenida en los documentos o documentos electrónicos que los sujetos obligados generan, obtienen, adquieren, transforman o conservan por cualquier título o medio.
9. **Información Pública de Oficio:** La información que los sujetos obligados deben difundir, actualizar y poner a disposición del público en medios electrónicos de manera proactiva, sin que medie solicitud de por medio.
10. **Información Confidencial:** La información en posesión de los sujetos obligados, que refiera a la vida privada y/o los datos personales, por lo que no puede ser difundida, publicada o dada a conocer, excepto en aquellos casos en que así lo contemple la presente ley y/o la Ley de Protección de Datos Personales.
11. **Información Pública:** Toda información en posesión de los sujetos obligados, con excepción de la que tenga el carácter de confidencial.
12. **Información Reservada:** La información pública que por razones de interés público sea excepcionalmente restringido el acceso de manera temporal, de conformidad con el capítulo quinto de la ley.
13. **Instituto:** El Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública.
14. **Medio Electrónico:** Sistema electrónico de comunicación abierta, que permite almacenar, difundir o transmitir documentos, datos o información.
15. **Ley:** La Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
16. **Ley de Protección de Datos Personales:** Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Coahuila de Zaragoza.
17. **Reglamento:** Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
18. **Servidor público:** Los representantes de elección popular, los miembros de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, los integrantes de organismos públicos autónomos, los funcionarios y empleados, y en general toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en las entidades públicas.
19. **Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información:** Aquél que forma parte de la Plataforma Nacional de Transparencia, de conformidad con el artículo 50 fracción I de la Ley General.
20. **Sujetos obligados**: Los señalados en el artículo 6 de esta ley.
21. **Sujetos obligados indirectos**: Las personas físicas o morales que por su labor auxiliar en funciones de orden público, y por razones de interés público, poseen obligaciones de transparentar información en términos de la Sección Tercera del Capítulo Tercero de la presente ley.
22. **Entidad Pública:** Los sujetos obligados a proporcionar información en los términos de la Ley General, esta ley y demás disposiciones aplicables, contenidos en el artículo 6 de esta ley, con excepción de las organizaciones de la sociedad civil que reciban y/o ejerzan recursos públicos en el ámbito estatal y municipal, a partir de 16,000 salarios mínimos generales vigentes en el Estado o aquellos que reciban un ingreso estatal, que sea propuesto dentro de su presupuesto y las instituciones de beneficencia.
23. **Organizaciones de la Sociedad Civil**: Asociaciones o Sociedades Civiles legalmente constituidas.
24. **Instituciones de Beneficencia:** Toda institución, asociación, fundación o ente económico que realice actos de beneficencia, en términos de la ley de la materia.
25. **Estado:** El Estado de Coahuila de Zaragoza.
26. **Versiones Públicas:** Documento en el que, para permitir su acceso, se testa u omite la información clasificada como reservada o la confidencial.
27. **Persona:** Todo ser humano sin importar condición o entidad jurídica, salvo lo dispuesto en la ley.
28. **Derecho de Acceso a la Información Pública:** El derecho fundamental que tiene toda persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos obligados, en los términos de la presente ley.
29. **Protección de Datos Personales:** La garantía que tutela la privacidad de datos personales en poder de las entidades públicas y sujetos obligados, en términos de la Ley de Protección de Datos Personales.
30. **Prueba de daño:** Carga de los sujetos obligados de demostrar que la divulgación de información lesiona el interés jurídicamente protegido por la ley, y que el daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla.
31. **Redes sociales:** Formas de comunicación electrónica por medio de comunidades virtuales con objeto de compartir información, ideas, mensajes personales, fotografía, videos y diversos contenidos.
32. **Interés Público:** Valor agregado que posee la información producto de una actividad, que por su naturaleza resulta de importancia conocer para la comunidad para el debido respeto y ejercicio de los derechos humanos.
33. **Ley General:** Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
34. **Ley General de Protección de Datos Personales:** Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
35. **Organismo Garante Nacional:** Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
36. **Persona que realiza actos de autoridad:** Es toda aquella que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.

**TRANSITORIO**

**ARTÍCULO ÚNICO.** El presente decreto iniciará su vigencia el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y de Transparencia y Acceso a la Información, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda, Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza, Dip. María del Rosario Contreras Pérez (Coordinadora), Dip. María Eugenia Cázares Martínez (Secretaria).En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 22 de septiembre de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. MARÍA DEL ROSARIO CONTRERAS PÉREZ**  **(COORDINADORA)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARÍA EUGENIA CÁZARES MARTÍNEZ**  **(SECRETARIA)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de lasComisiones Unidas de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad y de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la Iniciativa con proyecto de decreto, que presenta el diputado Jaime Bueno Zertuche del grupo parlamentario “Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional por la que se reforma la fracción XVI del artículo 5 y la fracción IV del artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Coahuila de Zaragoza y el primer párrafo de artículos 211 y se adiciona un párrafo al final, asimismo se reforma el primer párrafo del artículo 212 y el artículo 254 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, con el objeto de fortalecer los derechos de las personas adultas mayores y sancionar las conductas que atenten contra su integridad.

**Resultando**

**Primero.-** Que en la sesión celebrada el día 04 de diciembre de 2019, se presentó ante el Pleno del Congreso la presente iniciativa de ley para su correspondiente lectura.

**Segundo.-** Que en virtud de lo anterior, tal iniciativa fue turnada en la misma fecha a la Comisión de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad para su estudio, análisis y dictamen.

**Considerandos**

**Primero.-** Que esta Comisión de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad, con fundamento en los artículos 109, 163, 164, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**Segundo.-** Que conforme a lo establecido en el artículo 4.3 de la Convención sobre personas con discapacidad el cual prevé que: “En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan”, se contactó el día 10 de septiembre del presente año mediante correo electrónico, vía telefónica y a través de la aplicación “whats app” con diversas organizaciones de la sociedad civil de todo el Estado de Coahuila, dedicadas a la atención de grupos en situación de vulnerabilidad, en especial a grupos, colectivos y asociaciones en favor de personas con discapacidad.

**Tercero.-** Que la Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma la fracción XVI del artículo 5 y la fracción IV del artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Coahuila de Zaragoza y el primer párrafo de artículos 211 y se adiciona un párrafo al final, asimismo se reforma el primer párrafo del artículo 212 y el artículo 254 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, se basa entre otras, en las consideraciones siguientes:

**Exposición de motivos**

De acuerdo al Informe Especial sobre la situación de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores en México , realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humando en febrero del presente año, se advierte que las proyecciones demográficas para nuestro país revelan una evidente inclinación al envejecimiento gradual de la población para los siguientes tres décadas.

Se afirma en dicho documento, que conforme a indicadores realizados por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) se calcula que en el país habitarán en el año 2050, alrededor de 150,837,517 personas aproximadamente, de las cuales el 21.5% (32.4 millones) tendrán 60 años de edad o más. Y de este grupo etario la mayor parte serán mujeres con el 56.1 %, y la esperanza de vida se habrá incrementado a 81.60 años, mientras que en los hombres será de 77.34 años su esperanza de vida y será una población aproximada del 43%.

Eso significa que, la población de adultos mayores seguirá incrementándose paulatinamente hasta representar casi la cuarta parte de la población total. Es por ello que resulta necesario implementar políticas públicas y ofrecer una legislación cada vez más acorde a proteger y garantizar los derechos de las personas adultas mayores.

Si bien es cierto, en nuestro país la protección de los derechos de las personas adultas mayores ha ido evolucionando progresivamente, fue a partir de la década de los setentas en la época en la que el Estado consolidó la atención a este sector de la población, mediante la creación del Instituto Nacional de la Senectud (INSEN) actualmente Instituto Nacional de las personas Adultas Mayores (INAPAM).

Durante las últimas dos décadas se han implementado diversas acciones y programas que han contribuido a mejorar las condiciones de vida de las personas adultas mayores. En los Programas de Desarrollo de las diversas administraciones públicas federales que han transcurrido, se han ido introduciendo políticas públicas más concretas para ofrecer programas sociales de amplia cobertura y efectividad a este sector poblacional. Sin embargo, no en todos los casos se han obtenido resultados que impacten en el ejercicio de todos sus derechos humanos.

En materia legislativa, Coahuila se sumó en el 2005 creando la Ley de las Personas Adultas Mayores para el Estado, denominación que luego fue reformada mediante decreto el 12 de abril de 2016 para establecerla con el nombre actual de Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Coahuila de Zaragoza.

El objeto de esta ley es justamente reconocer, garantizar y proteger el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, a fin de elevar su calidad de vida y promover su plena integración al desarrollo social, económico, político y cultural de nuestro Estado.

Es precisamente en este ordenamiento legal, en el que se establecen las bases y disposiciones para su cumplimiento, ya sea a través de políticas públicas estatales para la defensa de los derechos de las personas adultas mayores, programas estatales o municipales y aquellas acciones implementadas por el Instituto Coahuilense de las Personas Adultas Mayores.

Ahora bien, de acuerdo a diversos estudios sobre indicadores de la situación económica en las personas adultas mayores, se advierte que dicho entorno está estrechamente vinculado con el derecho al empleo, los ingresos, el retiro y la seguridad financiera.

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) estimó en el 2015 que en nuestro país el porcentaje de individuos de 65 años y más que vivían en pobreza, fue superior al 30% mientras que el índice promedio de otros países fue de 12.6 %.

En el 2017, la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) advirtió que la problemática que más aqueja a este sector de la población es la falta de empleo y de oportunidades para encontrar trabajo y reflejó que el 37% de las personas adultas mayores encuestadas dependen económicamente de sus hijos o hijas.

En ese contexto, resulta notable la vulnerabilidad en la que se encuentran las personas adultas mayores, pues como ya lo advertimos es alto el índice de personas que dependen económicamente de otro familiar y en algunas ocasiones son objeto de abandono o maltrato por esa situación.

De acuerdo a cifras del INEGI la estadística relativa a la incidencia de violencia contra las personas mayores, es preocupante, pues se advierten cifras anuales cerca de 1,494,953 de mujeres mayores de 60 años a nivel nacional vivieron algún episodio de violencia.

En consecuencia, a la par de la perspectiva demográfica que alerta sobre el envejecimiento poblacional, deben construirse y considerarse proyecciones sobre las complicaciones que afrontarán las personas mayores de 60 años para disfrutar de una vida plena.

Es por ello que la presente iniciativa propone reformar diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Coahuila de Zaragoza, a fin de fortalecer las normas que evitan poner en riesgo la integridad de las personas adultas mayores, sus bienes o derechos, determinando cuales conductas serán sancionadas por la vía penal.

En ese sentido, se amplía el término de abandono que define la ley, a efecto de incorporar rasgos distintivos como lo es la acción sistemática, permanente y consiente en la omisión de atender las necesidades básicas de una persona mayor y que por ello ponga en peligro su vida o su integridad física, psíquica o moral.

Además se propone reformar lo concerniente a las obligaciones de la familia para con las personas adultas mayores, a efecto de impedir actos u omisiones que pongan en riesgo su persona, bienes y derechos, por lo que se agregan dentro de esas acciones, el hacinamiento o desalojo cometidos por familiares en contra de los adultos mayores y estableciendo que tales conductas serán sancionadas penalmente, esto debido a que se considera un acto que atenta contra la integridad de las personas que se encuentran en un estado de vulnerabilidad por su edad avanzada, su dependencia económica, o por su deterioro físico o mental, y además que es cometido por quien debiera salvaguardar y proteger su integridad pues tiene a su cargo el cuidado y la atención de un adulto mayor.

En cuanto a la propuesta de reforma al Código Penal, se incluye dentro de los tipos penales referentes a Abandono de persona incapaz de valerse por sí misma; Abandono en institución o ante otra persona y del Incumplimiento injustificado de obligaciones alimenticias la conducta cometida en contra de las personas adultas mayores; pues si bien es cierto, se contempla en términos generales, consideramos que es necesario establecerlo de manera particular, a fin de evitar que este sector de la población tan vulnerable sea desprotegida en sus derechos.

Asimismo se está proponiendo incluir el establecimiento de medidas de protección que el Ministerio Público estime pertinentes cuando advierta que existe un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima, siendo el caso en particular de los adultos mayores.

Consideramos que era necesario hacer estas adecuaciones legislativas en aras de proteger y garantizar los derechos de las personas adultas mayores, que propicien una mejor calidad de vida para este sector de la población y evitar que sus derechos sean vulnerados.

**Tercero.-** Una vez analizada la iniciativa propuesta, estas Comisiones Unidas, advierten que en México existe un alto índice de rezago en materia de protección efectiva de las personas adultas mayores, pues como lo menciona el ponente en su exposición de motivo, de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la Encuesta Nacional sobre Discriminación, se desprende que alrededor del 30% de las personas adultas mayores están en una situación de pobreza y el 37% depende económicamente de sus hijos.

Esta situación, convierte a un amplio sector de la población adulta mayor en un grupo transversalmente vulnerable ya que no sólo confluye la pobreza y la senectud, sino que en muchos casos, la situación de calle, el pertenecer a una comunidad indígena o tener algún tipo de discapacidad limitan y/o restringen a las personas adultas mayores para ejercer efectivamente sus derechos y en muchos casos son los mismos familiares los que generan estas condiciones por acciones o bien por omisiones de cuidado.

De acuerdo con el Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia, en México el 16% de los adultos mayores sufren maltrato o abandono, un problema que a pesar de las políticas públicas nacionales y estatales continua presente y que es necesario erradicar, pues no basta con apoyos económicos y pensiones no contributivas, se necesitan además servicios de asistencia social para mujeres y hombres mayores de 60 años de edad, apoyos integrales como atenciones médicas, de enfermería, rehabilitación física, odontología, psicología, de terapia ocupacional, entre otros.

De igual forma, se necesita sancionar efectivamente a las personas que abusen, maltraten o abandonen a las personas adultas mayores, dejando de lado su obligación familiar y legal de un debido cuidado. De ahí que la iniciativa del Diputado Jaime Bueno Zertuche sea relevante y acorde con estas necesidades pues busca conceptualizar y sancionar diversas acciones que realizan los particulares en contra de la dignidad de las personas adultas mayores. Entre los principales cambios están:

* Definir el abandono como la falta de acción sistemática, permanente, consiente y deliberada o no, para atender de manera integral las necesidades de las personas adultas mayores.
* Prohibir los actos de hacinamiento o desalojo de las personas adultas mayores por parte de sus familiares.
* Sancionar penalmente las acciones de discriminación, abuso, explotación, aislamiento, violencia, abandono hacinamiento o desalojo de las personas adultas mayores o con discapacidad.

Estas propuestas legislativas constituyen desde nuestra perspectiva reformas trascendentes y relevantes que coadyuvarán a mejorar la situación que viven las personas adultas mayores más vulnerables, creando además sanciones específicas que protegen la dignidad y el derecho a una vida libre de violencia de este grupo en situación de vulnerabilidad. De ahí que estas Comisiones unidad consideran procedente tales cambios legislativos.

**Cuarto.-** Por todas estas razones y con fundamento en lo anteriormente expuesto, declaramos procedente la presente iniciativa, por lo que se expide el siguiente:

**Proyecto de Decreto**

**PRIMERO.-** Se reforma la fracción XVI del artículo 5 y la fracción IV del artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 5.- …**

**I. a la XV. …**

**XVI.** Abandono. La falta de acción **sistemática, permanente, consiente y** deliberada o no para atender de manera integral las necesidades de una persona mayor que ponga en peligro su vida o su integridad física, psíquica o moral.

**Artículo 28.- …**

**…**

**I. a la III. …**

**IV.** Evitar que alguno de sus integrantes, **realice o induzca a la realización de** cualquier acto de discriminación, abuso, explotación, aislamiento, violencia, abandono, **hacinamiento o desalojo** de la persona adulta mayor y demás actos u omisiones que pongan en riesgo su persona, bienes y derechos. **Los actos descritos en la presente fracción serán sancionados acorde a lo establecido en el Código Penal para el Estado.**

**SEGUNDO.-** Se reforma el primer párrafo del artículos 211 y se adiciona un párrafo al final, asimismo se reforma el primer párrafo del artículo 212 y el artículo 254 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 211.** (Abandono de persona incapaz de valerse por sí misma)

Se impondrá de tres meses a dos años de prisión y multa, a quien, teniendo la obligación jurídica de cuidarla, **realice o induzca a la realización de acciones discriminatorias de abuso, explotación, aislamiento, violencia, abandono, hacinamiento o desalojo de** una persona incapaz de valerse por sí misma, **incluyendo a las personas adultas mayores y/o con discapacidad,** por más tiempo del necesario para preservar o no agravar su estado de salud.

...

...

...

**Así mismo se proporcionara las medidas de protección idóneas que considere pertinentes el Ministerio Público, cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima, establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales**

**Artículo 212**. (Abandono en institución o ante otra persona)

Se impondrá de tres a seis meses de prisión, a quien abandone en una institución o ante cualquier otra persona, que no hayan aceptado el cuidado, a una persona incapaz de valerse por sí misma, **incluyendo a las personas adultas mayores y/o con discapacidad,** respecto de la cual tenga la obligación de cuidar o se encuentre legalmente a su cargo.

...

...

**Artículo 254**. (Incumplimiento injustificado de obligaciones alimenticias)

Se impondrá de tres meses a tres años de prisión, multa, suspensión de los derechos de familia y la reparación del daño a quien, a pesar de tener recursos económicos, no le proporcione en lo posible, los recursos necesarios a cualquier persona **ascendiente o descendiente**, **menores incapaces o adultos mayores,** respecto de la que tenga obligación legal de proveer a su alimentación, habitación, salud y/o educación.

**T R A N S I T O R I O**

**ÚNICO.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad y de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda (Coordinadora), Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza, Dip. María Esperanza Chapa García (Secretaria), Dip. María Eugenia Cázares Martínez, Dip. Zulmma Verenice Guerrero Cázares, Dip. Elisa Catalina Villalobos Hernández.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 22 de septiembre de 2020.

**ATENCIÓN A GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA**  **(COORDINADORA)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA**  **(SECRETARIA)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARÍA EUGENIA CÁZARES MARTÍNEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. ELISA CATALINA VILLALOBOS HERNÁNDEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto, por la que se agrega una porción normativa al artículo 375 y se modifica la fracción III del artículo 376, de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Diputado Fernando Izaguirre Valdés, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 03 del mes de junio de 2020, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa con Proyecto de Decreto, por la que se agrega una porción normativa al artículo 375 y se modifica la fracción III del artículo 376, de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Diputado Fernando Izaguirre Valdés, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa con Proyecto de Decreto, por la que se agrega una porción normativa al artículo 375 y se modifica la fracción III del artículo 376, de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Diputado Fernando Izaguirre Valdés, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

***E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S***

*“En nuestro Estado, existen familias que tienen el control del número de hijos que desean tener, pero también encontramos parejas que, por problemas relacionados a la fertilidad, deciden adoptar a un menor de edad, sabiendo de antemano, que esto conlleva una serie de requisitos que deben cumplirse cabalmente.*

*Respecto a lo anterior, se debe poner en contexto el significado de la palabra adopción, y es, un proceso legal que les permite a los menores de edad y adolescentes a formar parte una familia que cubra sus necesidades, tanto emocionales, afectivas y económicas. Debemos de entender que es el derecho del menor a formar parte de una familia, no de los adultos a adoptar.*

*La adopción tiene una base jurídica en el Código Civil Federal, en los artículos 390, 391, 392 y demás relativos de la norma referida.*

*Este procedimiento busca siempre el bien superior de la niñez, y para tal efecto, se requiere que dichos procesos se lleven a cabo con la eficiencia y eficacia por parte de las autoridades.*

*En Coahuila, por ejemplo, los adoptantes deben ser personas mayores de 25 años en pleno ejercicio de sus derechos y tener más de 17 años de diferencia de la o el adoptado; contar con medios bastantes para proveer a la subsistencia, la educación y el cuidado de la persona que trata de adoptar; ser aptas y adecuadas para adoptar; y que no se encuentran inscritos en el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos. Este trámite se debe realizar de forma personal, por tanto, las personas interesadas en adoptar, deberán presentarse en las instalaciones de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), donde se les proporcionará una solicitud para la inscripción a la lista de espera de adopciones, en el que se piden datos generales a los solicitantes como son domicilio; Estado civil; los datos laborales y los motivos que indujeron a tomar la decisión de adoptar.*

*En nuestro país existe una tendencia negativa en cuanto al tema de adopción, y es la lentitud de su procedimiento. Para darnos una idea de lo que aquí se expone, daremos a conocer algunos ejemplos de lo que acontece en algunas entidades de México.*

*Para que se tenga permitido adoptar en Colima, es indispensable que la pareja interesada cumpla con distintos requisitos, entre ellos ser aptos psicológicamente para atender un nuevo integrante en la familia; no consumir drogas; y tener una forma honesta de vivir. Estos aspectos deben ser evaluados por especialistas en la materia y validados por un juez, explicó el abogado Abraham Méndez Palomares. "Tiene que presentarse la demanda firmada por los padres (adoptantes), tienen que venir y ratificar el documento, en lo sucesivo, se designa un tutor provisional y en ese intercambio se levanta el acta donde se ratifica la adopción. Tiene que estar presente el ministerio público que es el defensor de los derechos del menor, y con su presencia se convalida la adopción, siendo este el sistema actual".*

*El proceso de adopción puede ser difícil y lento y una vez que se otorga hasta que el menor de edad sea adulto debe existir supervisión del estado a través del DIF, trabajo que no se hizo hace cuatro o cinco años con las adopciones que se otorgaron en Colima a extranjeros y por eso se suspendieron. 2*

*Por su parte, en Mazatlán Sinaloa, hay más de 60 niños entre los 0 y 12 años de edad, que están en espera de una segunda oportunidad para reintegrarse a una familia. Las circunstancias que mantienen a los menores en los albergues son los requerimientos, los procesos y la falta de cultura que rodea a la adopción.3*

*La niñez es una joya que debemos cuidar y proteger por encima de cualquier interés, y es momento de hacer valer lo establecido en nuestras leyes, convenios y tratados internacionales en materia de derechos de las niñas, niños y adolescentes. Por ello, en el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, trabajamos en reformas y políticas públicas que beneficien a la ciudadanía, esta vez, enfocadas a que los procesos de adopción sean eficientes y eficaces, con la finalidad de que los menores de edad se integren a un ambiente familiar sano que permita su óptimo desarrollo físico y mental.”*

**TERCERO.-** Los integrantes de esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, nos abocamos al estudio de la iniciativa que agrega una porción normativa al artículo 375 y modifica la fracción III del artículo 376, de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza, en materia de adopciones.

El Interés Superior de la Niñez es un principio jurídico internacional, que comprende un conjunto de acciones y procesos enfocados a garantizar una vida digna a niñas, niños y adolescentes en el mundo.

La Convención sobre los Derechos del Niño es el tratado internacional adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, y en él se reconoce a las personas menores de 18 años como sujetos de pleno derecho, este tratado, ha sido el más ampliamente ratificado por los países del mundo, por lo cual los estados parte, incluyendo México, están obligados a respetarlos y hacerlos cumplir sin ningún tipo de discriminación, en dicho tratado, se definieron los derechos humanos básicos que deben disfrutar los niños, las niñas y adolescentes y se establecieron cuatro principios fundamentales de la Convención, que son los siguientes:

* *La no discriminación.*
* *El interés superior del niño.*
* *El derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo.*
* *La participación infantil.*

México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990, sin embargo, fue hasta 2011 que incorporó el principio del interés superior de la niñez en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al especificar lo siguiente:

*“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.”*

Asimismo, cabe señalar lo dispuesto por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en el artículo 2:

*“Para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades realizarán las acciones y tomarán medidas, de conformidad con los principios establecidos en la presente Ley. Para tal efecto, deberán:*

***I.*** *Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y programas de gobierno;*

***II.*** *Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, y*

***III.*** *Establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de la implementación de políticas, programas gubernamentales, legislación y compromisos derivados de tratados internacionales en la materia.*

*El**interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se atenderá a lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales de que México forma parte.*

*Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales.*

*Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, deberán incorporar en sus proyectos de presupuesto la asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la presente Ley.*

*La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los Congresos locales y la Legislatura de la Ciudad de México, establecerán en sus respectivos presupuestos, los recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la presente Ley.*”

Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversas jurisprudencias relativas a ese principio, en los que se enfatizan que los tribunales deberán atender al interés superior de la niñez y adolescencia, y que éste demanda un estricto escrutinio de las particularidades del caso. Asimismo, señalan que debe considerarse la opinión de las niñas, niños y adolescentes en cualquier decisión que les afecte, y se acentúa la obligación del juez(a) de examinar las circunstancias específicas de cada asunto para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa especialmente para la niña, niño o adolescente.

En la Constitución Política de nuestro estado, se establece en el artículo 8° lo siguiente:

*“En el Estado de Coahuila de Zaragoza la protección y garantía de los derechos humanos reconocidos a favor de niños y niñas, estará a cargo de una Procuraduría y del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas, que establecerá los mecanismos de coordinación y participación de los poderes públicos del estado y de los municipios, de los organismos públicos autónomos y la sociedad civil, en los términos que determine la ley, a fin de garantizar el interés superior de la niñez.*”

Ahora bien, la iniciativa objeto del presente dictamen, encuentra motivación en la finalidad de que procesos de adopción en nuestro estado, sean más eficientes y eficaces, lo que pueda permitir *que los menores de edad se integren a un ambiente familiar que les permita un óptimo desarrollo físico y mental.*

Además queremos señalar, que el “interés superior” es también un principio rector que debe regir la adopción, ya que se señala en el artículo 21 de la Convención sobre los Derechos de la Niñez que los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de que el interés superior del niño sea la consideración primordial.

En ese sentido, encontramos que el artículo 173 también de nuestra constitución local, menciona que los menores tienen derecho a una vida sana, a la salud, a la alimentación, a la educación, a la cultura, a la recreación, a la preparación para el trabajo **y a llevar una vida digna en el seno de la familia**; así como a todos los derechos que la Constitución General, los Tratados Internacionales suscritos por México y los previstos en esta Constitución les confieren. El Estado, los municipios, los poderes legislativo y judicial y demás autoridades, **realizarán todas las acciones legislativas, reglamentarias, administrativas y judiciales para garantizar el uso y goce de estos derechos a las niñas y niños en Coahuila, sin menoscabo de lo dispuesto por el Artículo 8º de esta Constitución.**

Es por ello, que coincidimos con el promovente de la iniciativa, en que se establezca en la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza que todo procedimiento de adopción, deberá ser llevado a cabo de manera eficaz y eficiente, conforme a lo establecido en los convenios y tratados internacionales y en la misma ley, además de que se instituya que las autoridades pertinentes determinen en base a estudios que se les realicen si las personas son aptas y adecuadas para adoptar.

Cabe resaltar, que se realizó una modificación en lo concerniente a la reforma al artículo 376, a fin de que quede armonizado con el proyecto de ley de crea la Ley de Adopciones y Acogimiento Familiar para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en la cual se menciona que los estudios que las autoridades competentes realicen para saber si las personas son idóneas para adoptar, sean los correspondientes a estudios socioeconómicos, médicos y psicológicos.

En virtud de lo antes expuesto, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ÚNICO.- SE AGREGA UNA PORCIÓN NORMATIVA AL ARTÍCULO 375 Y SE MODIFICA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 376 DE** **LEY PARA LA FAMILIA DE COAHUILA DE ZARAGOZA PARA QUEDAR COMO SIGUE:**

**Artículo 375.** La adopción constituye, de una manera irrevocable, una relación de filiación entre adoptante y adoptado o adoptada, al mismo tiempo que establece un parentesco equiparable al consanguíneo entre la o el adoptado y la familia de la o el adoptante y entre ésta y éste y los descendientes del adoptado. Todo procedimiento de adopción, deberá ser llevado a cabo de manera eficaz y eficiente, conforme a lo establecido en los convenios y tratados internacionales y en la presente ley.

**Artículo 376. …**

De la **I.** al **II.** …

**III.** Que son personas aptas y adecuadas para adoptar, de acuerdo a lo que las autoridades competentes determinen en base a estudios socioeconómicos, médicos y psicológicos que se les realicen.

**IV.** …

**TRANSITORIO**

**ÚNICO. -** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Así lo acuerdan las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda, Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza. En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 14 de septiembre de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**DICTAMEN** de la Comisión de Finanzas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con relación a la Iniciativa de Decreto planteada por el Ejecutivo del Estado para que se autorice al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, para desincorporar y enajenar a título gratuito, un lote de terreno con una superficie de 165-36-48.66 hectáreas, ubicado en el municipio de Múzquiz, Coahuila de Zaragoza, a favor del Gobierno Federal, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, con objeto de llevar a cabo la construcción de las instalaciones del Destacamento Militar en la Región Carbonífera del Estado.

**RESULTANDO**

**ÚNICO.** Que, en sesión celebrada por el Pleno del Congreso del Estado, el día 15 del mes de septiembre del año 2020, se dio cuenta la mencionada Iniciativa y turnada a esta Comisión de Finanzas, para su estudio y dictamen.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.**  Que estaComisión de Finanzas, con fundamento en los artículos 91, 116, 117 y demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.** Que la iniciativa se sustentó en la siguiente exposición de motivos.

**TERCERO.**  Uno de los objetivos primordiales de esta Administración es concertar la realización de acciones previstas en el **“PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2017-2023”,** y sus Programas, con las diferentes instancias de gobierno sea federal, estatal o municipal, lo que favorecerá el desarrollo social, cultural y económico del Estado de Coahuila de Zaragoza.

En virtud de lo anterior, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, ratifica su intención de coadyuvar con la Federación en el cumplimiento de sus objetivos, entre los que se encuentran la preservación de la seguridad y paz nacional, la salvaguarda de los derechos e integridad física de las personas, preservar las libertades individuales, el orden público, en virtud de lo cual, solicita autorización para continuar con la donación de un terreno con una superficie de 165-36-48.66 hectáreas (ciento sesenta y cinco hectáreas, treinta y seis áreas, cuarenta y ocho punto sesenta y seis centiáreas), propiedad del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, ubicado en el municipio de Múzquiz, Coahuila de Zaragoza, para que la Secretaría de la Defensa Nacional, construya las instalaciones del Destacamento Militar en la Región Carbonífera de la Entidad.

En efecto, el Gobierno del Estado es propietario y poseedor, con pleno dominio, de un inmueble de superficie de 165-36-48.66 hectáreas (ciento sesenta y cinco hectáreas, treinta y seis áreas, cuarenta y ocho punto sesenta y seis centiáreas), ubicado en la Fracción B que se segrega del predio denominado “La Florida” en el municipio de Múzquiz, Coahuila de Zaragoza, amparando su titularidad con la Escritura Pública N° 240 de fecha 14 (catorce) del mes de julio del año 2020 (dos mil veinte), inscrita en la Oficina de Sabinas del Registro Público el día 13 (trece) del mes de agosto del año 2020 (dos mil veinte) bajo la Partida 62963, Libro 630, Sec. I.

**CUARTO.** Esta Comisión de Finanzas encontró que se han cubierto los requisitos necesarios para la enajenación de la superficie en mención, logrando así la posibilidad de coadyuvar con la Federación en el cumplimiento de sus objetivos, entre los que se encuentran la seguridad y salvaguardar los derechos e integridad física de los habitantes de esa región, el cual se otorgará seguridad y beneficio social.

Por los motivos que se exponen en los considerandos que anteceden, se estima que se reúnen los elementos de juicio necesario para elaborar el presente dictamen y una vez cumplido lo dispuesto por los Artículos 82, 83, 88 fracción III, 91, 116, 117 y 119 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, las integrantes de la Comisión de Finanzas sometemos a consideración de este H. Congreso del Estado, para su estudio, discusión y en su caso, aprobación, el siguiente:

**DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL GOBIERNO DEL ESTADO PARA QUE DESINCORPORE UN LOTE DE TERRENO CON UNA SUPERFICIE DE 165-36-48.66 HECTÁREAS (CIENTO SESENTA Y CINCO HECTÁREAS, TREINTA Y SEIS ÁREAS, CUARENTA Y OCHO PUNTO SESENTA Y SEIS CENTIÁREAS), UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MÚZQUIZ, COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA QUE LO ENAJENE A TÍTULO GRATUITO, A FAVOR DEL GOBIERNO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL.**

**ARTÍCULO PRIMERO. -** Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, para que desincorpore, un lote de terreno con una superficie de 165-36-48.66 Hectáreas (ciento sesenta y cinco hectáreas, treinta y seis áreas, cuarenta y ocho punto sesenta y seis centiáreas), ubicado en el municipio de Múzquiz, Coahuila de Zaragoza, para que lo enajene a título gratuito, a favor de la Secretaría de la Defensa Nacional.

**ARTÍCULO SEGUNDO. -** Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, para que enajene a título gratuito un lote de terreno con una superficie de 165-36-48.66 Hectáreas (ciento sesenta y cinco hectáreas, treinta y seis áreas, cuarenta y ocho punto sesenta y seis centiáreas), ubicado en el municipio de Múzquiz, Coahuila de Zaragoza, de acuerdo al Cuadro de Construcción, que se reproduce, a continuación:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LADO** | | **RUMBO** | **DISTANCIA** | **V** | **COORDENADAS** | |
| **EST.** | **PV** | **Y** | **X** |
|  |  |  |  | 1 | 3,172,026.0000 | 768,454.0000 |
| 1 | 2 | S 42º47’45.88” W | 2,353.578 | 2 | 3,170,299.0000 | 767,855.0000 |
| 2 | 3 | N 68º34’55.00” W | 815.357 | 3 | 3,170,596.7443 | 766,095.9514 |
| 3 | 4 | N 42º47’45.88” E | 2,000.00 | 4 | 3,172,064.2970 | 767,454.7336 |
| 4 | 1 | S 87º48’18.75” E | 1,000.00 | 1 | 3,172,026.0000 | 768,454.0000 |
| **SUPERFICIE: 165-36-48.66 HECTÁREAS** | | | | | | |

**ARTÍCULO TERCERO. -** La donación que en el presente Decreto se autoriza, se realizará a favor del Gobierno Federal, a través de la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario Federal, dependiente del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, con el fin de que por conducto de la Secretaría de la Defensa Nacional se construyan las instalaciones del Destacamento Militar en la Región Carbonífera del Estado.

**ARTÍCULO CUARTO. -** Se faculta al Titular del Ejecutivo del Estado para que, por sí, o por medio del Representante Legal que designe, otorgue a favor del Gobierno Federal la Escritura Pública de Donación correspondiente a la enajenación gratuita, que con el presente Decreto se autoriza.

**ARTÍCULO QUINTO.-** Los gastos que se generen por el proceso de Escrituración y Registro de la operación autorizada en este Decreto, serán cubiertos totalmente por el Gobierno Federal.

**ARTÍCULO SEXTO.-** El presente Decreto deberá insertarse íntegramente en el Título de Propiedad respectivo.

**ARTÍCULO SÉPTIMO.-** En el supuesto de que no se formalice la donación que en el presente Decreto se autoriza dentro de un término de 24 (veinticuatro) meses, contados a partir de la fecha de publicación del presente Decreto o el donatario no cumpla con la construcción de las instalaciones para el Destacamento Militar de la Región Carbonífera del Estado, quedarán sin efecto las disposiciones del mismo, requiriéndose, en su caso, de nueva autorización legislativa para proceder a la enajenación gratuita del inmueble a que se hace referencia en el Artículo Primero de este Documento y se revertirá el bien al Estado.

**T R A N S I T O R I O S**

**PRIMERO.** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO.** Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Congreso del Estado de Coahuila, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 17 de septiembre de 2020.

**POR LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA LXI LEGISLATURA**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** |
| Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga.  Coordinadora | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Gabriela Zapopan Garza Galván  Secretaria | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Verónica Boreque Martínez González. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Rosa Nilda González Noriega. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Zulmma Verenice Guerrero Cázares | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Elisa Catalina Villalobos Hernández | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |

**DICTAMEN** de la Comisión de Finanzas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con relación a la Iniciativa de Decreto enviada por el Presidente Municipal de Torreón, Coahuila de Zaragoza, para que se autorice a desincorporar del dominio público municipal, una fracción del lote 1 de la manzana 1 del Fraccionamiento “Sol de Oriente II segunda etapa” de esa ciudad, una superficie de 29.17 m2., con el fin de enajenarlo a título oneroso a favor del C. J. Reyes Alvarado Quiñones, con objeto de llevar a cabo la ampliación de su vivienda.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que, en sesión celebrada por el Pleno del Congreso, de fecha 17 del mes de junio del año 2020 ese dio cuenta la mencionada Iniciativa y turnada a esta Comisión de Finanzas, para su estudio y dictamen.

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO.** Que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 102, fracción I, numeral 10 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, los Ayuntamientos están facultados para acordar el destino o uso de los bienes muebles o inmuebles y de toda propiedad municipal.

**SEGUNDO.** Que de conformidad con el Artículo 304 y el segundo párrafo del Artículo 305 del Código Financiero para los Municipios del Estado, dispone que los bienes del dominio público sólo podrán ser enajenados mediante el acuerdo de autorización de las dos terceras partes de los miembros del ayuntamiento, previo decreto de desincorporación dictado por el Congreso del Estado y conforme a las disposiciones aplicables, así como el Artículo 302que dispone *” Ninguna enajenación, ni concesión de uso o usufructo de bienes inmuebles del Municipio, podrán hacerse a los miembros y servidores públicos del ayuntamiento, ni a sus parientes en línea recta sin limitación de grado, colaterales hasta el cuarto grado y afines hasta el segundo”.*

**TERCERO.** Que, entre los casos en que procede la autorización para enajenar bienes inmuebles del dominio público municipal, se señala el correspondiente a la disposición de los mismos, para destinarlos al fomento de la vivienda, regularización de la tenencia de la tierra o cualquiera otra necesidad de interés público.

**CUARTO.** Que el Ayuntamiento del Municipio de Torreón, según consta en acta de Cabildo, de fecha 30 de enero de 2020, aprobó por unanimidad de los presentes del Cabildo, desincorporar del dominio público municipal, una fracción del lote 1 de la manzana 1 del Fraccionamiento “Sol de Oriente II segunda etapa” de esa ciudad, una superficie de 29.17 m2., con el fin de enajenarlo a título oneroso a favor del C. J. Reyes Alvarado Quiñones.

El inmueble antes mencionado se identifica como fracción norte del lote 1 de la manzana 1 del Fraccionamiento Sol de Oriente II segunda etapa, de esa ciudad, una superficie de 29.17 m2., y cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Noreste: mide 19.02 metros y colinda con Calzada Obsidiana.

Al Sureste: mide 3.87 metros y colinda con Lote 1 Manzana 1 del Fraccionamiento Sol de Oriente II etapa.

Al Sureste: mide 16.59 metros y colinda con límite de propiedad y Parcela 37 Fracción 2, Zona 1 del Ejido La Joya y Lote 2 Manzana 1 del Fraccionamiento Quintas del Sol.

**QUINTO.** La autorización de esta operación es exclusivamente con objeto de llevar a cabo la ampliación de su vivienda. En caso de darle un uso distinto a lo estipulado, por ese sólo hecho se rescindirá el contrato revirtiéndose el precio junto con sus accesorios al patrimonio municipal, sin ninguna responsabilidad a cargo del R. Ayuntamiento.

**SEXTO.** Esta Comisión de Finanzas encontró que el Municipio de Torreón, ha cubierto los requisitos necesarios para la procedencia de la desincorporación de la superficie en mención, para llevar a cabo la ampliación de la vivienda.

Por los motivos que se exponen en los considerandos que anteceden, se estima que se reúnen los elementos de juicio necesario para elaborar el presente dictamen y una vez cumplido lo dispuesto por los Artículos 82, 83, 88 fracción III, 91, 116, 117 y 119 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, los integrantes de la Comisión de Finanzas sometemos a consideración de este H. Congreso del Estado, para su estudio, discusión y en su caso, aprobación, el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO PRIMERO.** Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreón, Coahuila de Zaragoza, a desincorporar del dominio público municipal, una fracción del lote 1 de la manzana 1 del Fraccionamiento “Sol de Oriente II segunda etapa” de esa ciudad, una superficie de 29.17 m2., con el fin de enajenarlo a título oneroso a favor del C. J. Reyes Alvarado Quiñones.

El inmueble antes mencionado se identifica como fracción norte del lote 1 de la manzana 1 del Fraccionamiento Sol de Oriente II segunda etapa, de esa ciudad, una superficie de 29.17 m2., y cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Noreste: mide 19.02 metros y colinda con Calzada Obsidiana.

Al Sureste: mide 3.87 metros y colinda con Lote 1 Manzana 1 del Fraccionamiento Sol de Oriente II etapa.

Al Sureste: mide 16.59 metros y colinda con límite de propiedad y Parcela 37 Fracción 2, Zona 1 del Ejido La Joya y Lote 2 Manzana 1 del Fraccionamiento Quintas del Sol.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** La autorización de esta operación es exclusivamente con objeto de llevar a cabo la ampliación de su vivienda. En caso de darle un uso distinto a lo estipulado, por ese sólo hecho se rescindirá el contrato revirtiéndose el precio junto con sus accesorios al patrimonio municipal, sin ninguna responsabilidad a cargo del R. Ayuntamiento.

**ARTÍCULO TERCERO.** Para que el Municipio pueda disponer de este bien inmueble, y cumplir con lo que se dispone en el Artículo que antecede, el Ayuntamiento, conforme a lo que señalan los Artículos 302, 304 y 305 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila, acordará las formalidades que deberán satisfacerse y establecerá un plazo cierto y determinado para su formalización.

Así mismo, dentro de los cinco días hábiles siguientes de haber dictado la resolución correspondiente, deberá enviar ésta al Congreso del Estado, para que se resuelva sobre la validez o invalidez del acuerdo, por lo que el ayuntamiento no podrá formalizar la operación hasta en tanto este Congreso declare la validez de la misma y quede firme dicha resolución.

**TRANSITORIOS**

**PRIMERO.** El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO.** Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Congreso del Estado de Coahuila, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 17 de septiembre de 2020.

**POR LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA LXI LEGISLATURA**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** |
| Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga.  Coordinadora | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Gabriela Zapopan Garza Galván  Secretaria | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Verónica Boreque Martínez González. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Rosa Nilda González Noriega. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Zulmma Verenice Guerrero Cázares | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Elisa Catalina Villalobos Hernández | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |

**DICTAMEN** de la Comisión de Finanzas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con relación a la Iniciativa de Decreto enviada por el Presidente Municipal de Torreón, Coahuila de Zaragoza, para que se autorice a desincorporar del dominio público municipal, una fracción del lote 1 de la manzana 1 del Fraccionamiento “Sol de Oriente II segunda etapa” de esa ciudad, una superficie de 3,391.66 m2., con el fin de enajenarlo a título gratuito a favor de la Asociación Civil “Casa Hogar Abrázame” A.C., con objeto de llevar a cabo la construcción y funcionamiento de una Casa Hogar.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que, en sesión celebrada por el Pleno del Congreso, de fecha 23 del mes de octubre del año 2019 ese dio cuenta la mencionada Iniciativa y turnada a esta Comisión de Finanzas, para su estudio y dictamen.

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO.** Que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 102, fracción I, numeral 10 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, los Ayuntamientos están facultados para acordar el destino o uso de los bienes muebles o inmuebles y de toda propiedad municipal.

**SEGUNDO.** Que de conformidad con el Artículo 304 y el segundo párrafo del Artículo 305 del Código Financiero para los Municipios del Estado, dispone que los bienes del dominio público sólo podrán ser enajenados mediante el acuerdo de autorización de las dos terceras partes de los miembros del ayuntamiento, previo decreto de desincorporación dictado por el Congreso del Estado y conforme a las disposiciones aplicables, así como el Artículo 302que dispone *”Ninguna enajenación, ni concesión de uso o usufructo de bienes inmuebles del Municipio, podrán hacerse a los miembros y servidores públicos del ayuntamiento, ni a sus parientes en línea recta sin limitación de grado, colaterales hasta el cuarto grado y afines hasta el segundo”.*

**TERCERO.** Que, entre los casos en que procede la autorización para enajenar bienes inmuebles del dominio público municipal, se señala el correspondiente a la disposición de los mismos, para destinarlos al fomento de la vivienda, regularización de la tenencia de la tierra o cualquiera otra necesidad de interés público.

**CUARTO.** Que el Ayuntamiento del Municipio de Torreón, según consta en acta de Cabildo, de fecha 26 de junio de 2020, aprobó por unanimidad de los presentes del Cabildo, desincorporar del dominio público municipal, una fracción del lote 1 de la manzana 1 del Fraccionamiento “Sol de Oriente II segunda etapa” de esa ciudad, una superficie de 3,391.66 m2., con el fin de enajenarlo a título gratuito a favor de la Asociación Civil “Casa Hogar Abrázame” A.C.

El inmueble antes mencionado se identifica como fracción sur del lote 1 de la manzana 1 del Fraccionamiento Sol de Oriente II segunda etapa, de esa ciudad, una superficie de 3,391.66 m2., y cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Noreste: mide en línea curva en 128.44 metros y colinda con Calzada Obsidiana.

Al Sureste: mide en línea curva en 6.73 metros y colinda con Avenida Juárez y Calzada Obsidiana.

Al Sur: mide 45.58 metros y colinda con Avenida Juárez.

Al Suroeste: mide 117.40 metros y colinda límite de propiedad (hoy fracc. Veredas de la Joya)

Al Noroeste: mide 3.87 metros y colinda fracción norte del mismo predio.

Dicho inmueble se encuentra registrado con una mayor extensión a favor del R. Ayuntamiento del Municipio de Torreón, en las oficinas del Registro Público de la ciudad de Torreón del Estado de Coahuila de Zaragoza, bajo el Folio Real N°6621.

**QUINTO.** La autorización de esta operación es exclusivamente con objeto de llevar a cabo la construcción y funcionamiento de una Casa Hogar. En caso de que a dicho inmueble se le dé un uso distinto a lo estipulado, por ese solo hecho automáticamente se dará por rescindida la enajenación y el predio será reintegrado al Municipio.

**SEXTO.** Esta Comisión de Finanzas encontró que el Municipio de Torreón, ha cubierto los requisitos necesarios para la procedencia de la desincorporación de la superficie en mención, para llevar a cabo la construcción y funcionamiento de una casa hogar con la prestación de la atención a la infancia y juventud mexicana mediante actividades de albergue, alimentación, educación y formación ética y de valores a niños y niñas que por sus condiciones y circunstancias viven o trabajan en la calle o bien habitan en un ambiente no apto para su desarrollo integral, el cual otorgará un beneficio social a los habitantes de ese sector.

Por los motivos que se exponen en los considerandos que anteceden, se estima que se reúnen los elementos de juicio necesario para elaborar el presente dictamen y una vez cumplido lo dispuesto por los Artículos 82, 83, 88 fracción III, 91, 116, 117 y 119 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, los integrantes de la Comisión de Finanzas sometemos a consideración de este H. Congreso del Estado, para su estudio, discusión y en su caso, aprobación, el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO PRIMERO.** Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreón, Coahuila de Zaragoza, a desincorporar del dominio público municipal, una fracción del lote 1 de la manzana 1 del Fraccionamiento “Sol de Oriente II segunda etapa” de esa ciudad, una superficie de 3,391.66 m2., con el fin de enajenarlo a título gratuito a favor de la Asociación Civil “Casa Hogar Abrázame” A.C.

El inmueble antes mencionado se identifica como fracción sur del lote 1 de la manzana 1 del Fraccionamiento Sol de Oriente II segunda etapa, de esa ciudad, una superficie de 3,391.66 m2., y cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Noreste: mide en línea curva en 128.44 metros y colinda con Calzada Obsidiana.

Al Sureste: mide en línea curva en 6.73 metros y colinda con Avenida Juárez y Calzada Obsidiana.

Al Sur: mide 45.58 metros y colinda con Avenida Juárez.

Al Suroeste: mide 117.40 metros y colinda límite de propiedad (hoy fracc. Veredas de la Joya)

Al Noroeste: mide 3.87 metros y colinda fracción norte del mismo predio.

Dicho inmueble se encuentra registrado con una mayor extensión a favor del R. Ayuntamiento del Municipio de Torreón, en las oficinas del Registro Público de la ciudad de Torreón del Estado de Coahuila de Zaragoza, bajo el Folio Real N°6621.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** La autorización de esta operación es exclusivamente con objeto de llevar a cabo la construcción y funcionamiento de una Casa Hogar. En caso de que a dicho inmueble se le dé un uso distinto a lo estipulado, por ese solo hecho automáticamente se dará por rescindida la enajenación y el predio será reintegrado al Municipio. El donatario tendrá un plazo de 24 (veinticuatro) meses contados a partir de la publicación de este Decreto, para que formalice la escritura en la que deberá expresar en su clausulado esta condición, y concluya la construcción de la Casa Hogar objeto de la donación.

Transcurridos los 24 (veinticuatro) señalados en el párrafo anterior sin que la construcción haya concluido, el donatario podrá solicitar de forma justificada, por única vez, al Municipio la ampliación hasta por otros 12 (doce) meses, dando vista de dicha solicitud al Congreso del Estado para su consideración, discusión, y en su caso aprobación.

**ARTÍCULO TERCERO.** Para que el Municipio pueda disponer de este bien inmueble, y cumplir con lo que se dispone en el Artículo que antecede, el Ayuntamiento, conforme a lo que señalan los Artículos 302, 304 y 305 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila, acordará las formalidades que deberán satisfacerse y establecerá un plazo cierto y determinado para su formalización.

Así mismo, dentro de los cinco días hábiles siguientes de haber dictado la resolución correspondiente, deberá enviar ésta al Congreso del Estado, para que se resuelva sobre la validez o invalidez del acuerdo, por lo que el ayuntamiento no podrá formalizar la operación hasta en tanto este Congreso declare la validez de la misma y quede firme dicha resolución.

**TRANSITORIOS**

**PRIMERO.** El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO.** Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Congreso del Estado de Coahuila, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 17 de septiembre de 2020.

**POR LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA LXI LEGISLATURA**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** |
| Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga.  Coordinadora | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Gabriela Zapopan Garza Galván  Secretaria | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Verónica Boreque Martínez González. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Rosa Nilda González Noriega. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Zulmma Verenice Guerrero Cázares | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Elisa Catalina Villalobos Hernández | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |

**DICTAMEN** de la Comisión de Finanzas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con relación a una Iniciativa de Decreto enviada por el Presidente Municipal de Torreón, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual solicita la validación de un acuerdo aprobado por el Ayuntamiento, para enajenar a título oneroso, un inmueble con una superficie de 200.00 M2., ubicado en la colonia “José de las Fuentes Rodríguez” de esa ciudad, a favor de la C. Juana Irene de la Rosa García, con objeto de llevar a cabo la ampliación de su casa habitación y regularizar la tenencia de la tierra, el cual se desincorporo con Decreto número 613 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 26 de junio de 2020.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que, en sesión celebrada por el Pleno del Congreso, de fecha 14 del mes de agosto de año 2020, se dio cuenta la mencionada Iniciativa y turnada a esta Comisión de Finanzas, para su estudio y dictamen.

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO.** Que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 102, fracción I, inciso 10, del Código Municipal, los Ayuntamientos están facultados para acordar el destino o uso de los bienes muebles o inmuebles y de toda propiedad municipal.

**SEGUNDO.** Que, en cumplimiento con lo que señalan los Artículos 302 y 305 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila, el Ayuntamiento según consta en acta de Cabildo de fecha 17 de julio de 2020, se aprobó por unanimidad de los presentes del Cabildo, la validación de un acuerdo aprobado por el Ayuntamiento, para enajenar a título oneroso, un inmueble con una superficie de 200.00 M2., ubicado en la colonia “José de las Fuentes Rodríguez” de esa ciudad, a favor de la C. Juana Irene de la Rosa García, el cual se desincorporo con Decreto número 613 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 26 de junio de 2020.

El inmueble antes mencionado se identifica como área vial que forma parte de la calle Once de la colonia José de las Fuentes Rodríguez, de esa ciudad, con una superficie de 200.00 M2., y cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Norte: mide 10.00 metros y colinda con Ejido La Joya.

Al Sur: mide 10.00 metros y colinda con Avenida Presidente Carranza.

Al Oriente: mide 20.00 metros y colinda con Lotes 7 y 8 de la manzana 24.

Al Poniente: mide 20.00 metros y colinda con Lote 1 de la manzana 22 (propiedad de la solicitante).

**TERCERO.** La autorización de esta operación es exclusivamente con objeto de llevar a cabo la ampliación de su casa habitación y regularizar la tenencia de la tierra. En caso de darle un uso distinto al estipulado, por ese solo hecho se rescindirá el contrato y se revertirá el predio junto con sus accesorios al patrimonio municipal, sin ninguna responsabilidad a cargo del R. Ayuntamiento de indemnizar al solicitante.

**CUARTO.** Esta Comisión de Finanzas encontró que el Municipio de Torreón, ha cubierto los requisitos necesarios para la procedencia de la enajenación de la superficie en mención, para dar certeza jurídica al predio y regularizar la tenencia de la tierra.

Por los motivos que se exponen en los considerandos que anteceden, se estima que se reúnen los elementos de juicio necesario para elaborar el presente dictamen y una vez cumplido lo dispuesto por los Artículos 82, 83, 88 fracción III, 91, 116, 117 y 119 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, los integrantes de la Comisión de Finanzas sometemos a consideración de este H. Congreso del Estado, para su estudio, discusión y en su caso, aprobación, el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO PRIMERO.** Se valida el acuerdo aprobado por el R. Ayuntamiento de Torreón, Coahuila de Zaragoza, para enajenar a título oneroso, un inmueble con una superficie de 200.00 M2., ubicado en la colonia “José de las Fuentes Rodríguez” de esa ciudad, a favor de la C. Juana Irene de la Rosa García, el cual se desincorporo con Decreto número 613 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 26 de junio de 2020.

El inmueble antes mencionado se identifica como área vial que forma parte de la calle Once de la colonia José de las Fuentes Rodríguez, de esa ciudad, con una superficie de 200.00 M2., y cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Norte: mide 10.00 metros y colinda con Ejido La Joya.

Al Sur: mide 10.00 metros y colinda con Avenida Presidente Carranza.

Al Oriente: mide 20.00 metros y colinda con Lotes 7 y 8 de la manzana 24.

Al Poniente: mide 20.00 metros y colinda con Lote 1 de la manzana 22 (propiedad de la solicitante).

**ARTÍCULO SEGUNDO.** La autorización de esta operación es exclusivamente con objeto de llevar a cabo la ampliación de su casa habitación y regularizar la tenencia de la tierra. En caso de darle un uso distinto al estipulado, por ese solo hecho se rescindirá el contrato y se revertirá el predio junto con sus accesorios al patrimonio municipal, sin ninguna responsabilidad a cargo del R. Ayuntamiento de indemnizar al solicitante.

**ARTÍCULO TERCERO.** El Ayuntamiento del Municipio de Torreón, por conducto de su Presidente Municipal o de su Representante legal acreditado, deberá formalizar la operación que se autoriza y proceder a la escrituración correspondiente.

**ARTÍCULO CUARTO.** En el supuesto de que no se formalice la enajenación que se autoriza, al término de la Administración Municipal actual (2019-2021), se requerirá de una nueva autorización legislativa para ampliar el plazo, a fin de que se pueda continuar o concluir la formalización de las operaciones realizadas con la enajenación del inmueble a que se refiere el artículo primero de este Decreto.

**ARTÍCULO QUINTO.** Los gastos de escrituración y registro que se originen de la operación que mediante este decreto se valida, serán por cuenta del beneficiario.

**ARTÍCULO SEXTO.** El presente decreto deberá insertarse en la escritura correspondiente.

**TRANSITORIOS**

**ARTÍCULO PRIMERO.** El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Congreso del Estado de Coahuila, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 17 de septiembre de 2020.

**POR LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA LXI LEGISLATURA**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** |
| Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga.  Coordinadora | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Gabriela Zapopan Garza Galván  Secretaria | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Verónica Boreque Martínez González. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Rosa Nilda González Noriega. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Zulmma Verenice Guerrero Cázares | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Elisa Catalina Villalobos Hernández | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |

**DICTAMEN** de la Comisión de Finanzas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con relación a una Iniciativa de Decreto enviada por el Presidente Municipal de Torreón, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual solicita la validación de un acuerdo aprobado por el Ayuntamiento, para enajenar a título oneroso, un inmueble con una superficie de 72.74 M2., ubicado en la colonia “Carolinas” de esa ciudad, a favor del C. Héctor Herrera Montelongo, con objeto de llevar a cabo la regularización de la tenencia de la tierra, el cual se desincorporo con Decreto número 539 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 25 de febrero de 2020.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que, en sesión celebrada por el Pleno del Congreso, de fecha 14 del mes de agosto de año 2020, se dio cuenta la mencionada Iniciativa y turnada a esta Comisión de Finanzas, para su estudio y dictamen.

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO.** Que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 102, fracción I, inciso 10, del Código Municipal, los Ayuntamientos están facultados para acordar el destino o uso de los bienes muebles o inmuebles y de toda propiedad municipal.

**SEGUNDO.** Que, en cumplimiento con lo que señalan los Artículos 302 y 305 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila, el Ayuntamiento según consta en acta de Cabildo de fecha 05 de marzo de 2020, se aprobó por unanimidad de los presentes del Cabildo, la validación de un acuerdo aprobado por el Ayuntamiento, para enajenar a título oneroso, un inmueble con una superficie de 72.74 M2., ubicado en la colonia “Carolinas” de esa ciudad, a favor del C. Héctor Herrera Montelongo, el cual se desincorporo con Decreto número 539 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 25 de febrero de 2020.

El inmueble antes mencionado se identifica en área vial de terreno de la Calzada Xochimilco, de la colonia “Carolinas” de esa ciudad, con una superficie de 72.74 M2., y cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Noreste: mide 13.52 metros y colinda con Lote 23, Manzana “H” SMZ.XI

Al Suroeste: mide 13.52 metros y colinda con Calzada Xochimilco.

Al Sureste: mide 5.38 metros y colinda con Calle Aztecas.

Al Noroeste: mide 5.38 metros y colinda con Área vial de la Calzada Xochimilco.

La fracción del área descrita es propiedad del R. Ayuntamiento de Torreón, Coahuila de Zaragoza, de conformidad con lo establecido en los Artículos 21, 22 y 23 del Reglamento de Construcciones para el Estado de Coahuila.

**TERCERO.** La autorización de esta operación es con objeto de llevar a cabo la regularización de la tenencia de la tierra y otorgar certidumbre jurídica del predio. En caso de darle un uso distinto al estipulado, por ese solo hecho se rescindirá el contrato y se revertirá el predio junto con sus accesorios al patrimonio municipal, sin ninguna responsabilidad a cargo del R. Ayuntamiento de indemnizar al solicitante.

**CUARTO.** Esta Comisión de Finanzas encontró que el Municipio de Torreón, ha cubierto los requisitos necesarios para la procedencia de la enajenación de la superficie en mención, para poder otorgar certidumbre jurídica del predio, se lleve a cabo la escrituración del mencionado predio para regularizar la tenencia de la tierra.

Por los motivos que se exponen en los considerandos que anteceden, se estima que se reúnen los elementos de juicio necesario para elaborar el presente dictamen y una vez cumplido lo dispuesto por los Artículos 82, 83, 88 fracción III, 91, 116, 117 y 119 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, los integrantes de la Comisión de Finanzas sometemos a consideración de este H. Congreso del Estado, para su estudio, discusión y en su caso, aprobación, el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO PRIMERO.** Se valida el acuerdo aprobado por el R. Ayuntamiento de Torreón, Coahuila de Zaragoza, para enajenar a título oneroso, un inmueble con una superficie de 72.74 M2., ubicado en la colonia “Carolinas” de esa ciudad, a favor del C. Héctor Herrera Montelongo, el cual se desincorporo con Decreto número 539 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 25 de febrero de 2020.

El inmueble antes mencionado se identifica en área vial de terreno de la Calzada Xochimilco, de la colonia “Carolinas” de esa ciudad, con una superficie de 72.74 M2., y cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Noreste: mide 13.52 metros y colinda con Lote 23, Manzana “H” SMZ.XI

Al Suroeste: mide 13.52 metros y colinda con Calzada Xochimilco.

Al Sureste: mide 5.38 metros y colinda con Calle Aztecas.

Al Noroeste: mide 5.38 metros y colinda con Área vial de la Calzada Xochimilco.

La fracción del área descrita es propiedad del R. Ayuntamiento de Torreón, Coahuila de Zaragoza, de conformidad con lo establecido en los Artículos 21, 22 y 23 del Reglamento de Construcciones para el Estado de Coahuila.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** La autorización de esta operación es con objeto de llevar a cabo la regularización de la tenencia de la tierra y otorgar certidumbre jurídica del predio. En caso de darle un uso distinto al estipulado, por ese solo hecho se rescindirá el contrato y se revertirá el predio junto con sus accesorios al patrimonio municipal, sin ninguna responsabilidad a cargo del R. Ayuntamiento de indemnizar al solicitante.

**ARTÍCULO TERCERO.** El Ayuntamiento del Municipio de Torreón, por conducto de su Presidente Municipal o de su Representante legal acreditado, deberá formalizar la operación que se autoriza y proceder a la escrituración correspondiente.

**ARTÍCULO CUARTO.** En el supuesto de que no se formalice la enajenación que se autoriza, al término de la Administración Municipal actual (2019-2021), se requerirá de una nueva autorización legislativa para ampliar el plazo, a fin de que se pueda continuar o concluir la formalización de las operaciones realizadas con la enajenación del inmueble a que se refiere el artículo primero de este Decreto.

**ARTÍCULO QUINTO.** Los gastos de escrituración y registro que se originen de la operación que mediante este decreto se valida, serán por cuenta del beneficiario.

**ARTÍCULO SEXTO.** El presente decreto deberá insertarse en la escritura correspondiente.

**TRANSITORIOS**

**ARTÍCULO PRIMERO.** El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Congreso del Estado de Coahuila, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 17 de septiembre de 2020.

**POR LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA LXI LEGISLATURA**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** |
| Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga.  Coordinadora | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Gabriela Zapopan Garza Galván  Secretaria | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Verónica Boreque Martínez González. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Rosa Nilda González Noriega. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Zulmma Verenice Guerrero Cázares | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Elisa Catalina Villalobos Hernández | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |

**DICTAMEN** de la Comisión de Finanzas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con relación a una Iniciativa de Decreto enviada por el Presidente Municipal de Castaños, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual solicita la validación de un acuerdo aprobado por el Ayuntamiento, para enajenar a título gratuito, dos fracciones de área vial; la primera con una superficie de 288.00 m2, ubicado en la calle Francisco I. Madero y la segunda una fracción de la calle Guillermo Prieto con superficie de 400.00 m2, ubicado en la colonia “Libertad” de esa ciudad, a favor del Gobierno del Estado de Coahuila, para ser destinado a la Secretaria de Educación con objeto de llevar a cabo la construcción de un plantel educativo, el cual se desincorporo con Decreto número 612 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 26 de junio de 2020.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que, en sesión celebrada por el Pleno del Congreso, de fecha 14 del mes de agosto de año 2020, se dio cuenta la mencionada Iniciativa y turnada a esta Comisión de Finanzas, para su estudio y dictamen.

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO.** Que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 102, fracción I, inciso 10, del Código Municipal, los Ayuntamientos están facultados para acordar el destino o uso de los bienes muebles o inmuebles y de toda propiedad municipal.

**SEGUNDO.** Que, en cumplimiento con lo que señalan los Artículos 302 y 305 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila, el Ayuntamiento según consta en acta de Cabildo de fecha 15 de julio de 2020, se aprobó por unanimidad de los presentes del Cabildo, la validación de un acuerdo aprobado por el Ayuntamiento, para enajenar a título gratuito, dos fracciones de área vial; la primera con una superficie de 288.00 m2, ubicado en la calle Francisco I. Madero y la segunda una fracción de la calle Guillermo Prieto con superficie de 400.00 m2, ubicado en la colonia “Libertad” de esa ciudad, a favor del Gobierno del Estado de Coahuila, el cual se desincorporo con Decreto número 612 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 26 de junio de 2020.

La primera fracción con una superficie de 288.00 m2, ubicada en la calle Francisco I. Madero de la colonia Libertad, cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Norte: mide 8.00 metros y colinda con la calle Francisco I, Madero.

Al Sur: mide 8.00 metros y colinda con la calle Guillermo Prieto.

Al Oriente: mide 52.00 metros y colinda con la calle Francisco I. Madero.

Al Poniente: mide 52.00 metros; 44.00 metros de ellos colindan con predio municipal y 8 metros con calle Guillermo Prieto.

La segunda fracción con una superficie de 400.00 m2, ubicada en la calle Guillermo Prieto de la colonia Libertad, cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Norte: mide 50.00 metros y colinda con predio municipal.

Al Sur: mide 50.00 metros y colinda con la calle Guillermo Prieto.

Al Oriente: mide 8.00 metros y colinda con calle Francisco I. Madero.

Al Poniente: mide 8.00 metros y colinda con predio municipal.

**TERCERO.** La autorización de esta operación es exclusivamente con objeto de llevar a cabo la construcción de un plantel educativo. En caso de que a dicho inmueble se le dé un uso distinto a lo estipulado, por ese solo hecho automáticamente se dará por rescindida la enajenación y el predio será reintegrado al Municipio.

**CUARTO.** Esta Comisión de Finanzas encontró que el Municipio de Castaños, ha cubierto los requisitos necesarios para la procedencia de la enajenación de la superficie en mención, para poder dar cumplimiento a las funciones de dicha Secretaria, el cual pretenden beneficiar a toda la comunidad, brindando un espacio digno para otorgar educación nivel primaria a los residentes de esa colonia.

Por los motivos que se exponen en los considerandos que anteceden, se estima que se reúnen los elementos de juicio necesario para elaborar el presente dictamen y una vez cumplido lo dispuesto por los Artículos 82, 83, 88 fracción III, 91, 116, 117 y 119 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, los integrantes de la Comisión de Finanzas sometemos a consideración de este H. Congreso del Estado, para su estudio, discusión y en su caso, aprobación, el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO PRIMERO.** Se valida el acuerdo aprobado por el R. Ayuntamiento de Castaños, Coahuila de Zaragoza, para enajenar a título gratuito, dos fracciones de área vial; la primera con una superficie de 288.00 m2, ubicado en la calle Francisco I. Madero y la segunda una fracción de la calle Guillermo Prieto con superficie de 400.00 m2, ubicado en la colonia “Libertad” de esa ciudad, a favor del Gobierno del Estado de Coahuila, el cual se desincorporo con Decreto número 612 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 26 de junio de 2020.

La primera fracción con una superficie de 288.00 m2, ubicada en la calle Francisco I. Madero de la colonia Libertad, cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Norte: mide 8.00 metros y colinda con la calle Francisco I, Madero.

Al Sur: mide 8.00 metros y colinda con la calle Guillermo Prieto.

Al Oriente: mide 52.00 metros y colinda con la calle Francisco I. Madero.

Al Poniente: mide 52.00 metros; 44.00 metros de ellos colindan con predio municipal y 8 metros con calle Guillermo Prieto.

La segunda fracción con una superficie de 400.00 m2, ubicada en la calle Guillermo Prieto de la colonia Libertad, cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Norte: mide 50.00 metros y colinda con predio municipal.

Al Sur: mide 50.00 metros y colinda con la calle Guillermo Prieto.

Al Oriente: mide 8.00 metros y colinda con calle Francisco I. Madero.

Al Poniente: mide 8.00 metros y colinda con predio municipal.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** La autorización de esta operación es exclusivamente con objeto de llevar a cabo la construcción de un plantel educativo. En caso de que a dicho inmueble se le dé un uso distinto a lo estipulado, por ese solo hecho automáticamente se dará por rescindida la enajenación y el predio será reintegrado al Municipio.

**ARTÍCULO TERCERO.** El Ayuntamiento del Municipio de Castaños, por conducto de su Presidente Municipal o de su Representante legal acreditado, deberá formalizar la operación que se autoriza y proceder a la escrituración correspondiente.

**ARTÍCULO CUARTO.** En el supuesto de que no se formalice la enajenación que se autoriza, al término de la Administración Municipal actual (2019-2021), se requerirá de una nueva autorización legislativa para ampliar el plazo, a fin de que se pueda continuar o concluir la formalización de las operaciones realizadas con la enajenación del inmueble a que se refiere el artículo primero de este Decreto.

**ARTÍCULO QUINTO.** Los gastos de escrituración y registro que se originen de la operación que mediante este decreto se valida, serán por cuenta del beneficiario.

**ARTÍCULO SEXTO.** El presente decreto deberá insertarse en la escritura correspondiente.

**TRANSITORIOS**

**ARTÍCULO PRIMERO.** El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Congreso del Estado de Coahuila, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 17 de septiembre de 2020.

**POR LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA LXI LEGISLATURA**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** |
| Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga.  Coordinadora | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Gabriela Zapopan Garza Galván  Secretaria | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Verónica Boreque Martínez González. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Rosa Nilda González Noriega. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Zulmma Verenice Guerrero Cázares | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Elisa Catalina Villalobos Hernández | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |

1. Coordinación General de Planeación y Evaluación (2015): *Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas de México, 2015* Gobierno de la República y Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, México, pág. 40. [↑](#footnote-ref-1)
2. Gobierno de Coahuila (2013): *Diagnóstico situacional de las mujeres en las tribus Kikapú y Negros Mascogos de Múzquiz, Coahuila*, Secretaría de las Mujeres, Coahuila. Disponible en: <http://www.coahuilatransparente.gob.mx/otrainfonew/documentos_otrainfo/Diagnostico_Mujeres_Indigenas_de_Coahuila.pdf>. [↑](#footnote-ref-2)
3. Consejo de Derechos Humanos (2018): *Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas sobre su visita a México (A/HRC/39/17/Add.2)*, Asamblea General de las Naciones Unidas, Ginebra. [↑](#footnote-ref-3)
4. Coordinación General de Planeación y Evaluación (2015): *Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas de México, 2015*. Gobierno de la República y Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, México, pág. 18. [↑](#footnote-ref-4)
5. Requena, Carlos. (2017). Lenguaje jurídico incomprensible. Forbes. Disponible en: <https://www.forbes.com.mx/lenguaje-juridico-incomprensible/> [↑](#footnote-ref-5)
6. Cossío J. y Lara, R. (2012). El país de las sentencias institucionales. Nexos. Disponible en: <https://www.nexos.com.mx/?p=14832> [↑](#footnote-ref-6)
7. Requena, Idem. [↑](#footnote-ref-7)
8. Requena Idem. [↑](#footnote-ref-8)
9. Consejo de la Judicatura Federal (SF). “Pautas para la elaboración de resoluciones”. Disponible en: <https://www.cjf.gob.mx/resources/lenguajeSencillo/pautasElaboracionResoluciones.pdf> [↑](#footnote-ref-9)
10. Ver. AMPARO EN REVISIÓN 1368/2015. [↑](#footnote-ref-10)
11. González, G. (2019). Sentencias y lenguaje claro. Centro de Información Judicial. Disponible en: <https://www.cij.gov.ar/nota-33385-Sentencias-en-lenguaje-claro.html> [↑](#footnote-ref-11)
12. UNICEF (1989). Convención de los Derechos del Niño. Recuperado de:

    https://www.unicef.org/mexico/media/991/file/Convenci%C3%B3n%20sobre%20los%20Derechos%20del%20Ni%C3%B1o.pdf [↑](#footnote-ref-12)
13. UNICEF. (2012): El derecho a vivir en familia. Recuperado de:

    https://www.bibliotecaunicef.uy/doc\_num.php?explnum\_id=144 [↑](#footnote-ref-13)
14. Comité de los Derechos del Niño. (2015): Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto consolidados de México. Recuperado de:

    https://www.hchr.org.mx/images/doc\_pub/CRC\_C\_MEX\_CO\_4-5.pdf [↑](#footnote-ref-14)
15. Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023, Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza [México], 2019, Recuperado de:

    https://coahuila.gob.mx/archivos/pdf/Publicaciones/PED-Actualizacio%CC%81n-2019-WEB.pdf [↑](#footnote-ref-15)